



CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001

VII Legislatura

Núm. 79

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.^a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 75

celebrada el martes, 24 de abril de 2001

	<u>Página</u>
ORDEN DEL DÍA:	
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados	3953
Toma en consideración de Propositiones de Ley:	
— Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica reguladora del Derecho de Asociación. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 114-1, de 23 de febrero de 2001. (Número de expediente 122/000101.)	3954
Modificación del orden del día	3964
Toma en consideración de Propositiones de Ley (continuación):	
— Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de protección de las familias numerosas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, núm. 99-1, de 22 de enero de 2001. (Número de expediente 122/000086.)	3964
Propositiones no de Ley:	
— Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre creación de una nueva oficina consular de carrera en Venezuela. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 160, de 6 de abril de 2000. (Número de expediente 162/000262.)	3973

	Página
— Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora de los derechos pasivos del personal militar profesional con una relación de servicios no permanente. (Número de expediente 162/000268.)	3979
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:	
— Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para consolidar, profundizar y mejorar el nivel asistencial de atención primaria, muy especialmente en el ámbito del INSALUD. (Número de expediente 173/000058.)	3986
— Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en materia de siniestralidad laboral. (Número de expediente 173/000059.)	3994

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

	Página
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados	3953
	Página
Toma en consideración de Propositiones de Ley	3954
	Página
Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica reguladora del derecho de asociación	3954

*Defiende la proposición de ley, para su toma en consideración, la señora **Pajín Iraola**, del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que esta proposición de ley que regula el derecho de asociación es fruto del trabajo intenso de su grupo parlamentario a través de más de cien asociaciones, mediante reuniones monográficas en esta Cámara y por medio de encuestas, y lo hacen desde el convencimiento de que un proyecto de estas características no se puede elaborar al margen de los planteamientos de las propias organizaciones del tercer sector, porque son ellas las que mejor conocen los problemas que necesitan respuesta. Explica que el derecho de asociación es el último de los derechos fundamentales reconocido por la Constitución, que aún no cuenta con un desarrollo legislativo, siendo la actual Ley de asociaciones del año 1964, por lo que consideran llegado el momento de abordar el desarrollo del*

derecho de asociación y quieren hacerlo desde el consenso. La presente proposición de ley, añade, tiene un doble objetivo: por un lado, establecer un marco legal para el desarrollo del artículo 22 de la Constitución y, por otro, dar cumplimiento al mandato del artículo 9.2 mediante el fomento del asociacionismo y la participación ciudadana. Explica el contenido de la proposición de ley y pide, en aras de la democracia, de la vertebración social, de la participación y del reconocimiento de 11.000 asociaciones que trabajan día a día en nuestro país, que el debate que se abra no sea partidista sino de todas y todos los ciudadanos.

*En turno de fijación de posiciones intervienen los señores **Núñez Castain**, del Grupo Parlamentario Mixto; **Mardones Sevilla**, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; **Erkoreka Gervasio**, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); **Rejón Gieb**, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; **López de Lerma i López**, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y **López-Medel Bascones**, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.*

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica reguladora del derecho de asociación, se rechaza por 123 votos a favor y 177 en contra.

	Página
Modificaciones del orden del día	3964

*La señora **presidenta**, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sen-*

tido de que la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno a favor de la economía productiva, que figura como punto 34, pase a ser debatido en primer lugar del punto V, correspondiente a interpelaciones urgentes, lo que se aprueba por asentimiento.

Asimismo la señora presidenta, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el apartado VII, correspondiente a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, pase a ser debatido antes del apartado VI, correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, lo que se aprueba por asentimiento.

Página

Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación) 3964

Página

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de protección de las familias numerosas 3964

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Silva Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por entender que constituye una necesidad ineludible desde el punto de vista social y cumple al mismo tiempo un mandato legislativo claro y hasta lejano, puesto que hace ya casi cuatro años que el Congreso de los Diputados aprobó el informe de la subcomisión creada al efecto –también a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán- para el estudio de la situación actual de la familia en España y para formular al Gobierno propuestas en esta materia. Explica dicho informe y considera que es el momento oportuno de abordar soluciones porque así lo impone la situación de la sociedad española en cuanto a la exigencia de equidad en el tratamiento dado a la natalidad y la política europea. A continuación expone el contenido de la proposición de ley que, entiende, es asumible y necesita ser implementada con urgencia, y afirma que su grupo renuncia a cualquier protagonismo con tal de que la iniciativa sea tomada en consideración, mostrando su disposición a escuchar al sector y a las asociaciones antes del trámite de enmiendas.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Txueka Isasti, del Grupo Par-

lamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; García Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de protección de las familias numerosas, se rechaza por 138 votos a favor y 155 en contra.

Página

Proposiciones no de Ley 3973

Página

Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre creación de una nueva oficina consular de carrera en Venezuela .. 3973

Presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria el señor Rivero Baute. Esta iniciativa, explica, se debe a la preocupación compartida, tanto por el Gobierno de España como por todos los grupos parlamentarios, por la situación que atraviesan en estos momentos aproximadamente dos millones de personas que viven fuera de España. Elogia el papel de los emigrantes en el desarrollo económico español y exige que hoy, cuando la mayor parte de los países receptores de la emigración están pasando por situaciones complicadas y difíciles desde el punto de vista político y económico, se les devuelva algo de lo que en su día entregaron a su patria. Explica las variaciones políticas, sociales y económicas acaecidas en España y en los países receptores desde los años 50 ó 60 y, basándose en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista aprobada por el Pleno hace unas semanas, relativa a la mejora de la infraestructura de la Administración española en los países que en su día fueron receptores de emigrantes españoles, se refiere a Venezuela, considerándolo un caso singular por la extensión de su terreno y por el número de emigrantes y descendientes. Concreta su petición de un segundo consulado de carrera en Venezuela y recuerda el compromiso del presidente Aznar a finales del año 1999 de ponerlo en marcha.

En defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley interviene el señor Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Grau Buldú, del

*Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y **Hernández Rodríguez**, del Grupo Parlamentario Socialista.*

*A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor **Rivero Baute**.*

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre creación de una nueva oficina consular de carrera en Venezuela, en los términos aceptados por el grupo proponente, se aprueba por 287 votos a favor.

Página

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejora de los derechos pasivos del personal militar profesional con una relación de servicios no permanente 3979

*Defiende la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor **Atencia Robledo**. Se refiere en primer lugar al debate celebrado en el Pleno de la Cámara el 3 de abril con ocasión de dos iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida que proponían ampliar la protección social de los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería modificando la Ley 17/1999. El portavoz del Grupo Popular opina que es necesario desarrollar dicha ley pero no modificarla, porque quedó demostrado en el debate que no existe ningún tipo de desamparo social para los soldados y marineros profesionales que tienen las mismas prestaciones que los militares permanentes, sin más diferencias que las debidas a la pertenencia a uno u otro grupo regulador. No obstante, añade, hay cosas que hay que desarrollar y mejorar, de ahí la iniciativa que hoy tiene el honor de defender.*

*En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores **Rodríguez Sánchez**, del Grupo Parlamentario Mixto, y **Marsal Muntalá**, del Grupo Parlamentario Socialista.*

*En turno de fijación de posiciones intervienen los señores **Mardones Sevilla**, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; **Alcaraz Masats**, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y **Maldonado Gili**, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).*

*A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor **Atencia Robledo**.*

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre mejo-

ra de los derechos pasivos del personal militar profesional con una relación de servicios no permanente, en los términos aceptados por el grupo proponente, se aprueba por unanimidad.

Página

Mociones consecuencia de interpellaciones urgentes 3986

Página

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para consolidar, profundizar y mejorar el nivel asistencial de atención primaria, muy especialmente en el ámbito del Insalud 3986

*Defiende la moción consecuencia de interpellación urgente del Grupo Parlamentario Socialista el señor **Arola Blanquet**. Muestra su confianza en que el Grupo Popular entienda por fin, después de tres iniciativas sobre el mismo tema, que el Partido y el Grupo Socialista creen en el modelo de atención primaria y se congratulan de que el portavoz del Grupo Popular, al parecer, crea también firmemente en este modelo. Sin embargo, añade, en el funcionamiento diario del modelo y de los equipos que lo desarrollan aparecen problemas y disfunciones que es preciso solucionar cuanto antes. La moción que su grupo presenta hoy ante la Cámara está encaminada a incrementar los esfuerzos para mejorar la atención a los ciudadanos y para aumentar la satisfacción de los trabajadores profesionales; en definitiva, pretende potenciar una asistencia de calidad y asegurar la equidad del sistema. Finalmente añade que, aunque la responsabilidad sea del Insalud y del Gobierno, no se olvidan de la repercusión que cualquiera de las medidas propuestas pudiera tener en aquellas comunidades autónomas que ya tienen transferida la gestión, por lo que abogan por un servicio nacional de salud que sea la suma de los servicios de las comunidades autónomas.*

*En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras **Riera i Ben**, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); **Julios Reyes**, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor **Zambrano Vázquez**, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.*

*En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras **Uría Etxebarria**, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y **Castro Fonseca**, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.*

A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor **Arola Blanquet**.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para consolidar, profundizar y mejorar el nivel asistencial de atención primaria, muy especialmente en el ámbito del Insalud, en sus propios términos, se rechaza por 114 votos a favor, 145 en contra y 11 abstenciones.

Página

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en materia de siniestralidad laboral 3994

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor **Saura Laporta**, del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza su intervención manifestando que Iniciativa per Catalunya-Verds apoya y se solidariza con los actos y movilizaciones que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han planteado para el próximo viernes en respuesta al llamamiento de los sindicatos europeos en contra de los accidentes laborales. Acusa al Gobierno del Partido Popular de permanecer pasivo y de considerar este problema como secundario a pesar de las tres interpelaciones con sus consecuentes mociones, de una iniciativa legislativa popular y de las movilizaciones de los sindicatos, con dos huelgas generales en el sector de la construcción. Reitera los datos dados en su interpelación urgente de la semana pasada y se refiere a las declaraciones del director de la Agencia Europea de la Seguridad y Salud Laboral que calificaba de inaceptablemente alta la siniestralidad laboral en España, encontrando las causas en la carencia histórica en el Estado español de una cultura de la prevención, en el hecho de que la Ley de prevención de riesgos laborales no se ha puesto en práctica en su totalidad y en algunos factores del reciente desarrollo económico-social. Explica las propuestas que plantean en su moción para responder de forma genérica a estas tres causas y opina que éstas podrían tener el consenso de los grupos parlamentarios, ya que intentan hacer frente a un problema que, a pesar de que el ministro de Trabajo lo considera secundario, sigue siendo el principal problema sangrante del mundo laboral.

En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores **Ruiz López (don Antero)**, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; **González Vigil**, del Grupo Parlamentario Socialista, y **Grau Buldú**, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

En turno de fijación de posiciones interviene el señor **Pérez Corgos**, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor **Saura Laporta**.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en materia de siniestralidad laboral, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 109 votos a favor y 143 en contra.

Se suspende la sesión a las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

La señora **PRESIDENTA**: Se abre la sesión.

Asunto previo al orden del día de la sesión plenaria del martes día 24 de abril de 2001: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de dos señores diputados.

Por el artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Rafael Carriegas Robledo, en sustitución de don Jaime Mayor Oreja, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.

Don Rafael Carriegas Robledo, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor **CARRIEGAS ROBLEDO**: Sí, prometo.

La señora **PRESIDENTA**: Don Rafael Carriegas Robledo ha adquirido la condición plena de diputado. **(Aplausos.)**

Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral Central, don José Ramón Calpe Saera, en sustitución de don Fernando Villalonga Campos, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.

Don José Ramón Calpe Saera, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor **CALPE SAERA**: Sí, prometo.

La señora **PRESIDENTA**: Don José Ramón Calpe Saera ha adquirido la condición plena de diputado. **(Aplausos.)**

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN. (Número de expediente 122/000101.)

La señora **PRESIDENTA**: Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica reguladora del derecho de asociación.

Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Pajín. **(Rumores.)**

Señorías, ruego guarden silencio.

Adelante, señora Pajín.

La señora **PAJÍN IRAOLA**: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar quiero dar la bienvenida a esta Cámara y saludar a las asociaciones que han acudido a ver este debate, asociaciones del ámbito juvenil, del Consejo de la Juventud de España, asociaciones de mujeres, del ámbito vecinal y del ámbito de la discapacidad. Se trata de un debate, señorías, oportuno, necesario y aclamado por la mayoría de las asociaciones de nuestro país, que lo estaban esperando como agua de mayo. **(Rumores.)**

La señora **PRESIDENTA**: Un momento, señora Pajín. Adelante.

La señora **PAJÍN IRAOLA**: En este contexto, el Grupo Parlamentario Socialista trae a esta Cámara una proposición de ley que regula el derecho de asociación, una proposición de ley fruto del trabajo intenso de nuestro grupo parlamentario a través de más de 100 asociaciones, mediante reuniones monográficas en esta Cámara y por medio de encuestas. En definitiva, una proposición con un largo recorrido que presentamos hoy ante esta Cámara desde el convencimiento de que un proyecto de estas características no se puede elaborar al margen de los planteamientos de las propias organizaciones del tercer sector, porque son ellas, señorías, las que mejor conocen los problemas a los que tiene que dar respuesta esta ley. **(El señor Vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)**

Como saben, señorías, el derecho de asociación es el último derecho fundamental reconocido por nuestra Constitución que aún no cuenta con un desarrollo legislativo. La actual Ley de asociaciones es una ley preconstitucional que data del año 1964, habiendo quedado superada por nuestro ordenamiento jurídico y

creemos que el desarrollo en España durante los últimos años de la sociedad civil o lo que se ha venido denominando el tercer sector hacen necesario ya un nuevo marco legal que ofrezca un instrumento eficaz para el fomento y desarrollo del asociacionismo y que al mismo tiempo dé respuestas a los problemas con los que se encuentran en estos momentos las asociaciones, fruto de esa legislación obsoleta. En este contexto, señorías, y después de 20 años de vigencia constitucional, sin duda ha llegado el momento de abordar el desarrollo del derecho de asociación y por supuesto desde el consenso. Hay que hacerlo, señorías, de forma que se fomente y se facilite, pues se trata de una obligación inexcusable teniendo en cuenta, como decíamos, que ha sido superada y que los movimientos sociales han estado a la cabeza de la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos y la dignidad de las personas, habiendo contribuido decisivamente al fomento del espíritu de solidaridad con los más desfavorecidos: los enfermos, los discapacitados y los excluidos.

Por tanto, señorías, la presente proposición de ley tiene un doble objetivo: no sólo establecer un marco legal para el desarrollo del artículo 22 de la Constitución, sino también dar cumplimiento al mandato del artículo 9.2 mediante el fomento del asociacionismo y la participación ciudadana. Es aquí donde quiero detenerme, pues el grado de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y en la resolución de sus principales necesidades y problemas muestra también el grado de madurez de nuestra democracia. Así lo demuestran las más de 11.000 ONG, según el registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por lo que es fundamental facilitarles la vertebración social y fomentar su participación. A todo ello, señorías, se suma que la propia Comisión Europea, en la comunicación de 1998 sobre el fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa, no sólo reconoce el papel del tercer sector en todos los ámbitos de la vida social, contribuyendo a la creación de empleo, a la ciudadanía activa y a la democracia, sino que además insta a los Estados miembros a armonizar la legislación por la que se rigen las asociaciones, a revisar los propios regímenes fiscales y a potenciar las relaciones de cooperación entre las autoridades públicas y el tercer sector.

Como pueden deducir, la necesidad no sólo de regular el derecho de asociación, sino de desarrollar el artículo 9.2 de la Constitución, donde se obliga a los poderes públicos a fomentar la participación ciudadana, es de donde bebe el espíritu de dicha proposición de ley.

Desde luego, y como no podía ser de otra manera, el Grupo Parlamentario Socialista ha apostado por que todas las personas, con independencia de su nacionalidad y con independencia de su estado, puedan asociarse en su derecho constitucional. Como pueden deducir, señorías, no les estamos devolviendo el derecho, que siempre lo tuvieron, sino el ejercicio del mismo a los

extranjeros que residen hoy en nuestro país. Además, hemos apostado fuertemente por establecer garantías de funcionamiento democrático del movimiento asociativo, dándoles los derechos a los asociados a acceder a la información y a las decisiones de sus propias juntas directivas. Hemos creído oportuno también reforzar los principios de igualdad y de no discriminación, de tal forma que cualquier asociación que encuentre algún tipo de discriminación de alguna persona por razones de género o de pertenencia a grupos de minorías étnicas se vería penalizada con el no acceso a subvenciones y a privilegios que otras asociaciones sí tendrían. Además, como les decía, hemos desarrollado un amplio capítulo dedicado al fomento del asociacionismo y la participación ciudadana por parte de los poderes públicos. Para ello, hemos creado un consejo superior de asociaciones como órgano consultivo, para abordar todos los asuntos de Estado y de Gobierno, donde las asociaciones tienen cosas que aportar.

El Grupo Socialista ha dado un paso más allá en la participación ciudadana en lo que tiene que ver la cooperación de los ciudadanos con los asuntos públicos, porque no queremos que vuelva a pasar lo que ha ocurrido en estos últimos meses en nuestro país, porque creemos en la ciudadanía y en su participación y porque no queremos volver a ver dinamitados foros como el de la inmigración o el consejo de cooperación, donde el Gobierno ha vulnerado todos los principios democráticos y de representatividad del asociacionismo y donde ha querido elegir, con arbitrariedad y a dedo, a sus propias asociaciones.

Vuelvo a insistir en que creemos en una ciudadanía activa, donde ella misma democráticamente se elija y pueda por tanto colaborar en los asuntos públicos de nuestro país. Además, hemos querido establecer controles sobre la remuneración de los cargos directivos, dejando abierta a las asociaciones esta posibilidad, pero estableciendo mecanismos tales como que siempre aparezcan en los estatutos de la asociación y en qué partida del presupuesto de la asociación aparece para remunerar a dichos cargos públicos. Además, hemos querido reforzar la autonomía de las asociaciones estableciendo planes plurianuales de ayuda al asociacionismo que tendrían que dar cuenta en esta Cámara. En esa misma línea, contemplamos la posibilidad del control parlamentario, como les decía, donde el Gobierno deberá dar cuenta en el Congreso de los Diputados del correspondiente plan plurianual, que podrá controlar así las políticas públicas de ayuda.

También hemos querido establecer un mecanismo ágil de registro, en colaboración con las comunidades autónomas, registro, señorías, que, como no puede ser de otra manera y como así nos lo pedían las asociaciones, hemos ubicado en Presidencia, puesto que a nadie se le escapa que si la actual ley preconstitucional estaba en el Ministerio del Interior no es precisamente porque ese ministerio, en aquellos tiempos, velara por la

democracia y la participación ciudadana. Entendemos que la transversalidad y la participación ciudadana deben pertenecer a Presidencia.

En este sentido, hemos aclamado siempre y en el momento en que la presentamos, la necesidad de consenso, no solo por parte de las asociaciones con las que hemos trabajado codo a codo, sino también de todos los grupos políticos. Espero que el Gobierno no cometa el mismo error que ha cometido con la aprobación de la Ley de extranjería al hacerlo de manera unilateral, utilizando su rodillo de mayoría absoluta, porque esto podría dañar gravemente a nuestro sistema democrático. Tan importante como aprobar una ley con amplio consenso parlamentario es que el Gobierno se sienta a negociar con todas las organizaciones sin discriminación de tipo ideológico y que pueda recoger toda la experiencia y todas las aportaciones que tengan que hacer.

Resulta cuanto menos curioso que cada vez que el Grupo Socialista, dentro de su oposición útil y propositiva, presenta una iniciativa se nos achaque la rapidez con la que hacemos el texto. No voy a repetir el recorrido que tiene esta ley, fruto del trabajo comenzado ya en la pasada legislatura donde todas las organizaciones han podido aportar y hemos consensuado con todas ellas tranquilamente la proposición que hoy presentamos. Resulta también sospechoso que se nos tilde de oportunistas si hablamos de consenso, cuando hemos invitado a los grupos a consensuar, a acercar posturas, incluso a mejorar técnicamente, si así se requiriera, una proposición de ley abierta desde un principio no sólo a las asociaciones, sino también a los diferentes grupos parlamentarios.

Finalmente, si ese presunto proyecto de ley, que tanto ha anunciado el Gobierno pero que no acaba de remitir a la Cámara, se parece tanto a nuestra proposición, bienvenido sea ese acercamiento. Y si eso es así no encuentro ni un solo elemento por el que el Grupo Popular vaya a votar en contra de la proposición de ley del Grupo Socialista.

Señorías, una vez más, en aras de la democracia, de la vertebración social, de la participación y del reconocimiento de 11.000 asociaciones que trabajan día a día y codo a codo en nuestro país, pedimos hoy el consenso de una proposición de ley que quiere aumentar la participación de los ciudadanos y, en definitiva, que no sea un debate partidista, sino un debate de todas y todos los ciudadanos.

Gracias, señor presidente. **(Aplausos.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Pajín.

¿Algún grupo desea fijar posición en contra? **(Pausa.)** ¿Grupos que deseen fijar posición? **(Pausa.)** Señor Núñez.

El señor **NÚÑEZ CASTAIN**: Señor presidente, intervengo para manifestar nuestro apoyo a la tramitación de este proyecto de ley. Desde nuestro punto de vista facilitar el asociacionismo y la participación no es otra cosa que facilitar la convivencia, que facilitar la vida económica, política y social de un territorio. El único contrapeso que pueda tener esta situación mundial globalizadora o de exceso de presión de lo macro sobre el individuo está en la fuerza de las asociaciones, en la fuerza de la vida civil, en la fuerza de la organización de abajo arriba. Estamos ante un desarrollo constitucional necesario, porque este aspecto está basado en leyes preconstitucionales. Nos parece que hay tiempo en esta Cámara de incorporar matices, de incorporar cuestiones individuales de cada uno de los grupos, pero en este momento fomentar este proyecto de ley es fomentar algo positivo para la mejor convivencia en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.

Señor Mardones.

El señor **MARDONES SEVILLA**: Muchas gracias, señor presidente.

He leído con detenimiento esta proposición de ley que nos plantea hoy el Grupo Parlamentario Socialista. Y la he leído siguiendo una técnica muy particular mía a veces, que es leerla de atrás para adelante. Me encuentro —lo ha anunciado muy de pasada la portavoz de Grupo Parlamentario Socialista— que no se pretende tan sólo derogar la Ley 191 de 1964, sino derogar un artículo de la vigente Ley de extranjería. Yo creo que eso es mala técnica. O traemos aquí una ley exclusivamente para actualizar y cumplir con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución española, que es necesario tener una ley constitucional reguladora del derecho de asociación de toda la sociedad civil, pero sin hacerle ninguna otra mezcla, o si lo que se pretende aquí también es colar una modificación de la Ley de extranjería en su derogación expresa del artículo 8, que va a permitir, si se aprobase, el principio de legalidad, de que todo inmigrante ilegal tiene el derecho de asociación —cuestión en la que yo ahora no voy a entrar—, sería contradictorio con lo que se está diciendo en el texto del Grupo Parlamentario Socialista de remitir a los militares a unas leyes específicas.

Mi grupo viene manteniendo una igualdad constitucional de todos los ciudadanos del Estado español, sean ciudadanos de paisano o lo sean de uniforme. Por tanto, no estamos de acuerdo en que una ley de asociaciones constitucional y con fecha posterior a la Constitución española haga esta remisión excluyente, con la que se daría la tremenda paradoja de que pudiéramos reconocer a los inmigrantes ilegales el derecho de asociación y negárselo a los militares profesionales españoles.

Verdaderamente eso supone una contradicción por la que este diputado y su grupo no están dispuestos a pasar. **(La señora Pajín Iraola hace signos negativos.)** Y no me diga que no, porque hacen una remisión a las leyes específicas, y las leyes específicas les van a aplicar las leyes no constitucionales que rigen la prohibición al principio de asociación al estamento militar, como son las Reales Ordenanzas, que se lo prohíben taxativamente. Si se aceptara la disposición derogatoria, se daría la paradoja, con lo que ha anunciado el señor ministro de Defensa en cuanto a la posibilidad de admitir extranjeros en las Fuerzas Armadas españolas, de que lo que reconocieramos a un extranjero civil en cuanto a asociacionismo, si fuera a servir a la Legión o a alguna fuerza especial en la que se admitiera el recurso de ciudadanos extranjeros en estas fuerzas, se le niega como ciudadano de uniforme.

En segundo lugar, y entro ya de lleno en el contenido de la proposición, mi grupo quiere ser consecuente con lo que aprobamos en esta Cámara, y que vaya el endoso a la responsabilidad del Gobierno. Porque aquí se votó y aprobamos, en su día —creo recordar que fue por una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán de *Convergència i Unió*, que tuvo la feliz idea de reconsiderar el incumplimiento que se venía sistemáticamente haciendo, por todos los gobiernos que ha habido en España desde que se aprobó la Constitución—, la creación de una ley de asociaciones que viniera a superar el marco preconstitucional de la Ley 191/1964, por la que todavía nos seguimos rigiendo, verdadera antigualla que nos queda, como un farolillo rojo, de las obligaciones constitucionales que no se han cumplido. Por tanto, mi grupo quiere aprovechar este debate y esta oportunidad de la iniciativa socialista para recordar al Gobierno que está obligado por aquella enmienda que se aprobó aquí, y que el Gobierno tiene que cumplir trayendo a la Cámara un proyecto de ley sobre el régimen de la libertad de asociacionismo que consagra nuestra Constitución, una ley que desarrolle perfectamente estos ámbitos. Esa es una obligación que hay que cumplir recurriendo —y mi grupo lo apoya— a una condición de ámbito social, que ha señalado la portavoz socialista, la de que se traigan estas leyes escuchando y procurando el consenso con las asociaciones de la sociedad civil que tengan algo que decir. Lo que no sé es si la proposición de ley que trae hoy el Grupo Socialista ha cubierto este trámite, si ha consultado a las distintas asociaciones, porque ha hecho salutación a las asociaciones presentes y yo no sé si están todas o parte, pero si esto es así tiene que ir acompañado de un compromiso hecho por el Gobierno, porque no me vale de nada un brindis al sol aquí para unas determinadas asociaciones, porque esto sería engañar al resto del asociacionismo español, ya que son muy variadas, muy complejas y muy diversas las motivaciones que llevan al principio del asociacionismo.

Tercera cuestión. Se entra aquí en una situación de reglamentar una serie de competencias y actividades que muchas comunidades autónomas, entre ellas la de Canarias, tienen reconocidas en sus estatutos de autonomía sobre las asociaciones en su ámbito territorial de comunidad autónoma. Y nosotros entendemos que el proyecto de ley que en su día traiga el Gobierno, obligado como está a ello, y que aprueben estas Cortes, debe reconocer los dos niveles competenciales, el de la Administración estatal y el de la Administración autonómica, para no conculcar ninguno de los principios de soberanía que tienen las comunidades autónomas.

Cuarta y última cuestión. Si la ley de asociaciones que se apruebe en este país va a tener la minuciosidad reglamentista que trae esta ley, apaga y vámonos, porque estamos en una defensa de derechos constitucionales y no se puede meter un reglamento tan exigente como el que trae el texto articulado de este proyecto de ley. Una ley de asociaciones es reconocer a la sociedad civil, empezando por sus asociaciones, una madurez de responsabilidad constitucional y de responsabilidad con el Estado democrático de derecho que tenemos. Sin embargo, si se trata de embridar a las asociaciones con este reglamento que trae implícito la proposición de ley del Grupo Socialista, mal andamos de responsabilidad y madurez democrática en la sociedad civil española. Un derecho de asociaciones debe ser lo más simplificado posible, como pueden ser las exigencias para inscribir una empresa en el Registro Mercantil. Un listón de exigencias reglamentarias tan minucioso coarta las libertades constitucionales del ordenamiento. Mal les iba a ir a las entidades que quieran acogerse a una ley si quedan metidas en un laberinto de burocratización, de interferencias y de competencias de la Administración central del Estado. Señores, vamos a darles un margen de confianza. Llévase un registro neutral en el Ministerio del Interior, si se quiere, donde han estado los registros de asociaciones, un registro puramente de alta, como pueden tener, como he dicho, los registros mercantiles, con unos requisitos mínimos de transparencia, pero sin que la Administración del Estado trate de inmiscuirse en reglamentar hasta el detalle las señas de identidad que en una sociedad madura no están democráticamente aceptadas si no es dentro del principio de corresponsabilidad.

El derecho de asociación puede estar así plenamente reconocido. Los partidos políticos nos inscribimos en el registro correspondiente y las exigencias son mínimas, claras, constitucionales y contundentes. ¿Qué diríamos los partidos políticos si se nos trajera una ley de libertad de inscripción de partidos políticos, con las exigencias que tiene la ley actual, que tuviera los rigores que trae el texto prolijo y articulado de este tema? Mi grupo no está de acuerdo con embridar las libertades que deben existir para las asociaciones en un sistema verdaderamente reglamentista, verdaderamente patológico.

A nuestro juicio, un proyecto de ley de asociaciones —y que esto también sirva de referencia de cómo debe

traer el Gobierno el proyecto— es un proyecto de máximas libertades constitucionales y de mínimos requisitos reglamentarios para que no se vean coartadas en su libertad. Es muy difícil que pueda constituirse una nueva asociación como tal asociación libre al amparo de una ley similar a esta proposición que viene hoy aquí. Queremos asociaciones libres y democráticas, constitucionales, pero no limitadas ni constreñidas por unas exigencias que difícilmente podrían superar. Libertad, sí; asociaciones, sí; constitucionales, sí; democráticas, sí; burocratizadas hasta este extremo, no.

Por estas razones, mi grupo votará en contra de la toma en consideración de esta proposición.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.

Señor Erkoreka.

El señor **ERKOREKA GERVASIO**: Gracias, señor presidente.

Señorías, es la tercera vez en esta legislatura que el Pleno de la Cámara conoce de una iniciativa específicamente relacionada con el desarrollo del derecho fundamental de asociación, que reconoce y regula en sus aspectos básicos el artículo 22 de la Carta Magna.

Ciertamente, el modo en que se han presentado y abordado estas tres iniciativas denota tristemente que, con frecuencia, los grupos parlamentarios prefieren utilizar el Congreso de los Diputados para jugar al gato y al ratón que para resolver los problemas de los ciudadanos o para encarar, desde el debate enriquecedor, los retos y oportunidades que se presentan a la sociedad española en este comienzo de siglo. En efecto, recién iniciada la legislatura, el 16 de mayo de 2000, se debatía en esta misma Cámara una proposición no de ley del Grupo Popular que instaba al Gobierno a elaborar y remitir a la Cámara un proyecto de ley que cumplimentase el desarrollo que aún requiere el artículo 22 de la Constitución. La iniciativa —ya lo señalábamos en aquella ocasión— no dejaba de ser chocante porque el Partido Popular había incluido expresamente el desarrollo de este derecho en el programa con el que concurrió a las elecciones del pasado mes de marzo del año 2000, y por si ello no fuera suficiente el presidente del Gobierno se comprometió a hacerlo, también de modo expreso, en el debate de investidura. Evidentemente, la proposición obtuvo el apoyo de la Cámara. Casi un año después, el 23 de febrero de 2000, se publica en el Boletín Oficial de las Cortes esta proposición de ley que ahora debatimos; pero dos semanas más tarde, el 14 de marzo, un diputado del Grupo Popular se apresura a preguntar al Gobierno por la fecha en que tiene previsto remitir a la Cámara el proyecto de ley reguladora de este derecho. Responde nada menos que el presidente del Gobierno (que últimamente se muestra interesado hasta por el concierto económico vasco), comunicando que había sido

remitido ya el proyecto al Consejo General del Poder Judicial para la emisión de los preceptivos informes.

Destaco estos tres hitos, señoría, porque reflejan — muy gráficamente, a mi juicio— que la actitud que algunos grupos vienen manteniendo en relación con este tema parece tener mucha menor relación con el interés por dotar al país con una regulación del derecho de asociación convenientemente actualizada y adaptada a los parámetros constitucionales, que con la aspiración de ponerse la medalla por ser su principal impulsor.

Por lo que se refiere ya más específicamente a la proposición de ley que nos ocupa, hay aspectos que no nos satisfacen plenamente. La que debatimos, señorías, no es una proposición de ley de nuestro grupo, y en consecuencia es evidente que no es de nuestra entera satisfacción. Desde nuestro punto de vista, el texto sobre el que hoy debatimos presenta algunas deficiencias técnicas, acusa algunas imperfecciones terminológicas y contiene regulaciones materiales que cuando menos requieren cierto debate. Respecto a las deficiencias técnicas, sin ir más allá, el artículo 1, por ejemplo, declara como objeto de la ley el desarrollo y protección de los derechos constitucionales expresados en los artículos 22 y 9.2 de la Constitución, cuando es evidente que este último precepto —el artículo 9.2— no recoge propiamente un derecho constitucional sino un mandato dirigido a los poderes públicos para que entre otros objetivos promuevan la participación de los ciudadanos en la vida... **(Rumores.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Perdon, señor Erkoreka.

Señorías, se hace casi inaudible al orador. Rogaría silencio y la atención conveniente. **(Pausa.)**

Gracias.

Señor Erkoreka.

El señor **ERKOREKA GERVASIO**: Gracias, señor presidente.

Decía que lo expresado en el artículo 9.2, que en el artículo 1 de la proposición de ley se menciona como un derecho constitucional, no es propiamente tal sino solamente un mandato dirigido a los poderes públicos para que, entre otras cosas, estos poderes promuevan la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Algo que, por otra parte, no se le escapa al redactor de la proposición porque, efectivamente, se aclara en la exposición de motivos.

Otro aspecto de la proposición no de ley que no es de nuestra satisfacción, es que adolece de algunas incorrecciones terminológicas, que a nuestro juicio habría que retocar, a fin de conseguir un texto más preciso y riguroso. Así, por ejemplo, cuando el artículo 2.4 prohíbe a los poderes públicos establecer diferencias de trato entre los ciudadanos basadas en la pertenencia o en su caso la no pertenencia a una determinada asociación, distingue entre el trato de favor y la discriminación

negativa, siendo así que la discriminación, si no se adjetiva, es por definición negativa, siempre que haga referencia, como es el caso, a una mejor o peor condición. Por tanto, la voz discriminación, sin más añadidos, sería en nuestra opinión suficiente en este caso para hacer referencia a la situación contraria a la del trato de favor, que es la que persigue la proposición, ya que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua discriminación significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera.

En tercer lugar, la proposición establece también, como antes indicaba, unas regulaciones que distan mucho de ser pacíficas, y que en la medida que son objeto de controversia no ya social o política sino incluso por parte de la doctrina científica, seguramente habría que analizar con detenimiento, ponderar cuidadosamente y, por supuesto, debatir en profundidad. Tal es el caso, por ejemplo, del precepto que impone a las asociaciones la obligación de ordenar su estructura interna y su funcionamiento con arreglo a criterios democráticos. Una exigencia que la Constitución impone explícitamente a los partidos políticos, en su artículo 6; a los sindicatos, en su artículo 7; a los colegios profesionales, en su artículo 36 y a las organizaciones profesionales, en su artículo 52, pero no a las asociaciones que se constituyan al amparo del artículo 22. De modo que una eventual decisión del legislador orgánico de imponérsela también a estas últimas, podría constituir una limitación ilegítima del libre ejercicio del derecho de asociación, cuyo contenido esencial incluye, sin lugar a dudas, la libertad de autoorganización. El artículo 2 de la Ley vasca de asociaciones exigía a las constituidas en su ámbito de aplicación una organización y un funcionamiento de carácter democrático. La sentencia del Tribunal Constitucional 173/1998 ha sentado que en su caso la regulación de este extremo sólo podría hacerse mediante ley orgánica. Lo que el alto tribunal no ha dicho es si el legislador orgánico podría, de querer hacerlo así, establecer una regulación como la citada en un ámbito, el asociativo, en el que la regla básica que destila el artículo 22 de la Constitución parece ser la libre organización y funcionamiento de los grupos privados. De ahí que toda limitación a la libertad que la Constitución reconoce a las asociaciones para organizarse y funcionar como prefieran, pueda constituir una vulneración del propio derecho fundamental de asociación.

Otro aspecto de la proposición de ley necesitado de un debate sereno, es el esquema de distribución competencial sobre el que opera, ya que las enrevesadas pautas sentadas en este ámbito por la sentencia el Tribunal Constitucional a la que antes he hecho referencia, no pueden ser traspuestas a un texto articulado sin una previa meditación. Pero estas tres circunstancias, señorías, la existencia en la proposición de ley de deficiencias técnicas, de opciones terminológicas mejorables o de regulaciones susceptibles de discusión, no invalidan

por sí mismas una iniciativa, antes al contrario invitan a su toma en consideración, porque la búsqueda de la mejora técnica y de la depuración estilística constituyen, junto con la discusión en torno a la idoneidad de las regulaciones materiales que en las mismas se proponen, la esencia, el núcleo mismo del debate parlamentario.

Pero no solamente hay aspectos negativos en la proposición de ley, hay otros aspectos que nos gustan y que compartimos plenamente. Voy a citar dos. El primero hace referencia al régimen que establece en relación con la titularidad del derecho. La sentencia 173/1998 del Tribunal Constitucional ha declarado que corresponde a la ley orgánica la determinación de los elementos esenciales relativos a la titularidad del derecho de asociación. En efecto, la proposición objeto del presente debate cumple con este cometido, estableciendo —y esto es lo que ahora quisiera subrayar— que el derecho de asociación corresponde a todas las personas, sin que su ejercicio se vea sometido a limitación alguna, si bien el artículo 5, en su párrafo segundo, especifica que solamente podrán ser promotores los extranjeros residentes en España. La proposición pretende así corregir el régimen subjetivo establecido en la Ley Orgánica 8/2000 y regresar al previsto en el texto original de la Ley de extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, un régimen este último a nuestro juicio mucho más acorde con la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional, cuya sentencia 115/1987, de 7 de julio, postulaba ya que de acuerdo a sus propios términos el artículo 22 de la Constitución, en contraste con otras constituciones comparadas, reconoce también directamente a los extranjeros el derecho de asociación.

Otro aspecto de la proposición de ley que nos satisface es el hecho de que su texto no ignora, sino que toma muy en cuenta, la legislación sobre asociaciones dictada tras la entrada en vigor de la Constitución. Porque no se ajusta a la realidad, señorías, afirmar que la única ley que regula este extremo en el Estado sea una ley preconstitucional; no. Es cierto que lo que el propio Tribunal Constitucional ha calificado como la pasividad legiferante del Estado en esta materia ha permitido la supervivencia parcial de la vieja Ley de asociaciones del año 1964, una ley que, por inspirarse en unos principios distintos y aun opuestos en ocasiones a los valores constitucionales, no puede cumplir la función de desarrollar el derecho de asociación. Pero de esta circunstancia no puede concluirse sin más que el único, ni tan siquiera el principal precedente legislativo sobre el que opera el legislador orgánico para afrontar el desarrollo del artículo 22 de la Constitución sea la Ley de 1964, porque hay también leyes post constitucionales que han incidido de muy diversas maneras en la regulación del fenómeno asociativo. Son, es cierto, en su mayoría leyes autonómicas, pero al fin y al cabo son leyes dictadas en territorio español durante la vigencia de la Constitución de 1978. Por tanto, el acervo jurídico, los ante-

cedentes, el marco normativo del que ha de partir y ha de tener en cuenta el legislador orgánico a la hora de abordar el desarrollo directo del artículo 22 de la Constitución, no solamente está conformado por la Ley de 1964, sino también por las leyes autonómicas que han regulado las asociaciones. Es más, por ser posteriores a la Carta Magna éstas últimas deberían prevalecer frente a aquellas como marco normativo de referencia y es precisamente la principal virtud de la proposición que debatimos, que hace entroncar firmemente con el acervo normativo conformado por la legislación autonómica dictada en la materia, de ahí que nuestro voto vaya a ser favorable a su toma en consideración. Sabemos que será un posicionamiento puramente testimonial porque la puesta en escena del Grupo Popular refleja bien a las claras que impedirá con su voto negativo la toma en consideración de esta iniciativa del Grupo Socialista, alegando que próximamente entrará en la Cámara el proyecto de ley del Gobierno. Sin embargo, los actos testimoniales no siempre son inútiles en política.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Señor Erkoreka, le ruego vaya concluyendo.

El señor **ERKPOREKA GERVASIO**: Enseguida concluyo, señor presidente.

Mediante el voto favorable a la toma en consideración de esta proposición de ley, el Grupo Parlamentario Vasco quiere expresar, con la vista puesta en la según parece próxima presentación del proyecto correspondiente por parte del Gobierno, que no concibe un desarrollo del derecho de asociación que ignore, pase por alto o haga tabla rasa de lo que las comunidades autónomas con competencia en la materia han regulado hasta la fecha en este ámbito; que el grupo no verá con buenos ojos una regulación de este derecho que haga abstracción de lo que la acción normativa desarrollada por los poderes autonómicos durante los últimos veinte años, ha aportado al acervo jurídico en la materia.

Nada más. Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Señor Rejón.

El señor **REJÓN GIEB**: Gracias, señor presidente.

Hay un viejo dicho popular que dice: no es mal año por mucho trigo. Por tanto, siguiéndolo, voy a recalcar algo que han dicho la ponente y otros intervinientes: que la actual Ley de Asociaciones, Ley 191/1964, de 24 de diciembre, es una norma preconstitucional. No vamos a analizar su contenido, pero es una norma que en modo alguno puede servir para regular un derecho tan político como el de la asociación en consonancia con los principios, valores y fines de la Constitución de 1978.

A pesar de ser competencia estatal la legislación general sobre esta materia o derecho de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, como

obligación de los poderes públicos del artículo 9.2 y derecho constitucional de asociación, del artículo, 22 en conexión con el 81 de la Constitución relativo a las leyes orgánicas, hasta la fecha no se ha legislado en esta materia. Si hay una ley ordinaria de una comunidad autónoma, la Ley de Cataluña 7/1997, de Asociaciones, que ha sido casualmente, entre comillas casualmente, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del Partido Popular, por considerar que invade competencias estatales. En el ámbito estatal sí hay legislación sobre cierto tipo de asociaciones, partidos, sindicatos, etcétera; y finalmente, las comunidades autónomas también han legislado profusamente sobre cierto tipo de asociaciones, muy significativamente por ejemplo sobre las asociaciones de voluntariado en nueve comunidades autónomas en concreto, y otras la están preparando. En ese sentido, saludamos la oportunidad de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista porque no tiene ningún sentido que el Estado social y democrático de derecho que dice ser España a más de 20 años de la aprobación del texto constitucional, carezca de legislación orgánica en materia del derecho de asociación. No es ésta una omisión menor, pues de lo que estamos hablando es de uno de esos derechos cívico-políticos, el de expresión, del artículo 20; asociación, artículo 21; reunión, artículo 22; participación política, artículo 23 de la Constitución, que constituyen verdaderas columnas vertebrales de la democracia. El derecho de asociación, junto con los otros derechos constitucionales que he citado, permite que los españoles pasen de ser sujetos pasivos a verdaderos ciudadanos activos. Pues bien, un derecho de tal trascendencia debería haberse regulado ya mediante una ley orgánica, pues es uno de los temas que indican si en un Estado estamos ante una democracia de alta o de baja calidad democrática. Este hecho es tan notorio que hasta el propio Grupo Parlamentario Popular que soporta al Gobierno, promovió al principio de esta legislatura una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a poner fin a esta situación, siendo la mencionada proposición no de ley aprobada por el Pleno de esta Cámara, con el oportuno matiz, como no podía ser menos, con relación al respeto de las competencias de las comunidades autónomas en esta materia. Por otra parte, las comunidades autónomas, mediante el subterfugio que les permiten leyes como la del voluntariado en Cataluña, están ya atendiendo a este vacío, pero carecen del marco general y asumen cierto riesgo de litigio ante el propio Tribunal Constitucional. Por tanto, desde mi grupo parlamentario vuelvo a insistir que está perfectamente acreditada la necesidad y oportunidad de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Lo más conveniente no es si es el momento procesal o procedimental oportuno, ni vamos entrar en el análisis de detalle del contenido de la proposición de ley. Tampoco vamos a entrar si toca o no toca determinado artículo de la Ley de extranjería, porque para

hablar de efectos torticeros siempre está la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.

Después de leer la proposición, la impresión general para nuestro grupo es correcta, sin perjuicio de algún matiz propio. Por ejemplo reducir la burocracia en la propuesta del PSOE, enlazar asociacionismo con participación ciudadana para fortalecer el sistema democrático, etcétera, que deberíamos introducir en el caso de que esta proposición se admitiese a trámite.

La virtud principal de la redacción de la proposición de ley de asociaciones del PSOE es que regula de forma expresa, dando seguridad jurídica a muchas cuestiones que hoy permanecen en el campo de lo administrativo o simplemente al margen de cualquier regulación normativa. En general es un buen texto para empezar a trabajar en el seno de una ponencia parlamentaria. Mi grupo va a votar a favor de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista en relación al derecho de asociación, sin perjuicio de reservarnos nuestro derecho, como no podía ser menos, a introducir enmiendas propias en el caso de que esta iniciativa sea admitida a trámite. Al mismo tiempo, queremos afejar —permítaseme la expresión— el comportamiento del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno en esta materia, ya que el año pasado por esta fecha promovieron una proposición no de ley, y tiene que ser la oposición parlamentaria la que haga el trabajo que él no realiza, como es su obligación, ya que dispone de mayoría parlamentaria. Fue la madre de la iniciativa y tiene toda la apoyatura de la infraestructura del Gobierno. Si el Partido Popular votase en contra de la admisión a trámite de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sólo me queda compararlo con el perro del hortelano que ni legisla ni deja legislar y encima recurren al Tribunal Constitucional cuando se legisla desde alguna comunidad autónoma. Y decirles que para perro del hortelano, haberlos mejores ya haylos.

Nada más y muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.

Señor López de Lerma.

El señor **LÓPEZ DE LERMA Y LÓPEZ**: Señor presidente señorías, nuestro grupo parlamentario se encuentra en una encrucijada de decisión política respecto a la proposición de ley orgánica reguladora del derecho de asociación que nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista; encrucijada que trataré de explicitar a SS.SS. diciendo que por un lado estamos de acuerdo, como no podía ser de otra manera, con el fondo de la cuestión, es decir con la necesidad que aquí ha expuesto la señora Pajín, de regular de una vez un derecho tan elemental y tan fundamental como el derecho de asociación y con la necesidad de dotar al país —ya

es hora después de 22 años de vigencia de la Constitución— de una ley reguladora del derecho de asociación. Pero por otro lado —y de ahí la encrucijada—, nos encontramos con la necesidad de ser coherentes políticamente, de ser coherentes respecto de la propia Constitución y del Estatuto de Autonomía de Cataluña en este caso concreto y de ser coherentes respecto de nuestros propios actos parlamentarios. Voy a tratar de explicarme.

Disponer de una norma reguladora del derecho de asociación constituye una necesidad evidente que no es preciso argumentar con profundidad, simplemente decir que vivimos —por decirlo de manera coloquial— de los residuos de la Ley de asociaciones aprobada por las Cortes del general Franco en fecha 24 de diciembre de 1964. Por tanto, podíamos decir sin que nos tiemblen las piernas que es una auténtica vergüenza que después de 22 años de vigencia de la Constitución las Cortes Generales —esta vez sí democráticas— no hayan regulado un derecho tan básico, tan elemental como el derecho de asociación. Todos nosotros nos podemos poner colorados reconociendo ese error político y cívico.

Por tanto, desde esta perspectiva —como dije en alguna ocasión en este mismo hemiciclo— tenemos una norma que afortunadamente queda vaciada en muchos de sus aspectos, porque son contrarios a la Constitución; podríamos decir en términos gastronómicos que se asemeja a un queso gruyere, es decir hay un montón de agujeros derivados, repito que afortunadamente, de que esta Ley es contraria a la Constitución, y por tanto han sido automáticamente derogados, no están en vigor. Por tanto, nosotros estamos a favor de la necesidad de regular esto. Tanto es así que nuestro grupo parlamentario en el Parlament de Cataluña, nuestro Gobierno concretamente, hace años y bajo lo que marca el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, impuso lo que hoy es vigente ley de asociaciones.

¿Qué ocurre y voy al otro aspecto de la encrucijada que comentaba señorías, señor presidente? Ocurre que en cuanto al contenido del proyecto legislativo que nos aporta el Grupo Parlamentario Socialista comulgo mucho, no bastante sino mucho, con lo que ha dicho aquí el señor Mardones. Si cogemos el texto concreto la verdad es que tengo dudas sobre su constitucionalidad, dudas respecto del propio derecho (estamos en un país que se llama España y con una Constitución que es la española, no es la ONU esto, es el hemiciclo del Congreso de los Diputados, son ciudadanos españoles, no son las personas) y además dudas no sólo sobre el derecho, que también y podía explicarlo pero no es necesario, sino dudas desde el punto de vista de competencias. Estamos en un Estado compuesto, en un Estado que para nosotros es plurinacional, en un Estado que el Título VIII de la Constitución viene a contestar, digamos, de alguna manera positiva al artículo 2 y con unas reglas de juego competenciales y este proyecto que nos

aporta el Grupo Parlamentario Socialista invade viciosamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas.

Señora Pajín, quizás le suena gracioso lo que estoy diciéndole, pero léase por favor la Constitución, así de claro, y el Estatuto de Autonomía de Cataluña o de Euskadi y otros estatutos de autonomía donde se dice literalmente que el derecho de asociación es una competencia exclusiva de aquella comunidad autónoma, lógicamente en el marco de una ley orgánica del Estado porque es un derecho básico. Por tanto, ahí está.

Nuestro punto de vista, en otro aspecto de la encrucijada, es el de la coherencia. Ustedes vienen aquí esta tarde a hablar del tercer sector. Bienvenidos sean. Hace dos años, en estas mismas fechas aproximadamente, nuestro Grupo Parlamentario, por vez primera en la historia de este Parlamento, habló del tercer sector; ustedes llegan con dos años de retraso. Dicen, además, que han hablado con todo el mundo. No sé quién es el mundo. En todo caso, en aquellas fechas, hace dos años, ustedes votaron a favor de nuestra propuesta y en ella estaba el encargo al Gobierno de presentar un proyecto legislativo sobre la regulación del derecho a la asociación. Por tanto somos coherentes con nuestros propios actos parlamentarios. Impulsamos aquello, ustedes vienen detrás y ahora quieren ponerse delante del carro; pero no solamente hace dos años, es que exactamente el 8 de mayo de 2000, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley en la misma línea respecto de la regulación del derecho de asociación. El Grupo Parlamentario Popular admitió una enmienda porque —según consta en el «Diario de Sesiones»— mejoraba técnicamente, sobre todo mejoraba constitucionalmente en el ámbito competencial respectivo, una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán, que fue la que finalmente aprobó la Cámara —ustedes también—, encargando al Gobierno presentar el proyecto. Por tanto, la coherencia es que si hace dos años, a propuesta nuestra, y hace dos meses, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, con una corrección, digamos, hecha por el Grupo Parlamentario Catalán, todos encargamos al banco azul, al Gobierno, que presentara el proyecto legislativo, lo que debemos hacer es incidir, insistir si se quiere en esa solicitud, en esa petición, en ese acuerdo, pero dejar las cosas como estaban, es decir en una coherencia que consisten en decir: les hemos encargado esto a ustedes, el Gobierno —que precisamente hoy está más que ausente—, háganlo, por favor, y preséntenlo aquí.

Por esos motivos de coherencia respeto a nuestros propios actos políticos, respeto a que al menos nosotros creemos en la Constitución de 1978 y en la regulación del derecho a la asociación, respeto a la escrupulosidad competencial, no podemos votar hoy a favor de la aceptación a trámite de este proyecto legislativo del Grupo Parlamentario Socialista.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor López de Lerma.

Señor López-Medel.

El señor **LÓPEZ-MEDEL BASCONES**: Señor presidente, señorías, he de comenzar mi intervención fijando la posición del Grupo Popular sobre lo que es el derecho de asociación, para referirme con posterioridad a nuestro criterio respecto de la proposición concreta presentada por el Grupo Socialista.

Para el Partido Popular el reconocimiento de lo que es el derecho fundamental a la asociación engarza con lo que es la confianza en las personas, en su dimensión participativa, en la confianza en los grupos sociales en que se puede integrar y singularmente en la plena confianza en el dinamismo de la propia sociedad. Precisamente una de las claves del importantísimo avance de nuestro país en estos últimos años ha sido una idea reiterada por el Gobierno Aznar hasta la saciedad, cuando hemos venido diciendo que no esperen soluciones sólo del Gobierno para resolver los problemas, sino que entre todos tenemos que impulsar el progreso, acentuándose en este protagonismo a los grupos sociales, las asociaciones, las entidades que son la mejor forma de vertebración de la propia sociedad. Esto es lo que hemos hecho y por ello el avance es mérito de todos. Esto es lo que vamos a seguir haciendo, porque forma parte de nuestra filosofía política.

Para nosotros el derecho de asociación tiene una profunda conexión con lo que es el principio de participación, y uno y otro constituyen a nuestro juicio una de las raíces de lo que es la democracia. En ésta es absolutamente fundamental el sufragio en unas elecciones libres, plenamente libres y periódicas, pero también para nosotros la democracia se construye cada día, se avanza en el progreso y uno de los mecanismos a través de los cuales se consigue es mediante el impulso y la posición activa de los grupos sociales. Por eso creo que una democracia no puede limitarse a reconocer el fenómeno asociativo sino que también tiene que promoverlo e impulsarlo. Y hay varios mecanismos para este fomento, singularmente la interlocución y el apoyo, y esto es lo que hemos venido haciendo y lo que estamos haciendo a lo largo de estos cinco años; y lo hacemos con asociaciones benéficas, con asociaciones culturales, con asociaciones de consumidores, con asociaciones de discapacitados, con asociaciones de ecologistas, con asociaciones de mujeres, con asociaciones comprometidas con la cooperación para el desarrollo, etcétera. Sin embargo, señorías, reconocemos que no esto es suficiente, en primer lugar, porque todo lo que se haga por fomentar y apoyar el fenómeno asociativo es poco y, en segundo lugar, porque nuestro país carece y hay que dotarle de un marco legal suficiente para regular este derecho que se proclama en el artículo 22 de la Constitución y que está pendiente de desarrollo.

En la proposición de ley del Grupo Socialista se invoca este precepto de la Constitución, por lo que no podemos por menos que expresar nuestra más efusiva felicitación ante tal invocación. Y dado que parten del texto constitucional de 1978, es necesario saber qué ha pasado en este tiempo. En la segunda legislatura el ministro del Interior, en comparecencia el 4 de febrero de 1983, asumió la necesidad de modificar la Ley de asociaciones. En la tercera legislatura el ministro de Justicia, en comparecencia del 18 de septiembre de 1986, en Comisión en el Congreso asumió como desarrollo constitucional pendiente la Ley reguladora del derecho de asociación. En la cuarta legislatura fue otro ministro socialista, en ese caso el titular del departamento de Asuntos Sociales, en comparecencia el 16 de marzo de 1993, también en Comisión, manifestó lo siguiente, que leo literalmente: En esta legislatura queremos presentar en el Parlamento un proyecto de ley de asociación. En la legislatura siguiente, en la quinta, otra ministra diferente, aunque del mismo ramo, asumió ante el Pleno de esta Cámara el 15 de mayo de 1994, ante una pregunta del Grupo Parlamentario Catalán, la necesidad de adecuar la normativa de asociaciones al imperativo del artículo 22 de la Constitución. Esto es, señorías, todo lo que se dijo; esto es, señorías, todo lo que se hizo. Pasaron muchos años y seguía vigente la Ley de 1964. Las cosas empezaron a cambiar cuando el Partido Popular asume, no como titular periodístico sino como compromiso en su programa, la elaboración de una ley que sustituyese a la de 1964 y cuya realidad —todos estábamos de acuerdo— estaba ampliamente superada desde una perspectiva política y social. Precisamente hay que recordar que en esta legislatura, además del compromiso del candidato en el discurso de investidura, la primera iniciativa que presentó el Grupo Popular —se ha hecho mención a ella por el portavoz del Grupo Catalán—, en forma de proposición de ley, fue defendiendo que este Parlamento encargase al Gobierno el mandato de que fuese éste, el Ejecutivo, el que elaborase y remitiese a esta Cámara un proyecto de ley reguladora del derecho de asociación. Esta proposición encomendando esta misión al Gobierno fue aprobada hace menos de un año por unanimidad, por lo que este encargo del Parlamento al Gobierno mal se compadece con la proposición presentada ahora por un grupo aislado buscando exclusivamente protagonismo.

Quiero recordar y señalar ante esta Cámara que tras el acuerdo unánime de este Pleno, el 16 de mayo de 2000, el Gobierno se puso a la tarea y, consciente de la importancia del texto y de la coordinación necesaria por afectar a varias áreas, procedió a constituir una ponencia firmada por los subsecretarios de los ministerios de Justicia, Presidencia, Interior, Defensa, Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Sanidad y Consumo; en definitiva, siete departamentos que fueron elaborando diversos textos hasta que se consensuó un anteproyecto de ley. Este texto fue examinado y debatido en las

comisiones generales de secretarios de Estado y de subsecretarios los días 20 y 27 de diciembre del año pasado y 10 y 17 de enero del presente año. Y de conformidad con la Ley de Gobierno, el Consejo de Ministros —es importante resaltarlo— aprobó el 19 de enero el anteproyecto de ley, ordenando su remisión para el preceptivo informe al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado. Todo este proceso intenso de trabajo se hizo con publicidad, con difusión de los diversos borradores y con participación abundante del movimiento asociativo, singularmente de la plataforma de asociaciones, con la que se tuvieron por parte del área de Asuntos Sociales diversas reuniones aportando ideas muy sugerentes que en no pocos casos han sido recogidas en el texto elaborado por el Gobierno y cuyas ideas yo quisiera públicamente desde aquí agradecer.

Quiero reiterar la fecha del Consejo de Ministros en el que, remitiéndoselo a los órganos informantes, se aprobaba el anteproyecto de ley. Era el 19 de enero de este año, con la previsión de que en apenas tres o cuatro meses estaría el texto en el Parlamento. Tendríamos que preguntarnos, señorías, qué sucede en este tiempo. Sucede que el Grupo Socialista presenta a toda prisa una proposición de ley de la cual nunca se había hablado. Tal vez alguien podría pensar que es un texto muy elaborado, que se ha venido trabajando mucho, intensamente, por los socialistas desde el primer anuncio realizado por un ministro de su partido en el año 1983 y que en este tiempo han madurado tanto sus ideas que les permite afirmar sin ruborizarse, como hacen en la exposición de motivos, que después de 20 años de vigencia constitucional —estoy leyendo literalmente— parece llegado el momento de abordar el desarrollo del derecho de asociación. No es broma, señorías; es lo que dice la exposición de motivos y que revela la gran prioridad que se le ha dado al desarrollo de este derecho fundamental que es el de asociación, ya que parece que hasta ahora no había llegado el momento de regularlo. La otra posibilidad respecto a la presentación precipitada de su proposición de ley es que ocurriera algo muy parecido a lo que sucedió con el plan hidrológico, que cuando vieron que iba en serio el intento del Gobierno de remitir un auténtico plan hidrológico, José Luis le dijo a Cristina: necesito un plan hidrológico alternativo, y en 15 días se elaboró un plan hidrológico que es una auténtica pieza de museo. Esto mismo, señorías, aunque con un poquito más de tiempo, es lo que han hecho con el derecho de asociación, y quiero recordar la fecha. El Consejo de Ministros de 19 de enero aprueba el anteproyecto y alguien volvió a decir: se nos vuelven a adelantar, hay que elaborar y presentar rápidamente una proposición de ley. Así lo hicieron y en un tiempo récord, el 15 de febrero, registraron su iniciativa en esta Cámara y, como no podía ser de otra forma, procedieron a copiar y copiar. Señorías, hay en no pocos casos —y se ha reconocido anteriormente— tal similitud entre su texto y el que con tanto trabajo ha

venido elaborando el Gobierno que la lectura de algunos de esos preceptos ruboriza, y por no hacer esa lectura completa me remito simplemente a los artículos 9, 33 y 36 de la proposición, que son absolutamente idénticos a otros preceptos contenidos en el texto del Gobierno. Es cierto que algunos puntos, sólo algunos, son diferentes, pero permítanme decirles en lo que difieren. En algunos extremos su proposición de ley es muy detallista, enormemente reglamentaria, entrando a regular aspectos que consideramos que son impropios de una ley, especialmente de una ley que tiene rango de orgánica. Ese excesivo detalle nos preocupa fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque puede acabar siendo un auténtico corsé, una auténtica trampa para las asociaciones la rigidez que supone consagrar en una ley —con lo compleja que es su modificación— algunos aspectos cuyo dinamismo requiera adaptaciones en el futuro; y en segundo lugar, porque esa excesiva concreción puede suponer una vulneración del alcance que el Tribunal Constitucional hace en su sentencia de 23 de junio de 1998 y la delimitación de las competencias autonómicas, pues no debe olvidarse —y se ha resaltado por el portavoz del Grupo Catalán— que las nacionalidades y regiones disponen también de competencias en esta materia y que con su regulación tan pormenorizada en algunos puntos que se hacen en la proposición de ley quedarían vaciadas de competencias.

Por último —voy concluyendo—, no puedo por menos que hacer una breve referencia al tema de extranjería. Hay que recordar que el 1 de julio de 1985 se aprobó en esta Cámara la Ley de derechos y libertades de los extranjeros. Esta ley de 1985 fue impugnada desde múltiples instancias al Tribunal Constitucional, entre ellas el Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucional, apenas dos años más tarde, afirmó de una manera rotunda...

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Señor López-Medel, le ruego que vaya concluyendo.

El señor **LÓPEZ-MEDEL BASCONES**: Voy concluyendo, señor presidente.

Decía que el Tribunal Constitucional, apenas dos años más tarde, afirmó de una manera rotunda que era claramente inconstitucional, por restrictiva, la regulación que se hacía de dos derechos, artículos 7 y 8, el derecho de reunión y el derecho de asociación. Por tanto, pediría por favor que no se nos den lecciones en este punto. Además, quiero recordar que en materia de extranjería nuestro texto se adecua plenamente a la doctrina del Tribunal Constitucional y el reconocimiento que se presenta en su proposición de ley es que precisamente se equivocaron en su discurso. Quiero recordar también que en el debate de la Ley de extranjería ustedes insistían en que el derecho de asociación es fundamental y, por tanto, no puede ser objeto de modulación. Nosotros decíamos en ese debate y seguimos

reiterando que es un derecho de configuración legal y, por tanto, cabe configurarlo y cabe diferenciarlo, y eso es precisamente lo que hacen ustedes cuando en esta iniciativa parlamentaria que hoy debatimos distinguen entre extranjeros residentes y extranjeros no residentes —en la terminología anterior, legales o sin papeles—, admitiendo que sólo los primeros, los residentes, pueden ser promotores de asociaciones, pero no los segundos. Con ello caen en su propia trampa.

Concluyo señalando, señor presidente, que la exposición de motivos de la iniciativa legislativa que hoy debatimos de manera impropia se refiere al Grupo Parlamentario Socialista. Esto se puede decir, sin duda alguna, en un discurso en esta Cámara o en otro foro, pero nunca en el preámbulo de una ley. En breve plazo, tras el dictamen pendiente del Consejo de Estado, estará en esta Cámara el proyecto de ley que unánimemente el Parlamento encargó al Gobierno. Este proyecto de ley les aseguro que no será nunca una ley del Partido Popular. Por ello les anuncio la disposición a buscar el consenso y, desde la apertura, a que entre todos hagamos una buena ley de asociaciones que desarrolle el mandato que el texto constitucional, en el año 1978, dio a esta Cámara.

Nada más. Muchas gracias. **(Aplausos.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor López-Medel. **(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)**

La señora **PRESIDENTA**: Vamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica reguladora del derecho de asociación.

Comienza la votación. **(Pausa.)**

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 123; en contra, 177.

La señora **PRESIDENTA**: Queda rechazada la toma en consideración de la referida proposición de ley.

MODIFICACIONES DEL ORDEN DEL DÍA.

La señora **PRESIDENTA**: Señorías, de acuerdo con el artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno a favor de la economía productiva, que figura como punto 34 del mismo, pase a ser debatido en primer lugar del apartado V, correspondiente a interpellaciones urgentes.

¿Lo acuerda así la Cámara? **(Asentimiento.)** En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

Señorías, asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el apartado VII del mismo, correspondiente a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, pase a ser debatido antes del apartado VI, correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes.

¿Lo acuerda así la Cámara? **(Asentimiento.)** En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (CONTINUACIÓN)

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE PROTECCIÓN DE LAS FAMILIAS NUMEROSAS. (Número de expediente 122/000086.)

La señora **PRESIDENTA**: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de protección de las familias numerosas. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Silva. **(Rumores.)**

Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo con diligencia al objeto de poder continuar con el debate. **(Rumores.)**

Señorías, hay un diputado en la tribuna que intenta intervenir con un nivel de audición cuando menos posible. Ruego guarden silencio.

Adelante, señor Silva.

El señor **SILVA SÁNCHEZ**: Muchas gracias, señora presidenta.

La iniciativa legislativa que hoy trae Convergència i Unió a este Pleno del Congreso de los Diputados, precisamente sobre una proposición de ley de protección de las familias numerosas, constituye una necesidad ineludible desde el punto de vista social y cumple al mismo tiempo un mandato legislativo claro, incluso pudiéramos decir hasta lejano para lo que es la política en estos días. No se trata de nada hecho con prisas ni se puede hablar de impaciencia. Fue el 13 de noviembre de 1997, hace casi cuatro años, el día que el Congreso de los Diputados aprobó el informe de la subcomisión creada al efecto —también a iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán— para el estudio de la situación actual de la familia en España y para formular al Gobierno propuestas en esta materia. En ese informe, después de estudiar la situación de la familia en España, se establecieron tres aspectos básicos que debieran impulsar una política integral de apoyo a la familia. Se

decía que dicha política integral de apoyo a la familia venía motivada, en primer lugar, por el respeto a la política de las libertades, la obligación que tienen los poderes públicos de remover aquellos obstáculos que dificultan o impiden la libre adopción de decisiones familiares y, por tanto, la adopción por parte de las familias de decisiones respecto a tener hijos o no, su número o su frecuencia, incluso en aspectos como tener o no en casa a los abuelos o a la primera generación; como digo, había que remover obstáculos que dificultaban esa libre decisión del modelo familiar. En segundo lugar, el reconocimiento de que nos encontramos inmersos en el pluralismo del bienestar y que, sin perjuicio de la garantía última que tienen aquellas políticas públicas oficiales del bienestar, se debía tener en cuenta la política del bienestar que es aportada por el sector comercial y por tanto por las empresas, por el sector voluntario y por tanto por las ONG, pero también y muy fundamentalmente por las familias, por lo que se ha conocido con el nombre de sector informal, y que había que valorar muy positivamente la contribución de la familia al Estado del bienestar, a la sociedad del bienestar, a través de las diversas prestaciones que efectúa a sus miembros, a sus hijos o a sus abuelos. Finalmente, un tercer punto fundamental y que no escapa a SS.SS. es el principio de continuidad demográfica, haciéndose hincapié en la baja natalidad del Estado español, una de las más bajas del mundo, que en estos momentos apenas comienza a repuntar. No se trataba de favorecer o de impulsar políticas natalistas sino aquellas políticas que permitiesen no sólo lo que muchas veces se pone encima de la mesa, el mantenimiento de un sistema público de Seguridad Social, sino también proporcionar una mayor y mejor calidad de vida a los miembros de esta misma sociedad. Sobre la base de estos tres principios —veremos posteriormente cómo la familia numerosa incide de una forma absolutamente relevante y prioritaria en cada uno de ellos— se establecía la necesidad de adoptar una política integral de apoyo a la familia. Pero en el ámbito de las familias numerosas se decía algo más. En algunos de los apartados de las recomendaciones de este informe se instaba al Gobierno a desarrollar determinado tipo de políticas. En el caso de las familias numerosas, en el apartado 9, se solicitaba del Gobierno la revisión de la Ley de familias numerosas de 1971, adaptando su contenido a la realidad social extendiendo de manera notable sus efectos e incluyendo también a aquellas familias que contasen sólo con dos hijos pero uno de ellos fuese minusválido. Por tanto, la necesidad de revisar ese proyecto de ley se remonta a una fecha hasta cierto punto lejana: el 13 de noviembre de 1997.

La subcomisión, valorando positivamente aquellas políticas de universalización que se habían desarrollado en la época de los gobiernos socialistas —universalización de la sanidad, de la enseñanza y de determinadas prestaciones sociales—, así como las políticas

dirigidas a los miembros de la sociedad más necesitados —los niños pequeños, la gente mayor y los marginados—, entendía que las políticas globales del Estado del bienestar eran imprescindibles pero no suficientes. Permítasenos ahora decir que otras políticas globales económicas que se han desarrollado a lo largo de estos últimos años también benefician a la familia, pero no son suficientes y no obvian la necesidad de unas políticas familiares explícitas y específicas dirigidas a la protección de las familias, especialmente de las familias numerosas. No vamos a negar aquí que una política económica que conduce a unos tipos de interés reducido ayuda a las familias a adquirir una vivienda, pero desde luego no son políticas familiares ni suficientes. Y políticas de otro orden que se pueden adoptar de cara a la incorporación de las mujeres, por ejemplo, al mercado de trabajo ayudan a la familia en la medida en que permiten conciliar la vida familiar y laboral, pero no son políticas familiares específicas y desde luego no son suficientes. De ahí que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entendiese que había que ir a esas políticas específicas.

Ciertamente, si algo nos caracteriza no es la impaciencia —quizá el *seny* sea uno de los elementos más alejado de la impaciencia—, pero en 1999, a raíz de una pequeña modificación de la Ley de familias numerosas, el Grupo Parlamentario Catalán presentó una enmienda que fue votada mayoritariamente por esta Cámara, a través de la cual introdujo en dicha ley una disposición adicional, publicada en el BOE de 19 de diciembre de 1999, que requería al Gobierno para que en el plazo de seis meses presentase en esta Cámara un proyecto de ley de familias numerosas. Ciertamente podría entenderse que el hecho de que ese plazo se hubiese triplicado podía ser un elemento aún no suficiente para que algún grupo parlamentario, en este caso el Grupo Parlamentario Catalán, adoptase la iniciativa en un tema en el que no lo ha hecho el Gobierno del Estado. Mi grupo parlamentario ha entendido, tal y como también lo ha manifestado el propio Grupo Parlamentario Popular, que se trata de un tema prioritario y por eso en el día de hoy lo estamos debatiendo. A diferencia de la afirmación de que un discurso puede cambiar el criterio pero no el voto, en este caso posiblemente no cambie el voto de ninguna de las maneras y quizás tampoco cambie el criterio del Grupo Parlamentario Popular, que entiendo que está de acuerdo con una buena parte de esta proposición, pero lo que desde luego no va a hacer es cambiar la decisión del Gobierno de que esta proposición de ley sea tomada en consideración.

Señorías, nosotros queremos que este debate sirva para que las familias y las familias numerosas conozcan la posición y la situación de cada uno de nosotros y para que la Asociación Española de Familias Numerosas, testigo privilegiado que nos está escuchando desde la tribuna, vea en qué medida se puede impulsar la

actuación del Gobierno. No digo que con ello nos demos por satisfechos, pero por lo menos vemos que el trabajo que hemos realizado no ha sido en balde. Asimismo, señorías, procedemos a realizar este debate en un momento en el que toda la política europea, sea de derechas, de centro o de izquierdas, toma precisamente a la familia como centro de prioridad absoluta. No vamos a referirnos a las afirmaciones de Tony Blair. Fue precisamente el canciller Schröder quien el día 30 de marzo, no hace un mes, publicaba en el diario *Die Bild* un artículo en el que establecía las políticas familiares y de trato equitativo a la familia y de atención a los hijos, y el reconocimiento de esa labor a las familias como algo absolutamente fundamental, entonando el *mea culpa* porque en algunos momentos la izquierda europea no las había asumido precisamente como políticas prioritarias. Apenas tres días después, el 3 de abril de este año, el Tribunal Constitucional alemán procedió precisamente a anular algunos apartados de la Ley de la seguridad social alemana al entender que por la función que realizan las familias y las familias con hijos, señalando que aquellos que crían hijos contribuyen a la supervivencia futura del sistema de reparto de cargas entre las generaciones, base de la Seguridad Social, deben disfrutar de ventajas respecto de aquellos que no tienen descendencia; como digo, el Tribunal Constitucional alemán, el Tribunal de Carlsruhe, procedió a reclamar también del Gobierno alemán la modificación de esta ley para el año 2005. Por lo tanto, señorías, entendemos que el momento es oportuno y lo es porque así nos lo impone la situación de la sociedad española en cuanto a la natalidad, a la exigencia de un trato equitativo, y nos lo impone también la política europea. Además, no cabe hablar, como decía anteriormente, de impaciencia porque son cuatro años prácticamente los que existen de retraso en la remisión de esta iniciativa legislativa. Sin embargo, no es el planteamiento de Convergència i Unió el de cargar contra esta timidez laboral de algún departamento ministerial; lo que pretende es excitar ese celo, que si el Gobierno tiene un calendario —que debe tenerlo— lo acelere y que con la ayuda del resto de los grupos parlamentarios podamos dar satisfacción a esta situación. Estoy seguro que su satisfacción sería también la del Grupo Parlamentario Popular, desde luego será la del resto de los grupos de esta Cámara y la de la sociedad española.

¿Cuál es el planteamiento de la proposición de ley de familias numerosas que presenta Convergència i Unió? Señorías, hacía referencia a que el informe sobre la situación de la familia en España establecía la necesidad de remover obstáculos a la libre adopción de decisiones familiares; que las familias pudieran decidir libremente tener aquellos hijos que desean tener, que nos ponen de manifiesto las encuestas y nos dice el Instituto Nacional de Estadística que tienen menos hijos de los que querrían porque no encuentran el apoyo suficiente. Al mismo tiempo, hay que reconocer esa labor

fundamental que prestan las familias atendiendo a las personas mayores, aquellas que no pueden valerse por sí mismas. De ahí que un aspecto fundamental de la proposición de ley es precisamente incorporar al concepto de familias numerosas aquellas que, si bien no tienen tres hijos sino dos, atienden a un ascendiente consanguíneo de segundo grado que no puede valerse por sí mismo. No tengo que ponerles de manifiesto a SS.SS. el reconocimiento de la importancia de esta función que realizan las familias en unos momentos en los que el pacto de las pensiones que ha efectuado el Gobierno con la CEOE y con Comisiones Obreras hace referencia a la necesidad de abordar esas situaciones de dependencia familiar, situaciones en las que tendrá que tenerse en cuenta, yo creo que con seguridad, la sentencia del Tribunal Constitucional alemán y la función que realizan las familias atendiendo a estas personas mayores. Por lo tanto, lo que pretende la proposición de ley es atribuir y reconocer la prestación de ese servicio que desde el afecto efectúan las familias.

Se trata también, sin lugar a dudas, de reconocer las modificaciones que el Estado ha sufrido en los últimos 30 años. Una ley de 1971 no es precisamente la más adecuada para abordar la protección de las familias numerosas. De ahí que el planteamiento de la proposición, que en algún momento ha podido ser entendida como un brindis al sol, es el reconocimiento de las competencias legislativas de las comunidades autónomas y de ejecución y de prestación de servicios por parte de los municipios.

Ciertamente, en nuestro régimen actual de apoyo a las familias numerosas hay lagunas que hay que cubrir porque, señorías, entre aquellas familias que lamentablemente tienen una renta tan mísera de un millón doscientas ochenta y pico mil pesetas, que es lo que les permite gozar de la generosa prestación por hijo a cargo de 4.000 pesetas por mes/hijo, y aquellas otras familias que pueden beneficiarse de la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que tan acertadamente se acordó en la legislatura pasada, entre esos dos tipos de familia hay un amplio espectro de familias españolas que ni gozan ni pueden gozar de esta prestación por hijo a cargo ni pueden beneficiarse de un impuesto sobre la renta de las personas físicas que ciertamente —y mi grupo lo apoyó en la legislatura pasada— procedió a otorgar una mayor protección a esas familias.

Desde luego, hay que proceder a reconocer las prioridades y las preferencias de las familias numerosas para gozar de determinados servicios que en estos momentos no tienen; hay que reconocer también los cambios que ha sufrido nuestro sistema de gestión de servicios públicos a través de las privatizaciones y, por lo tanto, la necesidad de adaptar ese trato preferente a las familias numerosas en cuanto son receptoras de estos servicios, que ya no son servicios públicos *stricto sensu*, sino que son servicios de interés general, que

son servicios universales, etcétera. Desde luego, es absolutamente fundamental que una norma del Estado, incluso con carácter general y no sectorial, imponga la necesidad de ponderar, de tener en cuenta el número de hijos en todos aquellos supuestos en los que para gozar de un determinado beneficio, servicio, ayuda o prestación se establece un límite de renta. Porque, señorías, no tiene sentido —y todavía pasa en muchos ámbitos sectoriales— que una familia numerosa con una renta de 200.000 pesetas y cinco hijos se vea postergada en el acceso a determinados servicios por parte de otra, por lo demás muy digna, que no es familia numerosa, que tiene una renta de 180.000 pesetas pero que ha de atender a un hijo y no a cinco. Es algo absolutamente imprescindible y perentorio que sin lugar a dudas debe ser abordado. Por lo tanto, señorías, entendemos que el contenido de esta proposición de ley es asumible y que necesita ser implementado con urgencia.

Quiero decirles también, señorías, que la vocación de esta proposición de ley era ser aprobada. No se trataba de un brindis al sol ni de una operación propagandística de quedar perfectamente bien ante amplísimos sectores sociales, y no se engañen SS.SS., transversales, porque la familia no es de los de derechas, ni de los de centro, ni de los de izquierda ni de los de extrema izquierda, la familia es absolutamente de todos. El Grupo Parlamentario Catalán renunció a ese planteamiento propagandístico de unos beneficios enormes a favor de intentar garantizar su toma en consideración, porque también somos conscientes de que estas medidas deben adoptarse con arreglo también a criterios de política económica general y que lo que se trata es de garantizar un tratamiento equitativo. No ha sido ese el caso. Bien me consta que algunos de los que hoy votarán en contra lo harán con desgana, lo harán con disgusto, será su obligación política hacerlo así. Señorías, para mi grupo el calendario no era problema, hubiésemos estado dispuestos —y además nos consta que así lo desean— escuchar al sector y a las asociaciones antes de proceder a realizar el trámite de enmiendas; el protagonismo, señorías, tampoco era un problema, precisamente lo que ha sido un problema es la falta de protagonismo por el Gobierno en este tema, que es lo que ha generado este retraso, y lo único que queríamos era poder servir convenientemente a la sociedad.

Si al final en esta legislatura vemos que lo que se adopta es favorable para las familias numerosas, aunque sea un poco más tarde, que el protagonismo se lo lleva el Gobierno del Grupo Parlamentario Popular, aunque no nos lo llevemos otros grupos de la Cámara, estaremos también satisfechos porque habremos hecho un gran beneficio a la sociedad. Lo que no nos gustaría, señora presidenta, señorías, es que aquí hubiese un comportamiento como el del perro del hortelano, que ni comía ni dejaba comer.

Muchas gracias.

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señor Silva.

¿Turno en contra? (**Pausa.**) ¿Grupos que desean fijar posición? (**Pausa.**)

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.

El señor **MARDONES SEVILLA**: Muchas gracias, señora presidenta.

La estructura social y demográfica en España viene evidenciando desde hace ya varios años, incluso más de dos décadas, un fenómeno preocupante que es el descenso de la natalidad, y en este descenso de la natalidad se aprecia una sensible reducción del número de familias numerosas. Las estadísticas que vienen realizando los centros oficiales y cuantos se ocupan de política demográfica y social evidencian este fenómeno preocupante. En la Comunidad Autónoma de Canarias las cifras son además verdaderamente testimoniales no solamente de lo que estoy diciendo, sino que entrañan una preocupación de inmediato futuro. Canarias ha pasado de ser tiempo atrás una comunidad, una región española de alta natalidad, de alto número de familias numerosas, a todo lo contrario, se ha transformado en una de las comunidades autónomas de menor natalidad y, por tanto, de menor número de familias numerosas.

Al amparo de la Constitución, del sentido común y de la realidad social y laboral del país, cabe una política de estímulo de estas familias, que hoy se encuentran con el siguiente reto. En primer lugar, unas dificultades económicas de salida hacia delante de una familia numerosa con cuatro hijos, con lo que implica de coste de estudios, coste de mantenimiento de una calidad de vida determinada, ropa, avituallamiento y adquisición de una vivienda. Todos estos factores, junto con la precariedad en determinadas familias por este tipo de contratos laborales temporales, hacen disuasorio el aumento del número de hijos habidos en la pareja matrimonial. Esto nos tiene que llevar a una reflexión. Si a una pareja joven actual española se le habla, como hace la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de una familia de tres hijos, lo considera prácticamente utópico. Cuando tenemos una media que no llega a dos hijos por matrimonio, el uno coma y pico, hablarles de familias con tres hijos y encima soportando a uno o dos ascendientes se sale de las posibilidades económicas y financieras de la familia media tipo en España en este momento.

Nos parece que la iniciativa que ha traído el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es oportuna y conecta con una preocupación fundamental. El que transcurran 20, 25 ó 30 años de convivencia en la familia para poder acceder a bienes como el de la vivienda hacen prácticamente de todo este sistema económico, financiero, social y laboral un ambiente disuasorio de tener familia numerosa, absolutamente disuasorio.

En las estadísticas que se hacen de las parejas jóvenes españolas que contraen matrimonio sobre el número de hijos que desean tener, quedan prácticamente en cifras marginales las que hablan de plantearse una familia numerosa de tres hijos. Las cifras están, como mucho, alrededor de los dos hijos. Las encuestas que se han realizado en Canarias nos permiten afirmar que es necesaria una política activa de apoyo a la familia, y nos parece oportuna la sistemática que plantea esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán de *Convergència i Unió*. Se trata de una sistemática que nos parece muy inteligente y afortunada. Suscribimos lo que ha dicho su portavoz, don Manuel Silva, en la tribuna, y entendemos que el Gobierno, con el alcance de las modificaciones que estime oportunas en la política del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es uno de los instrumentos que aquí se plantean, junto a otras disminuciones de tasas, impuestos o costes, desde matriculaciones de estudio a todo lo que conlleva el principio de dignidad de la familia, lo tiene plasmado ahí.

Además, mi grupo lo quiere relacionar con las últimas declaraciones que han efectuado tanto el señor ministro del Interior como el secretario de Estado para la Inmigración, al decir que España se transforma en un país de recepción de inmigrantes porque nuestras tasas de natalidad, es decir de aquellas que se producen normalmente dentro del matrimonio, y no digo ya las que pueden aportar las familias numerosas, serán incapaces de atender la sustitución o cubrir los puestos de trabajo laborales que podrían asumir los españoles. Que más de sentido lógico y común que la aportación de las familias españolas al elemento laboral, que tiene que ser atendido por la inmigración. Incluso el señor ministro de Defensa ha ofertado puestos en las Fuerzas Armadas a los inmigrantes, porque no hay cupo suficiente de nacionales españoles para atender estas demandas de la defensa nacional.

Por todas estas razones, señora presidenta, mi grupo va a votar favorablemente la proposición de ley del Grupo Catalán de *Convergència i Unió*.

Nada más y muchas gracias,

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Txueka.

El señor **TXUEKA ISASTI**: Señora presidenta, señorías, arratsaldeon, buenas tardes.

Tenemos un grave problema, ya resaltado por todos los grupos políticos de esta Cámara, nuestras tasas de natalidad están muy lejos del 2,1 necesario para el relevo generacional. La media del Estado, ya de por sí muy baja, 1,2, presenta tintes cuasi sombríos en algunas comunidades autónomas, como la vasca que represento, en donde, por ejemplo, la tasa de natalidad del año

1998 fue del 0,98 y, en general, se encuentra por debajo del 1 por ciento. Por otra parte, es curioso que en las encuestas realizadas por las distintas administraciones cerca del 54 por ciento de las familias desean tener al menos dos hijos y el 18 por ciento se plantea tener tres. Por tanto, es indudable que existen factores reales y objetivables que impiden o dificultan el desarrollo natural de estos deseos y que, en todo caso, conducen a una situación poblacional presente y futura tremendamente delicada.

Existe un aspecto que a nuestro juicio agrava más, si cabe, esta situación a futuro, el de que aunque nos llegáramos a situar en una tasa de natalidad del 1,5 por ciento hacia el año 2010, cuestión hartamente complicada, el número real de nacimientos sería más bajo que el actual, aproximadamente 50.000 nacimientos menos por el efecto que se está produciendo del envejecimiento poblacional y la existencia de menos mujeres en situación de procrear. Por tanto, la situación es muy grave y, aun cuando adoptemos medidas muy favorables, difícilmente alcanzaremos estas ratios de relevo generacional necesarias. Si no se adoptan estas medidas o se hacen tímidamente, el fracaso está plenamente asegurado. Dichas actuaciones y medidas, ya bastante experimentadas y con efectos por lo menos positivos, podríamos agruparlas en cuatro claves al menos.

La primera sería la de tratar de armonizar la vida laboral y familiar mediante incentivos a quienes se acogan a la reducción de jornada laboral y a la excedencia para el cuidado de los hijos. Habrá que prever, por tanto, partidas destinadas a cubrir la cotización empresarial a la Seguridad Social del contrato de sustitución que cubra las vacantes por maternidad y paternidad.

La segunda gran línea de actuación sería la creación de redes de guarderías, subvencionadas para el tramo de uno a dos años y totalmente gratuitas para el tramo de dos a tres años, fundamentalmente en el ámbito urbano, pero sin olvidar medidas más dinámicas y flexibles que posibiliten también el cuidado de los niños en el ámbito rural. Experiencias similares se han puesto en marcha en sociedades ya muy desarrolladas, como las nórdicas, en las cuales —no lo olvidemos— la tasa de fecundidad o su índice de natalidad ronda ya el 1,75.

La tercera línea sería la de las desgravaciones fiscales suficientes, así como la adopción de subsidios familiares a partir del tercer hijo. Sin embargo, si a corto plazo no se observan cambios de tendencias, habrá que plantearse seriamente el subsidio a partir del segundo hijo, como se está pensando en la comunidad autónoma que represento. Finalmente, el reforzamiento de las discriminaciones positivas para familias con discapacitados, monoparentales y numerosas.

Las medidas que se vayan a adoptar en esta ley han de servir de base para resolver estas necesidades, como definir claramente el concepto de familias numerosas, pero sin constreñir de ninguna manera las competencias que esta materia tiene atribuidas a las comunida-

des autónomas porque, tal como he planteado, existen comunidades autónomas —vuelvo a insistir, la vasca en concreto— en las que la situación es muchísimo más delicada. En su caso, y dentro de sus políticas, tendremos que realizar esfuerzos suplementarios para que dicha situación no se agrave. Es por ello que en la Comunidad Autónoma vasca se están estudiando deducciones en la declaración del IRPF notablemente superiores a las propuestas por *Convergència i Unió*.

Para finalizar, entendemos que esta proposición de ley presentada por *Convergència i Unió* trabaja estas vías mencionadas. Es por lo que el Grupo Nacionalista Vasco votará a favor de la misma.

Muchas gracias.

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señor Txueka.

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.

La señora **CASTRO FONSECA**: Muchas gracias.

Intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para fijar posición respecto a la iniciativa que trae hoy a la Cámara *Convergència i Unió*.

En primer lugar, a mí me gustaría que todas y todos los parlamentarios de esta Cámara fuéramos rigurosos con la utilización del lenguaje. Es un hecho que aquí no estamos hablando de familias tipo o de familias que se corresponden con conceptos del pasado, señor Mardones, por lo que no estamos hablando de hijos de matrimonios, estamos hablando de la pluralidad y diversidad familiar. Lo digo porque aquí vienen colegios que luego nos ponen verdes en los periódicos. Por tanto, seamos un poquito más rigurosos para que los chavales que tienen la paciencia de venir a escucharnos no se vayan confundidos. Partiendo de esta precisión, que espero que usted me acepte con toda cordialidad, quiero decir que aquí la madre del cordero está en que no se acepta que la maternidad es un bien social, y esto se pone en evidencia cada vez que alguien sube a esa tribuna para hablar de derechos sociales; pero luego a los padres de la patria —que no a las madres— les preocupa muchísimo la natalidad y siempre están intentando vendernos motos estupendas que tienen que ver con cómo se disfraza el tema del reconocimiento de la maternidad como bien social. Por tanto, quiero que quede bien claro que para Izquierda Unida premisa básica y fundamental para hablar de cualquiera de estas cuestiones es el reconocimiento expreso y necesario de esta Cámara de que la maternidad es un bien social. Por otra parte, jamás apoyaremos ninguna política de familia que niegue a las mujeres o a las parejas (porque las mujeres que la tengan lo consultarán con su pareja, si se lo merece, cuestiones tan claves como ésta) el derecho a decidir el número de hijos que quieren o que queremos tener. Además, tampoco vamos a estar aquí toda

la vida con brindis al sol. Tenemos una Ley de conciliación de la vida laboral y familiar, que queda muy bien para ir a Europa diciendo que somos muy modernos, pero no se ponen en marcha los instrumentos que hagan posible que podamos conciliar la vida laboral y familiar, al menos las mujeres que trabajamos fuera de casa.

Partiendo de estas tres premisas básicas, tengo que decirle al grupo proponente que nosotros vamos a votar a favor de la tramitación parlamentaria de su propuesta, pero que no nos identificamos con algunos de los planteamientos que ustedes hacen. Concretamente, a nosotros no nos basta sólo el número de hijos para definir una familia numerosa, porque eso es una trampa saducea. A nosotros lo que nos interesa es hablar de renta de las familias. Una cosa es que estemos de acuerdo en algunos aspectos que ya hemos traído a esta Cámara, como el tipificar como familia numerosa la que tiene dos hijos y uno discapacitado, etcétera, y otra bien distinta es que no compartimos lo del número de hijos, porque eso es una trampa. Hay que hablar del nivel de rentas de las familias. Tampoco compartimos la propuesta que hacen ustedes de ayudas o desfiscalización porque, desde nuestro punto de vista, *grosso modo*, plantea dos problemas. Uno tiene que ver con la fiscalidad: se va a recoger menos dinero y, por tanto, va a repercutir en la conformación del Estado de bienestar social del que el colectivo de las mujeres aspiramos a ser principales beneficiarias; el otro, porque este tipo de criterio sólo beneficia a los ciudadanos que tienen rentas altas.

¿Qué nos preocupa a nosotros? Nos preocupa, igual que a ustedes, el tema de las familias numerosas y creemos que es oportuno traerlo a la Cámara, pero a nosotros, señorías, nos gustaría hablar más de esas 265.000 familias que existen en este país encabezadas por un cabeza de familia que no tiene ningún tipo de ingresos, y nos gustaría hablar también de las familias monoparentales, encabezadas por mujeres en situación de riesgo vital en un 98 por ciento de los casos. Es decir, preferiríamos tener la oportunidad de hablar con más tranquilidad de este tema y lamento que el Partido Popular, una vez más, no nos vaya a dar la oportunidad de poder hacerlo por negarse a aceptar la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley. Sin querer arrebatarle ningún protagonismo al grupo proponente, yo le pido al Grupo Popular que acepte la tramitación parlamentaria porque sería bueno para este Parlamento que tuviéramos tiempo para poder hablar con tranquilidad de un problema que no nos hemos inventado ni los de *Convergència i Unió* ni los del resto de los grupos que intervenimos para fijar posición, sino que es un problema que está en la sociedad y que no se puede saldar con un debate de cinco minutos.

En nombre de mi grupo, anuncio el voto a favor de la tramitación parlamentaria y le pedimos al Partido Popular que no impida con su mayoría absoluta, una

vez más, que se produzca un debate necesario en esta Cámara.

Nada más, presidenta. Muchas gracias.

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señora Castro.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García.

La señora **GARCÍA PÉREZ**: Señora presidenta, señorías, hoy se trae a esta Cámara un debate que ya hemos tenido posibilidad de desarrollar durante esta legislatura en varias ocasiones, en distintos momentos, que es el debate sobre las familias, enmarcado hoy en la protección a las familias numerosas. Desde el Grupo Socialista nos gustaría hacer algunas reflexiones de una forma más global sobre todo lo que están suponiendo las políticas actuales en apoyo a las familias. Ya en la exposición de motivos de la proposición de ley se hace referencia a los grandes cambios que está suponiendo la composición de las familias en la actualidad y la necesidad de adaptar las políticas dirigidas a las familias, teniendo en cuenta estos cambios de los que estamos hablando. Creo que en eso coincidiremos todos los grupos, pero posiblemente no coincidamos en cuáles son esas políticas que se tienen que poner en marcha.

Entendemos que hay dos pilares básicos sobre los cuales se fundamenta todo el debate sobre las familias. Por una parte están las políticas en materia de protección social, que deben ser desarrolladas por las administraciones públicas, y por otro lado, un eje básico, que es el problema que nos estamos encontrando actualmente y sobre el que hace unos días nos advertía un informe de la ONU, que es el grado de envejecimiento al que estamos llegando en estos momentos y lo que puede suponer dentro de unos años en este país. Son dos asuntos que además están totalmente ligados, porque para poder solucionar uno de ellos hay que poner en marcha las medidas del otro punto. Es decir, si queremos atajar el problema del envejecimiento de nuestro país, tenemos que poner en marcha medidas efectivas, medidas políticas que favorezcan que las familias puedan tener el número de hijos que realmente deseen. En este sentido hay que decir que el Gobierno del Partido Popular está siendo incapaz de realizar esta serie de actuaciones de las que estamos hablando. Esta no es una apreciación que nos inventemos desde el Grupo Socialista, sino que estudios estadísticos en el ámbito europeo nos están diciendo que España está a la cola en gasto de protección social. En esta situación es en la que hay que incidir para poder solucionar este problema, problema que debemos analizar en distintos ámbitos. Por un lado, está la conciliación de la vida familiar y laboral y lo que puede suponer la incorporación de la mujer al mercado laboral. En este sentido —y ya se han hecho reflexiones sobre ello—, el Gobierno del Partido Popular pone marcha una ley sobre conciliación entre la vida

familiar y laboral, pero luego no pone en marcha el reglamento para poder hacer efectivo y real que la mujer y el hombre puedan compaginar la maternidad y la paternidad con el mundo laboral. Por otro lado, está todo el tema del cuidado de las personas mayores dependientes. El Grupo Socialista ha realizado varias propuestas en este sentido que permitan la realización de políticas que puedan hacer efectivo el tratamiento de las personas mayores dependientes. Ya en los presupuestos de este año, el Grupo Socialista proponía un esfuerzo financiero en el Plan concertado de servicios sociales, en la atención a las personas mayores dependientes, en ayuda a domicilio, en teleasistencia, etcétera. Todos ellos son problemas globales que se enmarcan bien en el debate en el que hoy nos encontramos sobre la protección a las familias numerosas. En este sentido, en primer lugar, no debemos confundir las políticas que protejan a las familias numerosas, que es cierto que en estos momentos se están encontrando con muchas dificultades, con políticas exclusivamente natalistas. Cada uno tiene que tener la libertad de decidir en cada momento qué tipo de familia quiere conformar, con cuántos miembros y en qué situación debe de hacerlo. Por ello, compartimos la necesidad de adecuar el marco legislativo de las familias numerosas en el momento actual, teniendo en cuenta medidas de protección social, medidas de vivienda y medidas fiscales, todo ello bajo la óptica de lo que debemos entender por familia numerosa. Posiblemente, los distintos grupos aquí presentes tengamos distintos conceptos sobre lo que debe entenderse por familia numerosa y eso es algo que tenemos que debatir entre todos para intentar llegar a un acuerdo.

Para finalizar, quiero decir que el Grupo Socialista va a votar a favor de esta proposición de ley. En el trámite de enmiendas intentaríamos desarrollar cuál es nuestro punto de vista sobre qué concepto de familia numerosa tenemos y cuáles son las medidas que se deben articular. No obstante, una vez más, la mayoría absoluta del Partido Popular nos va a impedir que este debate se pueda llevar a término. No podemos dar la espalda a los problemas que se nos están planteando y si realmente tenemos prioridades y somos sensibles, démosles el lugar que se merecen y si estamos aquí para debatir estos temas y para posibilitar el acuerdo entre todos los grupos, permitamos esa posibilidad con el voto afirmativo. **(Aplausos.)**

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señora García.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.

El señor **AZPIROZ VILLAR**: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados.

Suelo decir, *iocandi causa*, que soy como la lotería, señora presidenta, porque soy un décimo, es decir,

somos diez hermanos y, por tanto, no puedo menos que expresar mi agradecimiento por el debate de un tema tan importante como es el de las familias numerosas, que lógicamente conozco muy bien. Me permitirán que haga una reflexión inicial. He oído decir toda la vida a mi padre que ojalá hubiera ayudas de verdad, y a él se le aplicó la Ley de 1971 y éramos familia numerosa de honor, como entonces se llamaba. He de agradecerle al señor Silva y a Convergència i Unió que hayan puesto encima del tapete y en esta Cámara —así se ha reflejado por los portavoces intervinientes— la necesidad de abordar algo que viene en el programa electoral del Partido Popular, como es una adecuada promoción de un plan integral de apoyo a la familia y, especialmente, a las familias numerosas.

Aquí se han dicho cosas diferentes, aunque ha habido también denominadores comunes, como poner de relieve la importancia que para los grupos intervinientes tienen las competencias de las comunidades autónomas en la materia. Es un recordatorio preciso porque una política de Estado en este ámbito tiene que ser una política de denominador común o de mínimos, sobre todo que pueda incidir en determinadas materias del ámbito tributario y, por descontado, en materia de Seguridad Social. Obviamente, las competencias sobre este tema están en buena medida transferidas a las comunidades autónomas.

He de decir que esta es una materia compleja y transversal, sobre la cual hay que ponerse de acuerdo previamente en determinadas definiciones y conceptos. Eso lo han reconocido los diversos intervinientes. Hemos hablado de que todos estamos de acuerdo en el apoyo a la familia numerosa y, sin embargo, no ha habido una concreción de cómo definimos la familia numerosa que decimos apoyar. Pese a la oportunidad en el sentido de pronunciarnos una vez más en esta materia y en un Pleno, creo que es extemporánea en la medida en que el pasado 5 de febrero de este mismo año la Cámara Alta tuvo oportunidad de aceptar la constitución de una ponencia para el estudio de la familia y su adecuación a la realidad social del mundo actual. Es más, el próximo jueves se constituye formalmente y ya tiene en sus previsiones la comparecencia de múltiples expertos para poder opinar e informar. En definitiva, tal y como expuso mi compañera en el Senado, Carmen Pardo, confiamos en que esta ponencia sirva como foro de debate donde se pueda escuchar a las comunidades autónomas, qué quieren poner éstas, lo que se traduce en qué elementos financieros van a aportar dentro del ejercicio de sus competencias; qué opinan las asociaciones representativas y las familias numerosas y, en definitiva, escuchar a los expertos para analizar esta cuestión. **(El señor vicepresidente, López de Lerma i López, ocupa la Presidencia.)**

He dicho y repito que ha habido una concordancia en todas las intervenciones sobre el papel importante de las comunidades autónomas. Insistimos, hay que

oír las y concertar con ellas a ser posible. Hay algo que no se ha dicho en la proposición de ley, pero que al final ha salido, y es que, con alguna excepción, todos han entendido que el apoyo a la familia numerosa es un elemento imprescindible para una política demográfica o de natalidad necesaria para nuestro país.

He de decirle, señor Silva, que me ha gustado más su discurso que el texto de su proposición de ley, que voy a analizar en lo posible, porque el nuestro no es un no dado alegremente, sino un no razonado y con motivos. Cuando se afirma gratuitamente, como se ha hecho esta tarde, que el Partido Popular impide debates, he de recordar, como lo hacía hace un momento, que el debate está abierto con una ponencia *ad hoc* creada a tal efecto en el Senado. He de decir con carácter general que algunos artículos de la proposición, como por ejemplo el 15, trascienden del ámbito de las familias numerosas al afectar a la totalidad de los posibles beneficiarios. Lo mismo ocurre en las disposiciones adicionales segunda y tercera, en las que se regula la gratuidad de los libros, universalizándola, y también el planteamiento de una reducción del IVA en la compra de prendas para los niños. Por lo tanto, trasciende del objeto de lo que se pretende regular, que, si no entendemos mal, se circunscribe a la cuestión de las familias numerosas. Tampoco plantea la proposición algo que es de interés, como sería una evaluación económica de los costos que a cada parte pueda corresponder el ejercicio y desarrollo de las previsiones que se recogen en su iniciativa.

Nos parece que la técnica legislativa utilizada en algunos casos es deficiente porque existen inconcreciones. Hay artículos excesivamente genéricos como, por ejemplo, el 9, el 13 y el 25. Hay cuestiones innecesarias que, si tengo tiempo, abordaré posteriormente. Algunas de las propuestas que ustedes nos plantean, como más adelante citaré, ya han sido incorporadas por el Gobierno en instrumentos políticos. No comprendemos cómo en la exposición de motivos, en relación con los artículos 2 y 3, incorporan lo siguiente: Otro aspecto a considerar es la inclusión en el concepto de familia de las uniones de hecho, basadas en una relación de afectividad y convivencia actual. Creo que estamos hablando de familias numerosas y se nos escapa esta definición conceptual con la cual no estamos de acuerdo. He de decir también que alguna asociación de familias numerosas se ha pronunciado en el mismo sentido y dice: No parece una razón de peso destacar como motivo fundamental de la ley la existencia de otras uniones o tipos de convivencia, como hace la proposición de CiU. Yo no voy tan lejos en mi afirmación. Sigue diciendo: La ley se dirige a todas aquellas familias que tengan más de un determinado número de hijos. No es necesario citar ni destacar nada más. No se trata de equiparar nada, sino de dar a estas familias una serie de compensaciones justas y solidarias.

Dentro de esta intervención de carácter general, hay otro tipo de cuestiones que, según nuestro criterio, tampoco resuelve su proposición. Hay materias que se dejan sin regular. Primero, el tratamiento de los supuestos de separación o divorcio de los progenitores cuando los hijos se encuentran bajo la dependencia económica de uno de ellos y conviven con el otro. No se resuelve este problema en la proposición. Segundo, posibilidad de prolongación de la edad límite de los hijos por razones de estudios, para que tales hijos sean considerados como miembros a efectos de ser evaluada la familia como numerosa. Esto lo recoge la normativa en vigor y, sin embargo, la proposición no. Tercero, regulación de los requisitos de residencia y nacionalidad de los beneficiarios. Tampoco se recoge. Cuarto, un tema importante, definición del concepto de incapacidad o minusvalía de los ascendientes de forma más precisa. Quinto, partos múltiples. Es decir, hay un elenco de materias cuya regulación ciertamente es difícil y que exigen una profundización con más sosiego, y más a la vista de lo que la ponencia del Senado pueda aportar a los estudios que ya existen en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en particular en la Secretaría General de Asuntos Sociales.

Yendo al articulado, el 4.3 nos parece confuso a la hora de definir lo que son hijos y aquí incluye a las personas discapacitadas a que se refiere el artículo 2.2. Se hace una mención innecesaria a los hijos matrimoniales, extramatrimoniales y adoptivos, cuando el Código Civil fue reformado por la Ley 11/1981 y todos tienen la misma situación de igualdad. Por lo tanto, una remisión genérica a los hijos es más que suficiente. El artículo 6 cae en una inconcreción a la hora de definir la discapacidad y pondré dos ejemplos. En el artículo 40.2 y 3 de la Ley 40/1998 sobre IRPF y en los artículos 180 y siguientes de la Ley General de la Seguridad Social se establece el grado de minusvalía; es decir, la mención genérica de discapacidad hay que concretarla con el grado concreto que afecta e invalida a la persona en cuestión para que esa pueda ser incluida o no dentro de los apartados que en su proposición plantean. Hay una regulación justamente del grado de minusvalía por un real decreto, el 1971/1999, que pretende que haya una homogeneización de lo que son grados de minusvalía con carácter mínimo para todo el Estado.

El artículo 12 es difícil de precisar, porque afecta a muchas empresas privadas. El artículo 13 es genérico e impreciso. El artículo 15 incluye invalidez provisional cuando en la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, fue suprimida. Trasciende, por otro lado, el artículo 15 con las asignaciones familiares el campo que se pretende regular en la proposición, que son las familias numerosas y se regula *erga omnes*, frente a todos. Los artículos 17 y 18, sobre acción protectora en materia de vivienda plantean que las familias numerosas puedan acceder a tener viviendas de una superficie construida hasta un cien por cien superior a la superficie máxima establecida

como protegible con carácter obligatorio para los demás ciudadanos. Nos parece excesivo; quizás un 80 por ciento podría ser suficiente, pero he de decirle que ya las unidades familiares de cuatro o más personas han pasado de tener la posibilidad de acceder a viviendas de 70 a 90 metros útiles; esto ya lo ha hecho el Gobierno. ¿Qué habrá que mejorarlo? Sin duda, pero en esa dirección se está caminando. Se han incluido también coeficientes correctores por el Gobierno, que concretan y determinan las comunidades autónomas, asentando hasta un 20 por ciento del tramo de ingresos a fin de poder acceder a las ayudas de las familias numerosas, y el anteproyecto de real decreto que modifica varios artículos del Real Decreto 1186/1998, plan del suelo y la vivienda 1998-2001, prevé que en el primer acceso a la vivienda para las familias numerosas haya un 3 por ciento del precio de la vivienda como ayuda compensatoria a la ayuda estatal para la entrada a la compra de la misma; es decir, que también se está trabajando en esta materia.

La modificación que ustedes introducen en el artículo 20 en relación con la exención del 50 por ciento de la base imponible, a la hora de adquirir un vehículo, en el impuesto estatal sobre determinados medios de transportes, ya está recogida en la Ley de acompañamiento de este año y por tanto hemos dado ya satisfacción a lo que nos plantean. Por cierto, diré que también se han incluido medidas de apoyo a la familia numerosa, y prescindo de la Ley de conciliación de la vida laboral y familiar y prescindo de las bonificaciones en pro de la incorporación de la mujer al trabajo o en pro de tener bonificaciones de Seguridad Social tras la maternidad. También hay otras medidas como son que en materia fiscal en el año 2000 hemos establecido medidas de apoyo a la familia y se ha extendido el régimen fiscal de los planes de pensión a aquellos cónyuges que no trabajan fuera del hogar familiar.

Otros artículos constituyen materia de disposiciones finales: el 15, 16, 19, 20 y 21 entre otros, según la doctrina clásica. El artículo 27 no concreta el régimen sancionador que se pretende. La disposición adicional primera pretende que una ley pueda garantizar su vigencia frente a lo que dispongan futuras leyes. Me perdonarán que diga que esto es incomprensible y que nadie en esta Cámara creo que razonablemente puede apoyar. Las disposiciones adicionales segunda y tercera se apartan, como he dicho antes, del objeto de la ley y universalizan, es decir, no regulan en concreto las familias numerosas. La disposición derogatoria no identifica con precisión las normas que hay que derogar. La disposición final primera nos parece innecesaria y la segunda impide la *vacatio legis*.

He de decir que estamos por el diálogo en esta cuestión. He de decir que el ministro de Trabajo se manifestó en comparecencia ante la Comisión de Política Social y Empleo, el 30 de mayo de 2000, en el sentido

de establecer un plan integral de familia, con especial atención a las familias numerosas.

El señor **VICEPRESIDENTE** (López de Lerma i López): Señor Azpiroz, vaya terminando, por favor.

El señor **AZPIROZ VILLAR**: En seguida concluyo.

He de decir que aparte de estas medidas que se han tomado o que están en trámite de adoptarse, hay otras como el plan de guarderías de cero a tres años, que espero que nuestro Gobierno en no mucho tiempo pueda plantear, y ayer mismo en esta Cámara tuvo entrada una iniciativa del Grupo Popular relativa a facilitar la adopción internacional con un mejor tratamiento entre las posibilidades que tiene cada comunidad autónoma, que espero que lo apoyen, porque este sí que va a ser un beneficio concreto, claro y específico a una demanda real de nuestros ciudadanos que tienen problemas en este tema y que en su día abordaremos específicamente en esta tribuna.

El Grupo Popular va a votar negativamente y lo va a hacer porque hay razones para ello, sin perjuicio de que agradezcamos sinceramente su exposición, muchos de cuyos aspectos compartimos, así como algunas de las propuestas que plantea la proposición, que sin duda en el futuro incorporaremos cuando haya una nueva ley o un plan integral que regule la materia. En todo caso, el Gobierno popular no está inerte ante las políticas activas y va concretando medidas positivas que a lo mejor no se han incluido en un plan global, pero año tras año se van incorporando en pro de la familia, que todos estamos de acuerdo en que hay que preservar y sobre la cual sin duda volveremos a discutir, como nuestros compañeros del Senado van a poder continuar haciendo con entera libertad y con entera amplitud.

Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (López de Lerma i López): Gracias, señor Azpiroz.

Vamos a proceder a la votación. **(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Señorías, vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de protección de las familias numerosas.

Comienza la votación. **(Pausa.)**

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 138; en contra, 155.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

— **DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE CREACIÓN DE UNA NUEVA OFICINA CONSULAR DE CARRERA EN VENEZUELA. (Número de expediente 162/000262.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Punto II del orden del día: Proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre creación de una nueva oficina consular de carrera en Venezuela. Para su defensa tiene la palabra el señor Rivero.

El señor **RIVERO BAUTE**: Señor presidente, señorías, subo a la tribuna para presentar una proposición no de ley, en nombre de Coalición Canaria, con relación al mundo de la emigración y a la preocupación compartida, tanto por el Gobierno de España como por todos los grupos parlamentarios de la Cámara, por la situación que atraviesan en estos momentos aproximadamente dos millones de emigrantes que viven fuera de España. Hablar del mundo de la emigración viene siendo una constante en este Parlamento y es una muestra de que todos los grupos parlamentarios tienen una profunda sensibilidad y una gran preocupación, como indicaba al principio, por la situación que atraviesan nuestros compatriotas que desde hace muchos años se encuentran fuera del territorio español. Es hablar de lo que dieron nuestros emigrantes por los que nos quedamos aquí; del esfuerzo que significó para los centenares de miles de familias que tuvieron que abandonar el territorio español en búsqueda de un futuro mejor para ellos y su familia; de las posibilidades de trabajo que dieron a los que nos quedamos en España; de los primeros dineros que llegaron en una situación económica muy complicada en nuestro país para las familias que estaban aquí, los primeros dineros de la emigración que permitieron que muchas familias pudieran progresar y vivir con una cierta dignidad. Todo ese esfuerzo de nuestros emigrantes requiere en estos momentos, cuando en la mayor parte de los países receptores se pasa por situaciones complicadas y difíciles desde el punto de vista político y económico, que les devolvamos parte de lo que ellos en su día nos entregaron.

La situación política y económica ha variado de una forma radical desde los años cincuenta y sesenta en España y también lo ha hecho la de los países receptores, fundamentalmente la de aquellos países de América Latina que recibieron a centenares de miles de compatriotas, fundamentalmente gallegos, extremeños, andaluces, asturianos, vascos o canarios. La situación social y económica, la estructura de protección social, el futuro que en aquellos momentos tenían países como Argentina, México, Uruguay, Brasil, Cuba o Venezuela hoy no solamente se ha paralizado, sino que en algunos

casos está en un franco retroceso. Por el contrario, la situación en España ha cambiado de una forma extraordinaria, tanto desde el punto de vista político como desde el punto económico. El cambio político le ha dado confianza y estabilidad a nuestro país y el cambio económico ha significado que en estos momentos nuestros compatriotas no solamente no tengan que emigrar en búsqueda de un mejor futuro para ellos y para sus familias, sino todo lo contrario; estamos en condiciones de ayudar a aquellos que están fuera, que se encuentran en malas condiciones y, por otra parte, de que en estos momentos España sea un país receptor de mano de obra, un país de solidaridad, de cooperación con otras personas, con ciudadanos de otros países que necesitan que se les tienda la mano como en su día se hizo a los españoles.

Durante décadas, fruto del cambio social, político y económico en nuestro país, han regresado muchos emigrantes, fundamentalmente los que se encontraban en diversos países europeos, pero la colonia española en América Latina sigue siendo extraordinariamente importante. La situación, como indicaba antes, de nuestros compatriotas en Argentina, Cuba, México o Venezuela obviamente es complicada y difícil y yo creo que no hay que entrar en detalles del porqué lo digo. La situación de crisis económica y política, de crisis de confianza, de paro o de desprotección social de algunos de estos países hace que los españoles que en estos momentos se encuentran en estos países latinoamericanos no vivan en las mejores condiciones. Si a esto añadimos que todos nuestros emigrantes se tuvieron que marchar de los distintos territorios del Estado allá por los años cincuenta o sesenta, estamos hablando de que una mayoría de esos emigrantes están en el umbral de los 70 años, es una población envejecida, con todo lo que ello significa, no están en condiciones de trabajo, y si además de esto aquellos países no cuentan con protección social, no tienen cobertura de desempleo ni tienen planes de pensiones adecuados, la situación se complica de una forma extraordinaria. Si a todo ello añadimos que en estos momentos, fruto de lo que significan los progresos que se han producido en España, hay un número importante de estos compatriotas que están fuera que intentan recuperar la nacionalidad española, que en su momento perdieron, y que, por otra parte, España se ha convertido en un país receptor de mano de obra y es necesario atender a una serie de ciudadanos que quieren incorporarse al mundo del trabajo en España, para lo que se tiene que contar con los necesarios trámites burocráticos —visados—, nos daremos cuenta que tenemos que desplegar una mejor infraestructura de la Administración española en estos países.

Hace una semana se aprobaba en esta Cámara una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que, con la aceptación por parte de este grupo de distintas enmiendas de los Grupos Parlamentarios Popular y de Coalición Canaria, pretende mejorar la

infraestructura de la Administración española en los países que en su día fueron receptores de emigrantes españoles; básicamente, para mejorar los consulados de carrera, los consulados generales, dotándolos de mejores medios materiales y de más recursos humanos. En esa iniciativa, aprobada con las correspondientes incorporaciones y gracias al consenso que se alcanzó en la Cámara, una de las aportaciones fue de Coalición Canaria e iba en el sentido de que se podrían crear otros consulados de carrera en aquellos países en que fueran necesarios. Pues bien, hoy estamos hablando de un caso particular, de un caso singular, de Venezuela, por distintas razones. Por una parte, por la extensión de este país. Existen grandes distancias desde cualquier rincón del interior hasta la capital, Caracas. Distancias de 600, 800 ó 1.000 kilómetros son relativamente normales en este país sudamericano. Por otra parte, por el número de emigrantes y descendientes. Hay que tener en cuenta que, aunque estamos hablando de un censo de alrededor de 120.000 ó 130.000 españoles en Venezuela, sólo los canarios, entre emigrantes y descendientes, alcanzan cifras escalofriantes que en este momento nadie puede cuantificar. Se habla de que entre 300.000 y 500.000 canarios o sus descendientes viven en Venezuela. Si a este extenso país, con este número importante de compatriotas, que están muy dispersos por todo el territorio, añadimos el envejecimiento de la población que en su día emigró y la difícil situación económica por la que atraviesa la República venezolana que supone escasez, pocos medios de locomoción, de movilidad y recursos económicos escasos; si tenemos en cuenta estas circunstancias, estas condiciones, comprenderemos que nuestra gente necesita apoyo, necesita asesoramiento, necesita ayuda, necesita poder consultar los distintos programas de colaboración que ha establecido el Gobierno de España. En conclusión, es necesario mejorar nuestra infraestructura en este país. Por ello, la propuesta del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se concreta en la necesidad de poner en marcha un segundo Consulado de carrera en Venezuela. ¿Dónde? Donde el Gobierno entienda que puede complementar mejor al Consulado general, que en estos momentos está en Caracas. Puede ser en Valencia, en Barquisimeto; que sea el propio Gobierno quien fije dónde puede prestar mejor servicio a nuestros compatriotas.

Esta no es una idea que surja sólo de la inquietud de Coalición Canaria, sino que es una inquietud compartida por todos, pero, además, es una necesidad, una demanda del Consejo General de Inmigración, donde hay informes del embajador de España favorables a esta iniciativa; no solamente favorables, sino afirmando la necesidad de este segundo Consulado. El cónsul general de España en Venezuela —por cierto, su relevo se va a producir pronto, en el mes de junio— también apoya esta iniciativa, igual que el agregado laboral e incluso el presidente Aznar, que, a finales del año 1999,

en su visita al país venezolano, se comprometió a poner en marcha el segundo Consulado en Venezuela. Por todas esas razones, Coalición Canaria ha presentado esta iniciativa, que, dada la sensibilidad y la complicidad que en asuntos relacionados con nuestros emigrantes tienen todos los grupos parlamentarios y dada también la disposición que ha tenido, al menos hasta ahora, el Gobierno del Estado con las cuestiones relacionadas con el mundo de la emigración, nosotros esperamos que sea apoyada. En definitiva, con esta iniciativa tratamos de que todos los españoles que se encuentran en estos momentos a miles de kilómetros de distancia, que cruzaron el charco en los años cincuenta o sesenta, al menos encuentren la mano amiga que les pueda informar, que les pueda asesorar y que les pueda llevar a estar en la información de los distintos programas de apoyo de las diferentes iniciativas que en estos momentos tiene el Gobierno español.

Nada más, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Rivero.

Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Soriano.

El señor **SORIANO BENÍTEZ DE LUGO**: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular comparte, como no podía ser de otra manera, la preocupación que ha puesto aquí de manifiesto el diputado señor Rivero en relación con nuestros conciudadanos que están en Venezuela que, como también ha dicho el señor Rivero, llevan ya años en un país en unas condiciones difíciles y que tal vez en estos momentos estén necesitando un especial apoyo de nuestras autoridades consulares.

La proposición no de ley que es objeto de debate en estos momentos en la Cámara insta al Gobierno a la creación, en un plazo de tres meses, de una nueva oficina consular en Venezuela, cuya demarcación y sede se determinarán de manera que se pueda atender en la mejor forma posible a los españoles y sus descendientes que residan en dicho país. En opinión de Coalición Canaria —y así opina también el Partido Popular—, este Consulado resulta en la actualidad insuficiente tanto por el número de españoles residentes en ese país como por el grave inconveniente que para ellos suponen los grandes desplazamientos, como también ha puesto de manifiesto el señor Rivero. Me parece conveniente precisar que en la actualidad el Consulado de España en Caracas es una de las oficinas consulares españolas mejor dotadas en el mundo, cuenta en estos momentos con tres cónsules de carrera, aparte de unos 40 funcionarios, entre funcionarios de carrera y sin carrera, y con 19 cónsules honorarios, vicecónsules honorarios o agencias consulares repartidas por todo el país. Se da la cir-

cunstancia de que la mayoría de la población española residente en Venezuela está concentrada en el distrito federal y en los Estados de Miranda y Carabobo, que están lindantes con el distrito federal, lo que supone que de un total de 131.000 ciudadanos españoles residentes en Venezuela, más de 100.000 residen en esta zona a la que me he referido. Esto quiere decir que en estos momentos el Consulado de España en Caracas, junto con las cancillerías honorarias, está atendiendo, entendemos que de forma suficiente aunque indudablemente se podría mejorar, las necesidades de los españoles residentes en Venezuela. Tengamos en cuenta que la Embajada en Caracas está constituida, aparte de la cancillería, por una oficina comercial, una oficina laboral, una oficina de información, una oficina técnica de cooperación y que existen, además de la cancillería del Consulado general, viceconsulados honorarios en Acarigua, Altavilla de Orituco, Barinas, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Cumaná, Maracaibo, Maracay, Maturín, Mérida, Porlamar, Puerto de la Cruz, Puerto Ordaz, Punto Fijo, San Cristóbal, San Felipe, San Juan de los Morros, Valencia y Valera. Esto quiere decir que, si atendemos a un mapa de Venezuela, está perfectamente atendida la zona norte, aproximadamente una tercera parte del país que es la que está poblada, puesto que la parte sur está prácticamente comprendida por la selva amazónica, con el Estado de Amazonas que sólo comporta una pequeña parte de la población, alrededor de un 0,44 por ciento. Con esto quiero poner de manifiesto que el Gobierno español está atendiendo en estos momentos en debida forma las necesidades de nuestros conciudadanos.

En esta Cámara ha habido ya varias iniciativas —a algunas de ellas se ha referido también el señor Rivero— donde reiteradamente se ha puesto de manifiesto por parte del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno el apoyo a todas aquellas que supongan beneficio o mejora en el trato a nuestros conciudadanos en Venezuela. Así, en una respuesta del Gobierno del 10 de noviembre de 1999, precisamente al señor Rivero, se dice que en Venezuela existe un Consulado general cuya jurisdicción abarca toda la República, los cónsules adjuntos y los honorarios y se termina señalando expresamente que el Gobierno, que tiene voluntad de mejora permanente de la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos en el exterior, ha hecho notables esfuerzos para mejorar la calidad de los servicios consulares. Hay otras preguntas de otros diputados como, por ejemplo, la del señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al que el Gobierno responde, con fecha 25 de julio del año 2000, que desde hace meses se vienen atendiendo todas las solicitudes de incremento de personal de los consulados motivadas por la creciente necesidad de atención a la colonia española y concretamente por las exigencias derivadas de la gestión de visados. En el mismo sentido, se han reformado o

alquilado nuevas dependencias consulares para que la gestión de visados esté perfectamente atendida, etcétera. Incluso se comunican al señor Campuzano las inversiones comprendidas en este ejercicio presupuestario, entre las cuales figura el amueblamiento de nuevas oficinas en Caracas.

Se debatió asimismo en esta Cámara, con fecha 21 de marzo de 2001, es decir hace escasos días, una proposición no de ley que al final fue votada y aprobada por unanimidad en la que se acordó que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar los medios personales y materiales de las delegaciones consulares en Latinoamérica, en especial aquellas ubicadas en Estados en los que existan importantes comunidades de emigrantes españoles. En el debate de esta proposición no de ley, que como digo fue aprobada por esta Cámara en fecha muy reciente, nuestra diputada del Partido Popular, la señora Muñoz Uriol, ponía de manifiesto que estábamos de acuerdo con el punto primero de la proposición no de ley, que hace mención expresa a que hay que aumentar los medios personales y materiales de los consulados en Latinoamérica, en especial de aquellos ubicados en los Estados en que exista un mayor número de emigrantes españoles. A pesar de que las oficinas consulares de España —seguía diciendo la señora Muñoz Uriol— son ya las mejor dotadas del mundo, es evidente que hay un número muy importante de emigrantes que residen en estos países, además de la actual presión migratoria que proviene de los mismos, lo cual hace necesario que se les dote de mayores y mejores medios tanto materiales como humanos. El señor Rivero también ha puesto de manifiesto que el 3 de abril de este mismo mes se aprobaba una proposición no de ley en esta Cámara donde expresamente se acordaba adoptar medidas urgentes para dotar a las oficinas consulares y a las secciones laborales de medios humanos y materiales suficientes para que se amplíen y renueven las sedes de las oficinas consulares y de las secciones laborales de la Seguridad Social y de Asuntos Sociales en aquellas demarcaciones donde no sean adecuadas para el volumen de trabajo y el número de personas que atienden, y que para facilitar el acceso a la administración consular en aquellos países de gran extensión y dispersión —es el caso de Venezuela— y donde el número de emigrantes lo requiera, se podrá crear más de una oficina consular ubicándose en las zonas de mayor asentamiento de españoles.

A la vista del reiterado pronunciamiento de esta Cámara a favor de lo solicitado en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el registro del Congreso una enmienda cuyo texto literal quedó redactado de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar mejorando las dotaciones, tanto en medios materiales como personales, de la oficina consular existente en Caracas, Venezuela, para la mejor atención de nuestros compatriotas y a

seguir realizando todas aquellas medidas posibles para incrementar la coordinación de esa oficina consular con los consulados honorarios existentes en ese país, en línea con lo que este diputado ha expuesto con anterioridad.

Pues bien, en un afán de llegar a una postura que pueda ser aceptada por todos los grupos de la Cámara, proponemos en este momento un segundo párrafo, como enmienda transaccional, que diría lo siguiente: Estudiar, a la mayor brevedad posible, la creación de un segundo Consulado de carrera en Venezuela, teniendo en cuenta la extensión geográfica del país —tal como se decía en la proposición no de ley aprobada el día 3 de este mismo mes—, la distribución y la lejanía de muchos de nuestros compatriotas allí residentes respecto del actual Consulado general en Caracas. Tengo que hacer la observación a SS.SS. de que, al igual que en la proposición no de ley de Coalición Canaria, resulta en estos momentos muy difícil fijar el lugar en el que ha de instalarse dicho Consulado, por lo cual uno de los motivos por los que parece oportuno que haya un compás de espera es la realización de los estudios necesarios para decidir el sitio en el que se ha de establecer, que puede ser en Caracas o no, ya que la fórmula es lo suficientemente amplia como para que el Gobierno, en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores con los estudios pertinentes, pueda decidir cuál es el lugar más adecuado para establecer este segundo Consulado. Si a esto se le añade que, indudablemente, el aumento del gasto que esto comporta podría incluirse en el presupuesto del año 2002 dadas las fechas en las que estamos, parece que la redacción propuesta en la enmienda del Partido Popular, a la que ahora hemos añadido esta transaccional, puede dar satisfacción a nuestros compatriotas y espero que también a los grupos representados en el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Soriano.

¿Grupos que deseen fijar su posición? (**Pausa.**)

Señor Centella.

El señor **CENTELLA GÓMEZ**: Señor presidente, intervengo brevemente para manifestar la postura favorable de mi grupo en relación con la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria por entender que estamos ante un problema que debe ser resuelto, una situación que debe mejorarse. El hecho de que la petición proceda del Consejo General de Inmigración evidencia que no estamos ante un capricho, sino ante una postura razonada a la que se le debe dar una respuesta positiva por parte del Gobierno, que es quien tiene en sus manos los elementos. Nos alegramos de que el portavoz del Partido Popular haya propuesto al final de su intervención esa enmienda transaccional, ya que así podremos avanzar en una situación que en Venezuela es muy deficiente en

comparación con otros países. Tenemos datos de que en Argentina hay cinco consulados para 200.000 españoles mientras que en Venezuela sólo hay uno para 130.000. Así pues, se trata de un problema que no necesita mayor explicación después de los argumentos que ha expuesto el portavoz de Coalición Canaria, por lo que tan sólo nos queda esperar a que hoy se alcance el consenso en esta Cámara y a que el Gobierno sea capaz de resolver esta situación a la mayor brevedad posible.

Nada más y muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.
Señor Grau.

El señor **GRAU I BULDÚ**: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la propuesta del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la coherencia de solicitar la mejora de los servicios consulares en Venezuela y ello con posterioridad a la aprobación, aunque no viene al caso, de una moción relativa a la Ley de extranjería, que ha puesto en evidencia la necesidad de unos servicios consulares más potentes en la mayoría de los países en los que España tiene relaciones, que en el caso de la Ley de extranjería, era en los países donde el saldo migratorio era favorable a la emigración hacia España, como sucede en la zona subsahariana. Pero en el caso de Venezuela ocurre todo lo contrario. No podemos obviar la importante colonia española residente en este país, que tiene como gran masa destacada a los emigrantes canarios. Por ello, es coherente la propuesta del Grupo de Coalición Canaria que nos presenta al respecto.

La distribución de la población en Venezuela tiene la peculiaridad de contar con una amplia área metropolitana en la ciudad de Caracas y en ciudades como Maracaibo, Mérida, Medellín y Barquisimeto la presencia de nuestros emigrantes es notable, pero el nivel de servicios que les damos con nuestro Consulado es inferior. Al parecer, la solución que en estos momentos regula este servicio consular, según nos ha manifestado el señor Soriano, del Partido Popular, es tener la oficina consular más importante del mundo en Caracas y el resto del país cubierto por un fuerte contingente de cónsules honorarios, agentes consulares y funcionarios que dan cobertura al servicio. Esta situación posiblemente sea efectiva, pero, en nuestra opinión, la creación de este segundo Consulado en Venezuela es positiva para que de una forma más directa nuestros servicios estén asegurados por los funcionarios de carretera y, tal como hemos dicho al principio, mejorar y potenciar los servicios consulares en el extranjero. La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular y la transaccional que ha leído el señor Soriano abren esta vía de consenso para que esta Cámara, de forma unánime, pueda efectuar una propuesta consensuada para la aper-

tura del segundo Consulado en Venezuela, dejando al Gobierno la libertad de la ubicación de esta segunda oficina consular en el lugar donde crea oportuno.

Así pues, acordado y obtenido este consenso, nuestro grupo votará de forma positiva esta proposición, en la confianza de que nuestros compatriotas en Venezuela tendrán el servicio consular eficiente que se merecen y al nivel de los tiempos actuales.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Grau.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Hernández.

El señor **HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, intervengo en nombre del Grupo Socialista para fijar la posición en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre la creación de un segundo Consulado en Venezuela.

Cuando estaba pensando en lo que iba a decir para fijar la posición del Grupo Socialista, alguna de las intervenciones que he oído me han dejado la duda razonable de si la Venezuela sobre la que yo estaba pensando, con los datos de que dispongo, y la Venezuela de la que he oído hablar aquí esta tarde al portavoz de algún grupo parlamentario es la misma. Alguna de las intervenciones ha estado más en función de ajustar la intervención a una consigna de voto que a la realidad que viven los emigrantes españoles, especialmente los canarios en Venezuela. Me ha parecido oír eso tan manido y dicho tantas veces de predicar y no dar trigo; en este caso de predicar y prometer dar trigo, cuando se ha hecho alusión a una transaccional como punto segundo de la enmienda de modificación que presenta el Grupo Popular.

Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición en relación con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y, como no podía ser de otra manera, el voto del Grupo Parlamentario Socialista va a ser favorable a esta proposición no de ley. En primer lugar, porque esta iniciativa responde a una necesidad objetiva de una amplia colonia de españoles y descendientes de españoles que en su inmensa mayoría viven tiempos de grandes dificultades; dificultades que se pusieron de manifiesto a raíz de la catástrofe ocurrida en diciembre de 1999 en el Estado de Vargas, que dejó en situación de damnificados a miles de españoles y descendientes de éstos y que, sin embargo, como ocurre con muchas desgracias, sirvió para sensibilizar, especialmente a las instituciones de Canarias, acerca de los problemas cotidianos que sufrían nuestros emigrantes, pero que hasta el momento de la desgracia no se habían percibido en toda su magnitud.

Uno de los asuntos que más quejas provoca entre la colonia canaria en Venezuela es el lento proceso en la tramitación de documentos y las dificultades de acceso para poder plantear al cónsul general de España en Venezuela las cuestiones que día a día están afectando a nuestros emigrantes allí. Además, se quejan del trato discriminatorio que reciben con respecto a emigrantes de otras de nuestras comunidades autónomas. Asimismo, hay que añadir que no existe otra representación consular española en ninguno de los restantes Estados de la República. Así un emigrante del interior del país, de un país extenso además, que pretenda tramitar cualquier documento tiene que dirigirse necesariamente a Caracas. Se da la circunstancia de que un ciudadano español o descendiente de éste que viva en la parte oriental del país, por ejemplo, en el Puerto de la Cruz, ciudad de una gran colonia de canarios, en el caso frecuente de que tenga que gestionar cualquier documento consular se ve en la obligación de utilizar el transporte aéreo, muy caro, o el transporte público por carretera a través de cientos de kilómetros hasta Caracas, lugar donde está el consulado. En términos relativos, señorías, se nos hace difícil entender que en un país en el que residen más de cien mil españoles y cerca de medio millón más de descendientes de españoles, solamente haya una oficina consular de carrera. Es difícil entender, si se compara esta situación con la de otros países del área con menos residentes españoles y, sin embargo, con más oficinas consulares de carrera, como se hace mención en la parte expositiva de la proposición no de ley que debatimos y que ha presentado el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.

Las carencias materiales y personales de nuestra representación diplomática en Venezuela han quedado en evidencia, no sólo en la hora de las catástrofes, sino en el cada día de emigrantes e hijos de emigrantes que desde hace más de una década se han acercado al Consulado único de Caracas en busca de información y soluciones para regresar a España o para acogerse en la propia Venezuela a la cobertura de la Seguridad Social española. En el último viaje de una representación del Partido Socialista de Canarias a Venezuela, hace escasamente un mes, y en los contactos mantenidos con la colonia de emigrantes de Canarias en Venezuela se constató que la primera queja, la primera por ser la más generalizada, es la falta de una oficina consular de carrera en cualquier otro lugar del país que no sea Caracas.

Señoras y señores diputados, aprovecho la ocasión para dejar constancia expresa en esta Cámara de la mala gestión y de las dificultades de acceso existentes para poder plantear al cónsul general de España en Venezuela las cuestiones que afectan a los canarios residentes en ese país. Se da el caso de que en muchas ocasiones —y hay constatación expresa y documentada de ello— los ciudadanos se trasladan a Caracas con la intención de resolver cualquier trámite y han de regresar a sus lugares de origen, a cientos de kilómetros en algunas oca-

siones, después de muchas horas ante las ventanillas de la representación consular de Caracas en espera de turno, sin haber culminado la gestión. Es el vuelva usted mañana tradicional de nuestro país, ya afortunadamente casi desaparecido, pero que ahora es sufrido por españoles que están fuera. También es frecuente que para la tramitación de las pensiones de viudedad o para las contributivas y no contributivas muchos de ellos han de recurrir a familiares que tienen en España para que éstos la inicien en las oficinas de la Seguridad Social de nuestro país.

Por todas estas razones, señoras y señores diputados, pero sobre todo porque creo que esta es una iniciativa que responde al sentido común y a la solidaridad, el Grupo Socialista votará favorablemente esta proposición no de ley, señalando, además, que este voto favorable demanda la mayor celeridad en la creación de una segunda oficina consular de carrera en Venezuela y que la determinación estratégica sobre su demarcación y sede ha de atender, con prioridad y por encima de cualquier otra consideración, los intereses sociales de los emigrantes más modestos, así como los de sus descendientes, radicados fuera Caracas, con el objetivo de que puedan ser atendidos dignamente y en las mejores condiciones los españoles que residen en Venezuela. De algún modo, señorías, se trata de algo que les debemos, porque gracias a ellos, a sus esfuerzos y ahorros, en muchas esquinas de la España pobre fueron menos graves las penurias de la posguerra.

En relación con la enmienda del Grupo Popular, de modificación del punto segundo, que presenta como transaccional, anuncio que la apoyaremos únicamente en el caso de que Coalición Canaria la acepte.

Muchísimas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Hernández.

Señor Rivero, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas que se han planteado.

El señor **RIVERO BAUTE**: Muchas gracias, señor presidente.

Ha quedado puesto de manifiesto en el debate lo que señalaba al principio, la honda preocupación y la sensibilidad de todos los grupos de la Cámara, así como que esta proposición no tiene un carácter partidista sino que se trata de un asunto en el que hay una conciencia general de la necesidad de apoyar al mundo de la emigración y, en ese sentido, me parece que todas las aportaciones han sido positivas.

Señor presidente, nosotros entendemos que en estos momentos existen condiciones objetivas para que hoy, contundentemente, se aprobara la creación del segundo consulado de carrera en Venezuela, condiciones objetivas por los argumentos que esgrimía, ya que estamos hablando de una cantidad irrisoria, 200, 300 ó 400

millones de pesetas para crear un segundo consulado de carrera...

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Señor Rivero, perdone, simplemente tiene la palabra a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas.

El señor **RIVERO BAUTE**: Sí, señor presidente.

Decía que entendemos que existen las razones objetivas para contundentemente aprobarlo y ponerlo en marcha, pero también entendemos que en estos momentos el Gobierno tenga que estudiarlo, básicamente para buscar el punto geográfico donde mejor pueda complementar el consulado general de Caracas, por lo que aceptamos la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular y anunciamos que, a partir de estos momentos, Coalición Canaria va a hacer un riguroso seguimiento de este asunto, hasta tanto consigamos lo que entendemos que es de justicia, que es la instalación de un segundo consulado que atienda en mejores condiciones las necesidades de nuestros emigrantes.

Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Rivero.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre creación de una nueva oficina consular de carrera en Venezuela, en los términos aceptados por el grupo proponente.

Comienza la votación. **(Pausa.)**

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 287.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Queda aprobada dicha proposición no de ley.

— **DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEJORA DE LOS DERECHOS PASIVOS DEL PERSONAL MILITAR PROFESIONAL CON UNA RELACIÓN DE SERVICIOS NO PERMANENTE. (Número de expediente 162/000268.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): A continuación vamos a pasar al debate de la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre mejora de los derechos pasivos del personal militar profesional con una relación de servicios no permanente.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Atencia.

El señor **ATENCIA ROBLEDO**: Con la venia, señor presidente.

Señoras y señores diputados, hace tres semanas, concretamente el día 3 de abril, discutíamos en esta Cámara, en una sesión plenaria, dos iniciativas de carácter legislativo presentadas por los grupos parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida, que proponían ampliar la protección social de los militares profesionales de tropa y marinería, y de complemento. Entonces esta Cámara rechazó ambas iniciativas porque no se puede proponer —así lo dijimos desde el Grupo Popular y lo entendió la mayoría de la Cámara—, de forma un tanto frívola, al calor de un asunto totalmente desmontado como era el de los Balcanes, modificar la Ley 17/1999, que todavía no tiene dos años de vida y que tuvo un amplio respaldo parlamentario, para incluir ahora lo que no se propuso entonces. Desde nuestro punto de vista, hay que desarrollar esta importante Ley, no modificarla.

También quedó demostrado aquel día, en aquel debate, que no existe ningún tipo de desamparo social para nuestros soldados y marineros profesionales, que tienen —conviene recordarlo, señorías— las mismas prestaciones que los militares permanentes, sin más diferencias que las debidas a la pertenencia a uno u otro grupo regulador. No obstante, señorías, como ya dijimos en aquel debate, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que hay cosas que hay que desarrollar y cosas que se pueden mejorar. De ahí la iniciativa que hoy trae el Grupo Popular, y que tengo el honor de presentar, para defender los derechos pasivos del personal militar profesional con una relación de servicio permanente.

Nuestro grupo parlamentario es consciente de que la puesta en marcha del nuevo modelo de Fuerzas Armadas impulsado por el presidente Aznar, y que ha sido respaldado ampliamente por las Cortes Generales, que desde el punto de vista normativo se concreta en la Ley 17/1999, del régimen del personal de las Fuerzas Armadas, ha demostrado la existencia de algunas disfunciones entre dicha norma y otra normativa aplicable. Así, nos encontramos, señorías, que los derechos a pensión o indemnización de los militares de complemento y de los militares profesionales de tropa y de marinería, con una relación de servicio de carácter personal, están regulados en el texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, de 30 de abril de 1987, que ha sido desarrollado mediante el Real Decreto de 7 de mayo de 1999. En esta norma, de forma transitoria y hasta que se aprueben unos cuadros médicos para estos militares con una relación no permanente —soldados y marineros profesionales o de complemento—, se establece una remisión a unos cuadros médicos de la normativa en la que se regula la concesión de las pensiones o indemnizaciones de los que todavía prestan el servicio militar de carácter obligatorio y de aquellos alumnos de los centros militares profesionales de formación. Pero estos cuadros médicos son claramente insuficientes para dar un tratamiento adecuado a los casos que se vienen presen-

tando, hasta el punto de que cerca de un 70 por ciento de las lesiones o enfermedades que se presentan no están contempladas en ellos, teniendo que resolverse por analogía. Asimismo, entre los casos que se han presentado ha habido algunas lesiones o enfermedades que, siendo causa de resolución del compromiso que vincula a estos profesionales, generan indemnizaciones o pensiones de escasa cuantía en relación con el perjuicio causado y con la posibilidad de reincorporarse al mundo laboral. A título de ejemplo, con la actual normativa aplicada de forma transitoria, una paraplejia de miembros inferiores da lugar a una pensión del 70 por ciento del haber regulador anual. Esta lesión, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, aplicados en España por un real decreto del año 1999, produce unas minusvalías del 75 por ciento o superior y debería generar derecho a pensión del cien por cien del haber regulador.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone en el punto primero de la proposición no de ley que discutimos, con el fin de objetivar el proceso de reconocimiento de las prestaciones, instar al Gobierno a que apruebe unos cuadros médicos que tengan en cuenta las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud para equipararlos a otras situaciones similares, como pueden ser las pensiones no contributivas.

En segundo lugar, también la puesta en marcha de este nuevo modelo de Fuerzas Armadas, así como la experiencia acumulada desde el año 1998 en la aplicación de los derechos pasivos del personal profesional militar con una relación de servicio de carácter no permanente, ha demostrado, como he dicho, la existencia de determinadas disfunciones. Y también lo ha hecho en el sistema de prestaciones previstas para este colectivo, que se concretan fundamentalmente en que hay lesiones que generan únicamente derecho a indemnización por una sola vez, pero que dificultan el cumplimiento de uno de los objetivos de la Ley de profesionalización de las Fuerzas Armadas, como es la reincorporación a la vida laboral. Precisamente por eso, la naturaleza no permanente de estos militares profesionales ha motivado que durante el tiempo de servicio se impulsen actividades que permitan la obtención de titulaciones que, cuando acabe su compromiso, posibiliten la vuelta a la vida laboral, uno de los objetivos de la ley. Así, nos encontramos que si el soldado o marinero profesional tiene un futuro en la vida laboral, y de hecho es el único personal incluido en el régimen de clases pasivas que cotiza por desempleo, el sistema de protección debe tener como finalidad compensar las disminuciones en la capacidad para el trabajo que se originen durante el tiempo de prestación del servicio. Por ello, en el punto segundo de esta iniciativa, el Grupo Popular propone adaptar las actuales prestaciones que se reconocen por el régimen de clases pasivas a los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería, de manera

que se compense la disminución de la capacidad para la reincorporación laboral que se haya producido durante el tiempo de prestación de servicio en las Fuerzas Armadas, estableciendo prestaciones adecuadas —como dice la iniciativa: pensiones o indemnizaciones— en función del grado de discapacidad, valorado conforme a las tablas establecidas por la Organización Mundial de la Salud.

A esta iniciativa, señora presidenta, se han presentado dos enmiendas. Quisiera fijar posición sobre las mismas, sin perjuicio del turno posterior para su aceptación. La enmienda del Grupo Mixto, del diputado del Bloque Nacionalista Galego, es coincidente casi literalmente con parte del texto de carácter legislativo que discutimos en la anterior iniciativa de los grupos de Izquierda Unida y Socialista, y por los argumentos que emplearon aquel día no puede ser admitida por este grupo. Además, parte de un concepto erróneo, y es que hay que tener en cuenta que las propias prestaciones sociales de los soldados y militares profesionales que tienen una relación de servicio de carácter no permanente se tienen en cuenta en su propia regulación, por tanto no pueden equipararse regímenes absolutamente distintos.

En cuanto a la enmienda del Grupo Socialista, el Grupo Popular entiende que amplía y concreta el espíritu de la propia iniciativa del Grupo Popular. Como ya manifestó el ministro, señor Trillo, en la visita que los portavoces hicimos a Bosnia, con la mayor voluntad nuestro grupo está dispuesto a tratar de alcanzar una solución. En ese sentido, estaría en condiciones de ofrecer una transaccional, sin perjuicio del trámite formal que haya que hacer. De esta forma, en cuanto al plazo que establece su iniciativa —punto 1 y 2 de la enmienda—, pondríamos seis meses, que parece el plazo preciso para hacer en condiciones las adaptaciones normativas de los cuadros médicos. En segundo lugar, en cuanto al punto 3 de su enmienda, que es de adición, nos parece bien el texto acerca de poner en marcha las propuestas que ha realizado el comité científico, que el propio ministro de Defensa anunció en esta Cámara que se pondría en marcha y cuyas resoluciones se han dado en conocer. Simplemente añadiríamos una coletilla al final del texto que propone el Grupo Socialista, que sería: adaptándolas en cada momento a los estudios que realice el propio comité científico, teniendo en cuenta las circunstancias que aparezcan en la situación concreta que, como consecuencia de la situación producida en los Balcanes, se acordó investigar. En definitiva, con esas transaccionales que se ofrecen, su enmienda podría incorporarse al texto, enriquecerlo y mejorarlo. En cualquier caso, espero su respuesta, señor Marsal.

En todo caso, señoría, el Grupo Popular entiende que lo que propone con su iniciativa es la mejora de las prestaciones sociales de nuestros soldados y marineros profesionales, así como de aquellos otros militares que tie-

nen una relación de servicio de carácter no permanente, como pueden ser los de complemento, de forma que con la iniciativa desarrollamos nuestra legislación, subsanamos y corregimos disfunciones que el nuevo modelo de Fuerzas Armadas ha introducido en nuestro país y, sobre todo, damos tranquilidad y posibilidades de futuro, tanto en lo que se refiere a la reincorporación al mundo laboral como en lo que se refiere a la posibilidad de cubrir toda la amalgama de prestaciones sociales.

Por todo ello, señorías, pedimos el respaldo de esta Cámara a la iniciativa del Grupo Popular.

Nada más. Muchas gracias.

La señora **VICEPRESIDENTA** (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Atencia.

Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, interviene, en primer lugar, el señor Rodríguez Sánchez, por el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor **RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**: Gracias, señora presidenta.

A pesar de que sea intención fracasada, es intención del Bloque Nacionalista Galego que se reconozcan los mismos derechos de protección social ya establecidos para los militares de carrera a los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería. La razón es la siguiente. El carácter temporal de la prestación de servicios de los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería no debe servir de excusa para que las coberturas sociales y sanitarias sean sensiblemente inferiores a las del resto de militares de carrera, sino que deben ser equiparadas de forma inmediata.

Es cierto que la redacción otorgada por el Partido Popular a este apartado supone una leve mejoría de las prestaciones reconocidas a ese colectivo, pero niega la posibilidad de obtener pensiones periódicas, pues incluye la simple adaptación de las prestaciones, lo que significaría únicamente aumentar las indemnizaciones a tanto alzado que perciben. Frente a ello, la enmienda del Bloque Nacionalista Galego está destinada a impulsar las medidas necesarias, reformas legales incluidas, para que la acción protectora de los militares profesionales de tropa y marinería y los de complemento sea sensiblemente mejorada, incluyendo el reconocimiento de pensiones de carácter periódico para que sirva de compensación justa al efecto de ingresos en casos de lesiones o enfermedades determinantes de incapacidad permanente. El nivel de la acción protectora reconocida debe ser el mismo que el otorgado a los militares de carrera, garantizando la igualdad de trato para todos los militares en prestaciones sociales y sanitarias. Pensamos que sería una de las fórmulas de no solamente atraer gente a la carrera militar, sino de darle seguridad y el amparo debido.

La segunda enmienda, de adición, va destinada a dar un mayor alcance a la acción protectora derivada de

lesiones o enfermedades acaecidas durante la prestación de servicios en las Fuerzas Armadas, de manera que se reconozcan a los militares de complemento y profesionales de tropa y marinería los derechos pasivos, aun cuando la manifestación de las lesiones se produzca una vez terminada la relación de servicios.

Los recientes casos de soldados pertenecientes a ejércitos europeos, incluido el español, aunque oficialmente se siga negando, que desarrollaron enfermedades después de desplegar acciones militares en los Balcanes, aconsejan ser flexibles en estas circunstancias, otorgándoles todo el beneficio de la acción protectora, social y sanitaria del régimen especial de las Fuerzas Armadas si existen indicios suficientes de que las enfermedades padecidas con posterioridad fueron contraídas durante la prestación de servicios en las Fuerzas Armadas. Aunque en este momento esta filosofía y estos objetivos no se acepten, con el tiempo, si este es un Estado democrático, no habrá más remedio que aceptarlas plenamente.

Nada más. Muchas gracias.

La señora **VICEPRESIDENTA** (Rubiales Torrejón): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.

El señor **MARSAL MUNTALÁ**: Gracias, señora presidenta.

Señorías, como muy bien decía el representante del Grupo Popular, señor Atencia, esta proposición no de ley tiene su origen en una proposición de ley del Grupo Socialista. Por el hecho de no votar la proposición que este grupo presentaba, su grupo, como comprobamos hace tres semanas en su debate, presentó esta proposición no de ley que ahora procedemos a debatir. Utilizó usted entonces, y hoy ha repetido, un método parlamentario de no muy alto vuelo, que es la descalificación de la propuesta del adversario. Nos dijo la otra vez que nuestras propuestas adolecen del necesario rigor y sosiego con el que deben abordarse iniciativas del calado y de la envergadura de la que estamos hablando. Algo nos reconocía: que tenía calado y que tenía envergadura. Algo es algo. Después, nos decía: Con el mayor de los respetos —cosa que también agradecemos—, nos parece que se hace de forma oportunista y probablemente con cierta frivolidad al calor de unos determinados acontecimientos. A la vista de estos calificativos, nos sería bastante fácil hacer un análisis también de calificativos de la proposición no de ley que nos presentan, pero no voy a hacerlo. ¡Para qué si ni el Gobierno ni el grupo que lo sustenta, con todos los recursos que tienen, fueron capaces en este tiempo de presentar una proposición de ley y lo único que han podido presentar es una proposición no de ley! Los hechos son suficientemente significativos como para que yo no tenga que hacer ningún calificativo. No es este el tema. Lo que tenemos que debatir es el contenido, lo que dice la pro-

posición no de ley que, tal como señalé hace tres semanas, básicamente es lo mismo que nosotros decíamos.

Podían haber optado ustedes por el camino de presentar enmiendas después de aceptar a trámite nuestra proposición de ley. No es este el camino que eligió el Ministerio y el grupo parlamentario. ¡Qué le vamos a hacer! Sería una posible reacción nuestra hacer como ustedes, decir que como la propuesta no lo hacemos nosotros, por el simple hecho de que la hace el Gobierno y quien le apoya, vamos a votar que no. Pero nuestro tipo de comportamiento pretende ser distinto a otros comportamientos. No nos vamos a fijar en quién lo propone sino en qué es lo que se propone. Y como lo que se propone coincide básicamente con lo que nosotros decíamos, por lógica, ya no por lógica política que seguramente tiene otras normas de juego sino en por la lógica del sentido común, nosotros vamos a votar que sí a esta proposición no de ley que han presentado.

Nos ha parecido oportuno presentar unas enmiendas que creíamos que contribuían a mejorar la propia proposición no de ley. Evidentemente desde la modestia de un grupo que no gobierna, que no tiene los mismos apoyos técnicos que puede tener quien apoya al Gobierno, pero desde esta modestia queremos contribuir, y creo que lo hemos conseguido por las palabras del señor Atencia, a mejorar algo el texto. Lo primero es que, como mínimo, la proposición no de ley tenía que fijar un plazo para que el Gobierno cumpliera los dos elementos de la moción a que le vamos a instar en un momento a través de la votación. Proponíamos el plazo de tres meses, porque creíamos que el Gobierno ya había estado trabajando en ello y que con tres meses tenía suficiente tiempo. ¿Se nos pide que en vez de tres meses sean seis? No hay problema, seis meses. Aceptamos su transaccional que en vez de tres meses sean seis. ¿Es esto lo que necesita el Gobierno? Lo importante no son los tres o seis meses sino que lo que adopte el Gobierno sea bueno para aquellos que se van a ver afectados en positivo para los cambios que el Gobierno tiene que realizar. Pero, además, nos parecía que teníamos que aprovechar la ocasión, no el Grupo Parlamentario Socialista, sino este Parlamento, de que teniendo ya sobre la mesa el informe que el grupo de expertos había realizado por encargo del Ministerio, que había sido presentado en el Senado y, por lo tanto, estaba ya en las Cortes, no tenía sentido que en una resolución de este Congreso no tuviésemos en cuenta este informe. Este informe contiene siete propuestas de seguimiento de la situación, propuestas que encontramos acertadas y que si se nos permite diremos que coinciden en gran manera con algunas de las que hacíamos en las dos proposiciones no de ley que habíamos presentado conjuntamente con la proposición de ley y que son las siguientes: continuar haciendo un seguimiento general de la situación desde el punto de vista sanitario para confirmar los resultados; seguir el protocolo iniciado de reconocimiento previo al despliegue; establecer una coordi-

nación con el sistema general de reconocimientos médicos periódicos; mantener al día y completar las bases de datos; efectuar el seguimiento de la cohorte durante el tiempo que se considere preciso; asignar las tareas de seguimiento a un órgano especializado de la sanidad militar —cosa que nosotros proponíamos casi con las mismas palabras—: mantener el comité científico como referencia y consulta y finalmente el mantenimiento de las muestras biológicas para eventuales análisis en el futuro. Siete propuestas diría que también de sentido común; por tanto, instar al Gobierno para que lleve a la práctica, que ponga en marcha estas proposiciones nos parecía que era lo mínimo que esta Cámara podía realizar. Nos propone usted en su enmienda transaccional que le añadamos una coletilla y como tiene sentido común nosotros aceptamos también plenamente.

Nos aceptan el cuarto punto sin ninguna modificación que se refiere a que cada año se envíe un informe a la Comisión de Defensa con los resultados para que pueda hacer el seguimiento. Por tanto nos parece que lo que hoy vamos a aprobar —y esperamos que pueda ser incluso por unanimidad de toda la Cámara— es un avance, es un resultado no como el que habríamos deseado, pero es un paso adelante y creemos que por esto podemos votar a favor con tranquilidad, porque creo que hemos obtenido a través de nuestras iniciativas, a través del grado de recepción del grupo mayoritario, tenga la valoración que tenga este grado pero algo ha habido, un avance y hemos conseguido tres cosas que para nosotros son y eran importantes desde el primer momento.

En primer lugar, y como tema más importante, mejoramos las condiciones de los hombres y mujeres que sirven en nuestros ejércitos, que participan en operaciones de paz y que por tanto también tiene incidencia con los hombres y mujeres civiles de organizaciones no gubernamentales, como la propia Guardia Civil, la Policía u otras instituciones que puedan participar en operaciones de paz. No hemos conseguido el cien por cien de lo que pretendíamos, sin embargo algo hemos conseguido, el 50 ó 60 por ciento, no lo sé, pero algo hemos avanzado y por tanto en algo ha sido útil esta oposición con sus iniciativas; aunque técnicamente no estemos muy preparados, pero algo hemos conseguido.

En segundo lugar, también un tema importante: no dar por cerrada la situación. Nosotros señalamos desde el primer momento que teníamos nuestras dudas sobre que la causa estuviese en el uranio empobrecido. Creíamos que se daba una situación y que se tenía que seguir estudiando, se tenía que seguir trabajando. Con la aceptación de nuestra enmienda para poner en marcha los siete puntos de la comisión de expertos, conseguimos también esta petición, que el tema sigue abierto, que se va a seguir trabajando y por tanto incide también en las mejoras sociales y sanitarias para los

que han participado, los que están participando y los que van a participar en el futuro.

En tercer lugar —y voy terminando, señora presidenta— hemos conseguido también un elemento importante, que el Parlamento siga teniendo un papel central en el seguimiento de esta situación. Desde el primer momento lo ha tenido; desde el primer momento ha habido iniciativas de diversos grupos sobre la situación que se había producido alrededor de nuestra participación en operaciones de paz en los Balcanes.

Aceptando el envío anual de un informe esta Cámara, concretamente a través de la Comisión de Defensa, podrá hacer un seguimiento de lo que se está haciendo, de los resultados y podrá tener, por tanto, las bases necesarias para tomar aquellas iniciativas —si es necesario tomarlas en algún momento— que vayan también en el sentido de la principal finalidad de nuestra intervención, que es mejorar las condiciones de los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas y así contribuir también, como dijimos desde el primer momento, a la buena finalización del proceso de profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas.

Este es el resultado de un amplio debate. Aún va a haber otros pasos. Vamos avanzando. Creemos que podemos seguir avanzando y esperamos que así sea.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora **VICEPRESIDENTA** (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Marsal.

¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir para fijar su posición? (**Pausa.**)

En primer lugar, tiene la palabra el señor Mardones.

El señor **MARDONES SEVILLA**: Muchas gracias, señora presidenta.

Mi grupo va a votar favorablemente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que con la forma preceptiva de proposición no de ley nos ha presentado su portavoz, coincidiendo plenamente éste que ahora habla con todos los extremos expresados. De aquí nuestro juicio de que entendemos que es una iniciativa oportuna y necesaria. Es necesaria porque la Ley 17/1999 señaló el régimen del personal militar profesional, tanto en la escala de complemento como sobre todo en las clases de tropa y marinería y se necesita que todo el ordenamiento protector legal español se aplique también a unos profesionales, una vez desaparecida la figura del soldado de reemplazo obligatorio o conscripto. Por tanto, estos soldados profesionales, en clases de tropa y marinería, son receptores de todos los derechos de protección que da el acervo legislativo español a cualquier profesional.

Esta iniciativa del Grupo Popular señala precisamente dos aspectos concretos, tanto aprobar los cuadros médicos, de acuerdo con el régimen de clases pasivas

del Estado, como adaptar las actuales prestaciones que se reconocen en este mismo régimen de clases pasivas del Estado, sin que sea una equiparación a los funcionarios, porque son unas personas que tienen un contrato, digamos, temporal de compromiso, pero que necesitan ser atendidos en aquellas prestaciones. Pero yo diría más. No solamente es precisa la justificación que trae esta iniciativa, que viene a decir concretamente que con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de reinserción laboral establecidos en la Ley 17/1999, del régimen profesional personal, pero no solamente es esto, porque esta reinserción laboral es una resultante, una cuestión de expectativa que todavía no se ha dado, en este momento el problema no lo tienen nuestras Fuerzas Armadas en la reinserción laboral, sino que hemos de tener los efectivos suficientes de clase de tropa y marinería para garantizar la defensa nacional y que en su día, si buenamente pueden ir aprendiendo un oficio, puedan recolocarse laboralmente.

¿Cuál es el problema actual? La insuficiencia de efectivos humanos para cubrir con eficacia y eficiencia las plazas de soldado profesional de tropa y marinería. Ya dijimos esto en el debate que con mayor profundidad hizo este portavoz el pasado día 3, respondiendo a la oportuna iniciativa, a la proposición de ley de protección social que presentaron tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Allí invocamos nosotros unos planteamientos que el día anterior, el día 2, en la Comisión de Defensa había efectuado el señor secretario de Estado de Defensa —a nuestro juicio muy oportunamente—, diagnosticando el problema y el tratamiento que hay que aplicar, diciendo que al soldado profesional, a la clase de tropa y marinería no solamente había que atenderle con unas disposiciones de tipo material o legislativo, de calidad humana en el servicio militar, sino retenerle, y hay que retenerle no solamente con una buena paga, sino con una profesionalidad vocacional manifiesta, con una serie de atenciones a las que hay que sumar la que trae hoy esta iniciativa. Si algún día tienen que causar baja en las Fuerzas Armadas de base de tropa y marinería, con los elementos que se han añadido a lo largo del tiempo, de mala manera llegarían a una reinserción laboral. Ahora nuestro problema inmediato no es tanto de reinserción laboral sino de retenerle en los efectivos cuantitativos, numéricos de las Fuerzas Armadas.

Esta iniciativa, por lo que se refiere a la retención, es un atractivo más para quien llega a las Fuerzas Armadas profesionales de clase de tropa y marinería y los de complementos, vea que tiene un abanico mayor de posibilidades que le cubren y no le dejan en una situación de incertidumbre y duda, una experiencia acumulada que responde a este principio que estamos viendo desde 1999, pero que tiene que estar sintonizada con la letra y el espíritu de la disposición final séptima de la Ley 17/1999, cuando viene a reconocer que es la adap-

tación del ordenamiento legal de la defensa nacional y el régimen de derechos y deberes de los militares al modelo de Fuerzas Armadas profesionales. Es un eslabón más que debe ir perfeccionándose, de un fenómeno nuevo que va a traer complejidades y complicaciones. Es necesario que el legislador vaya respondiendo puntual y rápidamente a estas exigencias, porque están supeditadas a un bien superior de Estado, que es la defensa nacional, fundamentada no sólo presupuestariamente en unos equipamientos técnicos de sistemas de armas sino en la calidad humana de sus profesionales y en las atenciones que todo un Estado democrático de derecho debe brindarles precisamente para hacerles cumplir, de una manera cómoda y grata, el deber de contribuir activa y personalmente a la defensa de España como bien general de Estado.

Mi grupo votará favorablemente esta iniciativa con las enmiendas adicionales del Grupo Parlamentario Socialista. Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La señora **VICEPRESIDENTA** (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.

El señor **ALCARAZ MASATS**: Muchas gracias, señora presidenta.

Frivolidad. Una ley recién aprobada, supongo que se refiere a la 17/1999, que todavía no hay que tocar, y el tema del uranio empobrecido, algo totalmente desmontado.

Señor Atencia, tiene usted razones de mal pagador, y no sólo eso, son razones de falta de generosidad a la hora de reconocer de dónde viene este debate y quién lo gestiona en un principio para que después usted tenga que reaccionar, que responder. Tendrán que darle algunas clases de centrismo, porque la generosidad innata, con esa idea que tenemos del centrismo desde 1977 a esta parte, ustedes últimamente lo están olvidando de manera cotidiana.

Quiero recordarle que el día 16 de enero comparece el señor Trillo en Comisión para hablar del tema del uranio empobrecido, al que ahora me referiré. Ante las preguntas que le hacemos, concretamente yo también, de si va a haber indemnizaciones para los soldados que han estado en los Balcanes y han tenido problemas que allí enumeramos, y atención sanitaria especial, el señor Trillo dice que no porque no existe una relación de causa-efecto. Eso nos responde el señor Trillo en Comisión. A partir de ahí se publica por *El País* una reforma de ley que establece una marginación o una discriminación entre los funcionarios y los no funcionarios respecto al funcionamiento del ejército profesional en indemnizaciones y cobertura sanitaria. A partir de esas declaraciones del señor Trillo y de su publicación, se deduce lo siguiente, señor Atencia: 15 días

antes de que el señor Trillo dijera lo que dijo, que la Ley de acompañamiento que entra en vigor el 1.º de enero de este año se rectifica por parte del Gobierno —y dice que es tan nueva, que no se debe tocar— a partir del 1 de enero del año 2001 diciendo simplemente —voy al meollo de la cuestión— que los funcionarios sí tienen derecho al doble de las indemnizaciones aunque no se demuestre la relación causa-efecto; sólo los funcionarios, o sea que el problema no es tanto demostrar esa relación causa-efecto —que ni siquiera se ha demostrado en el caso del tabaco— sino que la rectificación de ley que se establece da ese derecho a los funcionarios y sólo a ellos. A partir de ahí, nosotros —que, por cierto, fuimos los primeros en presentar la proposición no de ley, no sólo el señor Marsal la presentó— quisimos reformar esa ley injusta que había sido reformada a primeros de año, como le acabo de decir, y que también tenía otras condiciones respecto a otros decretos absolutamente injustos que queríamos tocar. Por ejemplo, en la Ley de acompañamiento de los presupuestos que se aprobó en diciembre de 1997 —antes de la ley citada—, para que entrara en vigor en 1998, se dejaron a los soldados y a la marinería fuera de los derechos a una pensión, excepto en los casos en que sufrieran una lesión fuerte. Pero esta lesión fuera fuerte o leve no se podía clasificar —no existían las tablas para la calificación del grado de la discapacidad— ya que en el Decreto de 7 de mayo de 1999, donde se desarrollaba ese aspecto, se dejaba al reglamento las tablas que ustedes ahora contemplan en el punto número 1 y ese reglamento no se ha aprobado. Por tanto, también se quedaban fuera de la posibilidad de indemnización no sólo por la Ley de acompañamiento del año 2001, sino también por este decreto que le acabo de citar. A partir de ahí, elaboramos y desarrollamos esta proposición no de ley, y a partir de ahí ustedes caen en la cuenta de que hay que aprobar algo. Me parece que entra en registro su proposición no de ley el 3 de abril, el mismo día en que se desarrolla en este pleno el debate, lo que quiere decir, señor Atencia, que usted debiera retirar la consideración de frivolidad y debiera aceptar que los debates son complejos, son largos a veces y tienen su causa y no voy a decir autores pero sí gente preocupada en este Congreso de los Diputados; que no se le suba también a usted la mayoría absoluta a la cabeza, por favor, señor Atencia.

¿Cuál es el problema? El problema en estos momentos, señor Atencia, es que ustedes no responden con agilidad. No parece de recibo que la mayoría absoluta parlamentaria use las proposiciones no de ley como si de un grupo de la oposición se tratara. No. Ustedes tienen posibilidad de rectificar la ley de inmediato. Su argumento fundamental se cae por su propio peso. Ha dicho usted que la ley es muy nueva —de 1999— y que no se debe rectificar. Ya la han rectificado una vez en la Ley de acompañamiento del año 2001 y se puede rectificar de nuevo. Si se trata de desarrollos reglamenta-

rios, si quieren ir ustedes por esa vía, tampoco tienen que hacerlo a través de una proposición no de ley. Por tanto, la proposición no de ley que ustedes hoy defienden aquí es simplemente una táctica dilatoria, tan dilatoria que no van a aceptar una enmienda de tres meses, la suben a seis meses y sin ninguna posibilidad de control respecto a que se cumpla ese horizonte temporal, táctica dilatoria a través de la cual ustedes intentarán llevar posiblemente la próxima ley de acompañamiento esta rectificación, pero no responden a tiempo ni convenientemente. Votaremos su proposición no de ley porque son los contenidos que nosotros expusimos aquí el día 3 de abril a través de la proposición de ley; pero en todo caso le decimos que falta generosidad.

Señor Atencia, el tema del uranio empobrecido no ha terminado a pesar de la rueda de prensa del señor Trillo, donde se llegó a decir no sólo que no exista relación causa-efecto, sino que no hay causa con 56 casos. Si no hay causa, señor Atencia, ¿por qué no nos vamos a la Comisión de Secretos Oficiales a ver ese documento secreto que mostró el señor Trillo en la Comisión el 16 de enero, documento donde se les dice a los soldados que no pueden tener hijos en dos años? ¿Por qué no vamos a la Comisión de Secretos Oficiales? Ustedes tienen 80 diputados para convocarla, vamos allí, y a partir de allí podremos discutir las previsiones, las prevenciones, las consideraciones que se hicieron a los soldados de cara a la utilización que se estaba haciendo de bombas, de material bélico envuelto en uranio empobrecido y con la aparición de plutonio, como se ha demostrado posteriormente.

Señor Atencia, yo le pido que acorten el tiempo. Pueden rectificar la ley de inmediato, pueden desarrollar el reglamento correspondiente, y no esperen pues no tiene sentido. Les han dado ustedes unas posibilidades a los funcionarios, jefes y oficiales, incluso rectificando la ley, hace un par de meses. Esas posibilidades que dan ustedes a los funcionarios son discriminatorias, no son justas. Luego se quejan de que el ejército profesional no va bien, y efectivamente no va bien; se quejan de que no se ayuda a la formación de una conciencia de cara a lo que ya no es un ejército de leva obligatoria, pero ustedes siguen teniendo esa mentalidad. Piensan que hagan lo que hagan la gente va a seguir inscribiéndose en el ejército profesional. No, señor Atencia. Yo le pido que sean sensibles, discretos y que garanticen esta serie de derechos que estamos pidiendo desde la oposición de manera moderada y racional.

Muchas gracias.

La señora **VICEPRESIDENTA** (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Alcaraz.

Por último, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Maldonado.

El señor **MALDONADO GILI**: Gracias, señora presidenta.

Hace tres semanas debatimos en este mismo hemicycle dos proposiciones no de ley parecidas a la que hoy debatimos, presentada por el Grupo Popular. Hoy debatimos por segunda vez una proposición no de ley básicamente destinada a modificar la Ley 17/1999. Tanto en su día como hoy mi grupo, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ha creído que es necesaria la modificación de esta ley. Las proposiciones de hace tres semanas nos parecían exiguas e incluso mal planteadas. Hoy tampoco nos parece que esto sea una panacea, no nos parece que sea la proposición no de ley que colme las aspiraciones de los hombres y mujeres a quienes va destinada, pero sí es cierto que es una proposición no de ley mejor planteada. Es parecida a las dos anteriores en la forma, pero no en el fondo, y por tanto nosotros la valoramos más favorablemente. De ahí que aunque hace tres semanas y ahora opinamos igual —que estos posicionamientos eran necesarios—, en su día votamos en contra y hoy votaremos a favor.

¿Por qué es necesaria esta modificación que hoy planteamos? Porque es una realidad que determinadas contingencias hoy no están cubiertas y estas contingencias vienen derivadas de la evolución que tiene todo en la sociedad actual, lógicamente también las Fuerzas Armadas han evolucionado y hay que adaptarlas a la situación actual; un ejército cada vez más profesionalizado que respecto a todas estas contingencias no cubiertas, no previstas, requiere que sea modificada su base para que puedan ser cubiertas.

Son muchos los aspectos que hay que actualizar en cuanto a prestaciones; cobertura sanitarias, pensiones e indemnizaciones, etcétera. El sistema actual de cobertura sanitaria provoca en muchos casos situaciones reales de descobertura, pues aunque teóricamente pueda parecer que el soldado de tropa profesional queda siempre cubierto, en la práctica no ocurre así. Muchas situaciones actuales hacen aconsejable un cambio inmediato en el sistema de cobertura sanitaria con el fin de conseguir un tratamiento más justo en ese ámbito para los soldados de tropa profesional. Se ha de tener en cuenta, por ejemplo, que el Real Decreto 1234/1990 fue elaborado para dar cobertura a las lesiones que se produjeran los soldados de reemplazo en acto de servicio, pues cualquier enfermedad o lesión no producida en acto de servicio queda fuera del ámbito de cobertura de este real decreto. Además, no recoge las enfermedades propias de las mujeres, pues no existía ni existe la mili para ellas, y por tanto su ampliación provoca una clara discriminación en relación con las mujeres en la actual tropa profesional.

Sin entrar en el detalle pormenorizado de la tabla de lesiones del Real Decreto 1234/1990, sí es necesario poner de manifiesto que es tan escueta que produce en la mayoría de los casos tremendas injusticias, pues se dejan sin indemnizar lesiones y enfermedades reconocidas por

los propios tribunales médicos militares por el simple hecho de que no se encuentran reflejadas en el mismo. En definitiva, la situación actual provoca un trato injusto y discriminatorio en los soldados de la tropa profesional, que más bien pronto que tarde hará insostenible el mantenimiento del modelo de Ejército profesional creado, pues cada vez más los aspirantes a soldados profesionales se informan de cuáles son sus derechos y obligaciones, y no se puede pretender que el modelo funcione con este régimen de prestaciones actuales, ya que cualquiera que lo conozca, antes de entrar a formar parte de las Fuerzas Armadas se planteará muy seriamente su ingreso sabiendo los riesgos que corre.

Por tanto, como he dicho anteriormente, votaremos a favor porque es una buena propuesta y también en aras de la unanimidad que ha pedido el portavoz socialista, señor Jordi Marsal, y creo que se ha de visualizar que el amplio abanico parlamentario quiere que se subsane una situación actual de injusticia hacia muchos miles de hombres y mujeres y que además no se ajusta al modelo de sociedad moderno y justo que todos pretendemos.

Muchas gracias.

La señora **VICEPRESIDENTA** (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Maldonado.

Señor Atencia, a los solos efectos de señalar su aceptación o rechazo de las enmiendas, S.S. tiene la palabra.

El señor **ATENCIA ROBLEDO**: Muchas gracias, señora presidenta.

A los efectos para los que S.S. me da la palabra, tengo que decir que nuestro grupo, como es partidario del desarrollo de la Ley 17/1999 y de mejorar los derechos pasivos de los soldados profesionales, no puede admitir, como dije anteriormente, la enmienda del Bloque Nacionalista Gallego, y con la transaccional que hemos ofrecido al Grupo Socialista y que es fundamentalmente la enmienda del Grupo Socialista con algunas concreciones, entendemos que se puede mejorar el texto y buscar el objetivo que este grupo proponía. Por ello sin más, señora presidenta, agradecemos las aportaciones de todos los grupos, especialmente la enmienda del Grupo Socialista, y la disposición de los portavoces de los grupos parlamentarios a respaldar esta iniciativa.

Nada más y muchas gracias.

La señora **VICEPRESIDENTA** (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Atencia. **(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre mejora de los derechos pasivos del personal militar profesional con una relación de servicios no permanente, en los términos aceptados por el grupo proponente.

Comienza la votación. **(Pausa.)**

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos emitidos, 279; a favor, 279.

El señor **PRESIDENTE**: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

— **DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS A ADOPTAR POR EL GOBIERNO PARA CONSOLIDAR, PROFUNDIZAR Y MEJORAR EL NIVEL ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA, MUY ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO DEL INSALUD. (Número de expediente 173/000058.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Pasamos al punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista sobre medidas a adoptar por el Gobierno para consolidar, profundizar y mejorar el nivel asistencial de atención primaria, muy especialmente en el ámbito del Insalud. Para su defensa tiene la palabra el señor Arola.

El señor **AROLA BLANQUET**: Señor presidente, señorías, seguimos hablando del modelo de atención primaria, de sus problemas y de sus posibles soluciones. Me gustaría recordar a todos los grupos de la Cámara, aunque no lo voy a hacer, el contenido de todas las intervenciones que he hecho al respecto en nombre de mi grupo parlamentario, fundamentalmente las de la pasada sesión, ya que así a lo mejor ahorramos algo de tiempo. Por tercera vez —se dice que a la tercera va la va la vencida— esperamos que el Partido Popular entienda definitivamente que el Partido y el Grupo Socialista sí creen en el modelo de atención primaria; ya creíamos en él cuando lo propusimos y desarrollamos y seguimos creyendo en el mismo a día de hoy. También el Partido y el Grupo Socialista se alegran de que el portavoz del Partido Popular llegue a creer firmemente en este modelo. Así pues, concediéndole la sinceridad que dicha afirmación merece y supongo que despejadas las dudas, permítanme decir aquello de bienvenidos a bordo. Ahora bien, en el funcionamiento diario del modelo y de los equipos que desarrollan su labor van apareciendo problemas o disfunciones que es preciso solucionar cuanto antes, siendo ésta la actitud que debe adoptar todo aquel que dice defender un determinado modelo. Convendrán conmigo que lo contrario son discursos que no conducen a nada. Ante problemas, soluciones. Yo creo que existe consenso sobre los problemas, y ahí está el «Diario de

Sesiones» para demostrarlo, consenso que esperamos exista también a la hora de buscar soluciones.

La moción que hoy presentamos ante esta Cámara sin duda está encaminada a incrementar los esfuerzos para mejorar la atención a los ciudadanos y para aumentar la satisfacción de los trabajadores profesionales. En definitiva, pretende potenciar una asistencia de calidad y asegurar la equidad del sistema; trata de solucionar los problemas de los profesionales estableciendo un número máximo de pacientes por médico que permita una mejor relación médico-paciente y no de una forma cerrada, es decir, la cifra no es obligatoria sino orientativa, pero la que se produzca debe ser la máxima posible. También —y el concepto de igualdad es muy importante en este punto— hay que ampliar la atención primaria a las medidas tendentes a acabar con la alta tasa de interinidad que tiene el Insalud en estos momentos, intentar evitar que el trabajo de los unos recaiga sobre los otros cuando existe solución para ello, pues incluso se ha aplicado en el pasado. Soluciona los problemas de los ciudadanos, de los usuarios, aumentando el grado de accesibilidad del servicio si, como proponemos, se amplía el horario de apertura de los centros, se generalizan las jornadas de mañana y tarde y si los centros de salud aumentan su presencia en la atención de urgencias. También tendremos profesionales más satisfechos y ciudadanos mejor atendidos si los centros están mejor dotados y si los niveles de atención están mejor coordinados. Creemos que la potenciación de la consulta de enfermería, estudiando propuestas que se vienen realizando recientemente, puede ser otro elemento de mejora de la calidad del sistema.

De la experiencia adquirida a lo largo de estos 17 años de funcionamiento concluimos que no sólo es necesario evaluar el funcionamiento de los equipos, sino que hay que proceder a una redefinición de su sistema de funcionamiento, obviamente desde el diálogo y la negociación entre todos, consejos de salud incluidos. Desde luego, hay que redefinir el papel del coordinador médico dotándole de mayores competencias con el fin de que tenga más y mejores instrumentos para llevar a cabo su labor. La semana pasada, señorías —lo pondré a título de ejemplo—, se celebraron unas jornadas nacionales sobre alcoholismo, que recordarán. Pues bien, dos de cada tres médicos de atención primaria asistentes a las mismas afirmaban no tener información o formación suficiente para abordar en profundidad este problema. La solución para este y para otros muchos casos es potenciar la formación continuada, especialmente en aquellos supuestos que necesiten dar nuevas respuestas a nuevos problemas. En síntesis, señorías, un conjunto de medidas que en caso de realizarse nos permitirían a todos decir que hemos resuelto, y bien, la crisis del modelo, esa de la que hablan los profesionales, las asociaciones científicas, los sindicatos y los usuarios. Y hablar de crisis no es, por cierto, el sombrío panorama que en ocasiones parece entender

de nuestras palabras la señora ministra; en este caso, como en muchos, es hablar de problemas y plantear soluciones.

Como decía antes, la moción que hoy presentamos a esta Cámara está sin duda encaminada a incrementar los esfuerzos para mejorar la atención a los ciudadanos, para aumentar la satisfacción de los trabajadores. Pretende, en resumen, potenciar una asistencia de calidad y asegurar la equidad del sistema. Y quisiera añadir que está pensada fundamentalmente, como la interpelación, en la responsabilidad del Insalud y del Gobierno, que la tienen. No nos olvidamos, sin embargo, de que cualquiera de las medidas que se pudieran llevar a cabo tendrá que tener repercusión en aquellas comunidades autónomas que ya tienen transferida la gestión. Seguimos pensando en un servicio nacional de salud que sea la suma de los servicios regionales o de los servicios de las comunidades autónomas. No queremos ser reglamentistas, sino que planteamos algunos de los problemas y, desde nuestra óptica, algunas de las necesidades y de las soluciones posibles. Creemos —se apruebe o no esta moción— que seguirá siendo necesario algo que es fundamental en materia de sanidad: tener un modelo claro, querer llevarlo adelante y sobre todo diálogo y consenso.

Nada más. Muchas gracias. **(Aplausos.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Arola.

Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción por el Grupo Parlamentario Catalán, señora Riera.

La señora **RIERA I BEN**: Gracias, señor presidente.

Señorías, la asistencia primaria, tal y como recordaba el señor Arola en la interpelación de la semana pasada, es la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud; es el Servicio de Atención Primaria tarjeta de presentación, puerta de entrada, receptor, pongan ustedes los símiles que prefieran. Pero, siguiendo con los ejemplos, también sé lo que aún no es y debería ser: el lugar más acogedor de la casa. ¿Por qué aún no es este lugar? Pues muy sencillo. Al igual que en una casa, para sentirse razonablemente satisfecho uno necesita disponer de un habitáculo adecuado a las necesidades de los que la habitan, poder amueblarlo para sentirse cómodo y que el clima de las personas que lo utilizan propicie la cordialidad, el diálogo y el respeto mutuo de los que en ella habitan. Pues, señoras y señores diputados, nuestra atención primaria, la del conjunto del Sistema Nacional de Salud, toda, aún no ha llegado a esta cualidad, aún no es el lugar mejor de la casa. Y no lo es porque viene arrastrando desde hace tiempo, bastante más de cinco años, un déficit presupuestario lo suficientemente significativo como para imposibilitar que los usuarios del sistema disfruten de la calidad que

se merecen y que los profesionales de la misma trabajen en condiciones adecuadas.

Por consiguiente, haciendo abstracción de la responsabilidad —se lo digo con toda cordialidad, señor Arola, pero también con cierta contundencia—, repito, haciendo abstracción de la responsabilidad que tiene el grupo que presenta la moción, el Grupo Socialista, sobre este déficit histórico que acarrea la financiación sanitaria, muy en concreto el presupuesto destinado a atención primaria, repito que haciendo abstracción de este detalle, que no es ninguna anécdota, mi grupo parlamentario, *Convergència i Unió*, comparte la inquietud que se destila, que se desprende de la moción que usted presenta. Compartimos la inquietud que usted quiere trasladar a esta Cámara para llamar la atención del Gobierno sobre una asignatura que no está resuelta de manera satisfactoria, que no es un tema banal sino uno de los principales problemas porque atiende a más usuarios del sistema y al que, por tanto, debemos encontrar solución. En este sentido mi grupo ha presentado una enmienda escueta, sintética, buscando el consenso para que los grupos de la Cámara puedan sentirse cómodos en ella, pero quiere dejar muy claro lo siguiente. Primero, el problema de escasez de financiación o de mala financiación —llámenlo ustedes como quieran—, no es exclusivamente del territorio Insalud, lo es del territorio Insalud, lo será más el día que el territorio Insalud esté transferido a las comunidades correspondientes, pero lo es también —y usted mismo lo ha querido recordar, señor Arola— de las comunidades que tenemos ya transferidas esta materia y que, por tanto, venimos sufriendo de manera muy acusada este déficit que imposibilita, como en el caso de Cataluña, que a pesar de los grandes esfuerzos hechos por mi Gobierno hayamos podido en el día de hoy formalizar el cien por cien de la reforma.

Con esta enmienda que presentamos —insisto— dejamos constancia de este problema, instamos al Gobierno a que sea sensible a la petición y que la refleje en los correspondientes presupuestos, en los primeros que tendremos que volver a negociar. Pero discrepamos de que la manera de posibilitar que la atención primaria sea la estrella de todo el sistema sea una moción cuyos puntos, a nuestro entender, destilan excesivo reglamentarismo y concreción. Además, si apoyáramos el texto concreto de la moción que ustedes presentan, dando por bueno el espíritu, entraríamos en una grave contradicción que no nos podemos permitir. Ustedes saben, señorías, señores del Grupo Socialista, que precisamente el modelo catalán dista mucho de esta visión. Nosotros pensamos que lo que debemos hacer es conseguir que la atención primaria realmente sea una de las estrellas del sistema o, si ustedes quieren, la estrella del sistema, porque es la que da el servicio generalizado a todos y, para suerte de muchos usuarios, muchas veces no van a pasar más allá de recibir atención primaria, no van a tener necesidad de ser hospitalizados ni

de ser intervenidos. Todo esto debe hacerse con una gran flexibilidad de gestión. Tan es así que en este momento en Cataluña estando yendo en una dirección contraria a lo que pretenden los apartados concretos que ustedes proponen. En aquellos sitios donde nos parece que es lo más adecuado —no es una norma general— llegamos incluso a proporcionar equipos de médicos que puedan habilitar el Servicio de Atención Primaria, les damos los recursos, les damos los medios y que ellos gestionen de la mejor manera que estimen conveniente. Estamos convencidos de que la mejor manera de dar este servicio de calidad es flexibilizando el modelo y que cada cual lo adecue a las necesidades de su comunidad; es más, que dentro de cada comunidad cada cual lo adecue a las necesidades de la comarca, en resumen, a las necesidades de la población destinataria del servicio. Es muy distinto —por decir algo concreto— estar hablando de un sector de población donde mayoritariamente la tasa de edad sea elevada que estar hablando de una población que sea joven, estar hablando de la atención que se debe prestar a los pensionistas y jubilados o estar hablando de la atención en pediatría. Son parámetros distintos que lo serán en función de las comunidades y de las zonas de estas comunidades. Pensamos que muchas veces la mejor consigna para dar este buen servicio es la ausencia de consignas; poner unos parámetros de calidad, contrastar con los usuarios si perciben esta calidad y dejar amplias facultades de maniobra a los que tienen que implementar esta gestión.

Compartimos con S.S. y con algunos de los puntos que explicitan en la moción que es muy importante proporcionar a los profesionales del sistema, a todos —ustedes hablan en concreto de los profesionales de la enfermería, que por descontado—, los recursos, los medios, el ambiente, la seguridad laboral necesaria para que puedan desarrollar su trabajo con comodidad, con tranquilidad y con el tono necesario para transmitir esta calidad, esta garantía y esta sensibilidad. Este es el espíritu de nuestra enmienda y, como acostumbramos, con esta enmienda genérica, expresa y voluntariamente genérica, nos hubiera gustado encontrar un clima de consenso entre el grupo proponente, el grupo que representa al Gobierno y todos los grupos que estamos en la Cámara, porque —lo ha dicho usted en su intervención, señor Arola— todos estamos a favor de la atención primaria, todos; ninguno de los que estamos aquí negamos la principal. Lo que pasa es que en este tema muchas veces no tenemos aquel tipo de fe que sienten los que gobiernan, los que tienen responsabilidades de gobierno, los que tienen posibilidades de implementar presupuestos, que muchas veces sienten que han pecado en este tema, se confiesan y hacen propósito de enmienda, pero la penitencia la pagamos todos, la penitencia la pagan los usuarios. Creo que sería importante visualizar hoy aquí que estamos por la labor y que el Gobierno, que en este momento es quien

tiene la responsabilidad de mejorar lo que aún no funciona del todo, se comprometiera con el espíritu de esta moción, y en atención primaria de salud, señores del grupo que representa al Gobierno, comprometerse significa poner más dinero para poder mejorar el servicio.

Nada más. Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señora Riera.

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra la señora Julios.

La señora **JULIOS REYES**: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Paso a defender la enmienda que ha presentado mi grupo, Coalición Canaria, y a posicionarme ante el problema que actualmente vive la atención primaria. Compartimos con el Grupo Socialista la necesidad de que esta Cámara se posicione ante la actual situación de la atención primaria. En estos últimos meses estamos asistiendo a una polémica entre los profesionales de atención primaria, fundamentalmente los facultativos, y las administraciones sanitarias; me refiero tanto a la Administración del Estado, al Ministerio de Sanidad, como a las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, sobre todo a las que ya tienen las competencias transferidas, con independencia de su color político. Hoy por hoy la expresión de esta reivindicación, aunque tiene un calado y un contenido mayores, se puede decir que la componen los eslóganes de 10 minutos por paciente, 25 pacientes al día y no más de 1.200 personas adscritas por médico. Quisiéramos resaltar que esta actitud reivindicativa de los profesionales de la atención primaria es absolutamente lícita. Podemos estar de acuerdo o no con algunos de los planteamientos, pero lo cierto es que, desde nuestro punto de vista, es una reivindicación realizada desde el buen quehacer y desde el sentido de la profesionalidad. Hoy por hoy no se está afectando a la asistencia, a los pacientes; además, no es una reivindicación salarial, es una reivindicación que pretende una mejora, que pretende profundizar en la reforma del modelo de atención primaria. Por eso aprovecho la oportunidad para felicitar desde mi grupo de Coalición Canaria a este colectivo por la madurez con que está asumiendo su responsabilidad social.

Creo que es en este mismo sentido como debemos reaccionar en esta Cámara. No debe ser objeto de un debate —permítanme la palabra— demagógico. Este problema se ha discutido ya o está pendiente de discusión, además de en este Parlamento, en otros parlamentos autonómicos. No nos parece serio que en cada uno de estos debates se defina la situación de la atención primaria como catastrófica, por poner los ejemplos extremos, o como excelente, según se esté en el Gobierno o en la oposición, intercambiándose los papeles a lo largo del territorio del Estado. El Sistema Nacional de

Salud está valorado como uno de los mejores a nivel internacional, dicho por organizaciones internacionales, así como también la atención primaria. No entendemos que su situación sea catastrófica. Yo diría que el nivel de aceptación por el ciudadano del Sistema Nacional de Salud y de la atención primaria es bueno. Compartimos con el Grupo Socialista la preocupación porque, en la medida en que el modelo no pueda seguir evolucionando, se produzcan pérdidas de calidad del mismo. Entendemos que la situación que vivimos no es nueva. Se está produciendo una evolución de la atención primaria a una velocidad mayor que el aumento de los recursos financieros. La demanda de la población aumenta por muchas razones, no porque no funcione la atención primaria sino todo lo contrario. Por un lado, la población está envejeciendo, hay una mejor oferta y un mayor acceso del ciudadano a los servicios de atención primaria. Esto aumenta la captación de personas sanas y de personas con enfermedades crónicas. En este sentido, estamos ante el problema de un sistema público gratuito que cada vez ofrece más y mejores prestaciones, que a su vez son cada vez más reclamadas por el ciudadano. Los centros de salud son los servicios públicos —no sólo sanitarios sino servicios públicos en general— que están más cercanos al ciudadano, en cada barrio, en cada municipio. Este no es sólo un problema del territorio Insalud; es un problema, en mayor o menor medida, de todo el Sistema Nacional de Salud. Entendemos que es misión de esta Cámara reclamar alternativas para mejorar la atención primaria no sólo de una parte del territorio del Estado, por tanto de una parte de sus ciudadanos, sino de la globalidad del Sistema Nacional de Salud, en consecuencia de la población de todo el Estado español. Por tanto, entendiendo que los papeles de las comunidades autónomas no deben ponerse en entredicho, los papeles de autogobierno, de aumento de competencias y la propia capacidad de gestión que ya tienen transferida las comunidades autónomas o que está por transferirse —en ese sentido va nuestra enmienda—, es responsabilidad del Estado la coordinación y asegurar la correcta financiación del Sistema Nacional de Salud, por tanto de la atención primaria. Lo digo desde una posición de corresponsabilidad de las comunidades autónomas, desde la credibilidad de una comunidad autónoma como la canaria que siempre ha asumido con corresponsabilidad, no sólo política sino financiera, la reforma de la atención primaria desde sus inicios en 1984. La reforma de la atención primaria fue lenta desde sus inicios. En Canarias, desde el año 1984, en que se inicia la reforma, hasta el año 1994, en que se producen las transferencias, fueron pocos los centros de salud construidos por el denominado en aquel entonces Insalud Madrid, es decir, podemos contar con los dedos de la mano los centros de salud que se construían; incluso, cuando la comunidad autónoma los construía con financiación, se quedaban cerrados por no haber ampliación

de plantillas. A partir de 1994 se consolidó el modelo de atención primaria en Canarias, de forma que el número de centros de salud que hoy tenemos funcionando es el 97 por ciento de los que define nuestro mapa. El importante esfuerzo que se realiza desde el Gobierno de Canarias ha sido constante y al alza la financiación propia que se ha ido sumando a la transferencia del Estado. Estamos hablando de un crecimiento del 37 por ciento de los presupuestos de atención primaria en Canarias. En definitiva, entendemos que la atención primaria tiene que seguir mejorando en todo el Estado, y por supuesto en Canarias, porque tenemos deficiencias que probablemente compartimos con el resto del territorio del Estado en cuanto a la necesidad de seguir reformando.

Respecto a la financiación, comparto lo expuesto por la portavoz del Grupo Catalán en el sentido de que la corresponsabilidad implica corresponsabilidad en la financiación por parte de las comunidades autónomas, pero también corresponsabilidad en la financiación por parte del Estado, por parte del Gobierno central, y no sólo para el territorio Insalud, sino para la globalidad del Sistema Nacional de Salud. En ese sentido, hemos presentado un texto alternativo a la moción planteada por el Grupo Parlamentario Socialista que recoge gran parte de los puntos, pero adecuándolos al punto de vista que he expuesto: Sistema Nacional de Salud, no sólo Insalud, salvaguardando las competencias de gestión y de planificación que tienen las comunidades autónomas. Entendemos que, a través del Consejo interterritorial, deben encauzarse grupos de trabajo que definan propuestas en un plazo de tiempo (no voy a leer la enmienda presentada), más que desde el punto de vista de la gestión, para establecer estándares de calidad para el Sistema Nacional de Salud, para analizar y profundizar en los diferentes modelos que ya se están desarrollando en lo que se refiere a unidades de apoyo, a la definición del coordinador, etcétera. En nuestra comunidad autónoma hablamos de director de zona básica de salud y, además, el perfil es diferente según hablemos de zonas rurales o de zonas urbanas. Entendemos que esas competencias deben seguir reservadas para las comunidades autónomas que las tienen transferidas y, para las pendientes de transferir a corto plazo, deben de tener la posibilidad de adaptar la organización a su propio territorio. En nuestro caso —lo pongo como ejemplo—, los perfiles también son diferentes en lo que se refiere a coordinación de atención primaria y especializada. De hecho, sólo en las dos islas mayores continúa habiendo gerencias de atención primaria; en el resto de las islas existe una sola gerencia de servicios sanitarios para la isla, en la cual está tanto la gestión del hospital como la gestión de los centros de salud.

Desde nuestro punto de vista, en el Consejo interterritorial se debe potenciar el intercambio de experiencias en todo el territorio nacional, poniendo énfasis en preservar las diferentes competencias de las comunida-

des autónomas respecto al Ministerio de Sanidad o al Gobierno central. Por supuesto, deberíamos llegar a un encuentro producto del debate de esta tarde en esta Cámara para que pudiéramos llegar a un consenso, cosa que me parece que va a ser difícil. En ese sentido, me sumo a la necesidad de que se plantee estudiar en profundidad, desde el Consejo interterritorial, las necesidades de la atención primaria y de su financiación en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, para que ésta pueda seguir evolucionando como lo ha hecho hasta ahora, pero a una mayor velocidad, puesto que tiene que dar respuesta a unas necesidades cada vez más crecientes de nuestra población.

Nada más. Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Zambrano.

El señor **ZAMBRANO VÁZQUEZ**: Gracias, señor presidente.

Señorías, debatimos hoy una moción consecuencia de interpelación urgente que trata de instar al Gobierno para que tome una serie de medidas para mejorar la atención primaria.

En principio, estamos de acuerdo con la finalidad de esta moción, aunque no estamos de acuerdo con las causas argumentadas para llegar a dicha finalidad. En definitiva, esto de promover mejoras no sólo en atención primaria sino en todo el sistema sanitario es lo que ha venido haciendo el Partido Popular desde que llegó al Gobierno en 1996, lo que llevamos en nuestro programa y lo que planteé en su primer discurso de investidura el presidente del Gobierno, de ahí precisamente el acuerdo de la subcomisión para consolidar y modernizar el Sistema Nacional de Salud. Es necesario que coincidamos en la finalidad, porque por otra parte siempre van a sobrar razones, hablando de salud y de asistencia sanitaria, para encontrar necesidades de aumentar recursos, de redistribuirlos mejor, de iniciar nuevos estudios, de mejorar la organización y, en definitiva, de modernizar nuestro modelo, ya que, como todos sabemos, todo lo relacionado con la salud, concretamente con las ciencias de la salud, está en continua evolución, mucho más cuando en un espacio de tiempo determinado coinciden una serie de circunstancias que pueden promover la necesidad de estar alerta y que nos recuerdan una vez más que la demanda sanitaria no es una foto fija, sino una realidad cambiante.

Podemos enumerar rápidamente esta serie de circunstancias concurrentes, tales como el envejecimiento de la población, del que por otra parte tenemos que congratularnos, porque supone una importante calidad de vida en nuestro país, pero que usted sabe que va a incidir de forma muy importante en el índice de frecuentación; los fenómenos migratorios y los desplaza-

mientos, de gran actualidad, que nos van a obligar a continuas redistribuciones de recursos, ya sean humanos, materiales, temporales o definitivos; las nuevas tecnologías, con sus costes, y los nuevos medicamentos, y cómo no, la necesidad que planteaba la compañera de Convèrgencia i Unió de sacar la financiación necesaria de unos presupuestos generales en los que hemos visto año tras año cómo la partida de sanidad crecía por encima del resto, siendo incluso necesario hacer una financiación aparte para cubrir las necesidades del sistema. También habría que mencionar la revolución informática, en plena expansión, con nuevas aperturas de canales y vías de conocimiento, que sin duda van a cambiar muchas técnicas y muchos modelos tradicionales en todas las ciencias, pero especialmente en el terreno de las ciencias de la salud. Por último, hay que aludir a la revolución genética, que está apenas empezando, pero que promete llevarnos a cambios importantísimos en el terreno de la prevención, del diagnóstico y del tratamiento de la organización sanitaria y que nos llevará incluso a adoptar estudios, disciplinas y planteamientos distintos de los que utilizamos en la actualidad.

Todas y cada una de estas circunstancias, señorías, podrían valer para llevarnos a la finalidad que persigue su moción. Sin embargo, S.S. ha preferido ser más concreto. Se ha agarrado al carro de la oportunidad de unas reivindicaciones, por otra parte legítimas, de un grupo de profesionales en un momento clave para ellos, a punto de recibir unas transferencias, y ha hecho un diagnóstico particularísimo, apuntando la posibilidad de que un determinado modelo esté en crisis, cosa que nosotros no compartimos, aunque habría que discutir mucho lo que significa la palabra crisis. Por eso le decimos que estando de acuerdo con la finalidad, no estamos de acuerdo con las causas argumentadas por la misma.

Plantea además, S.S. una serie de problemas del modelo, destacando fundamentalmente el excesivo número de pacientes por facultativo y ha vuelto a recordar otra vez el problema de la interinidad de los facultativos. No voy a pararme en este punto porque ya lo hemos debatido S.S. y yo y, además, sé que no le gusta que le ponga algunos ejemplos, aunque todos tenemos muy claro cuál fue el momento y el origen del problema. Lo que no me resisto es a recordarle una serie de cifras. Por ejemplo, que en 1995 el porcentaje de interinos en atención primaria era del 56,5 por ciento y en 2000 es del 47,5 por ciento. Es decir, que también en el problema de los interinos, aunque parezca lo contrario, hemos mejorado. Podría recordarle que la cobertura en equipos de atención primaria ha pasado en 1995 de un ochenta y tantos por ciento a prácticamente el cien por cien, más del 97 por ciento que apuntaba la compañera canaria.

No conviene pararse ahora, porque se hizo en el debate de la proposición, en todo esto del soporte de atención

domiciliaria, el 0,61, los planes de la mujer, etcétera. Todo hasta un montante de inversiones de unos 50.000 millones de pesetas entre el período 1996-1999-2000, que supone un 23 por ciento más que el período 1993-1996. Con estos datos objetivos, no me queda más remedio que decir que la situación del sistema y también de la atención primaria es mucho mejor en 2001 que en 1995 porque está casi completado. Por eso, mi compañero de escaño y de portavocía le preguntaba el otro día, poniendo un poco en evidencia su planteamiento, que cómo era posible que con estas evidentes mejoras en un mismo modelo a usted le gustara más el de 1996 que el de ahora, a menos que hubiera dejado de creer en él, cosa que estoy seguro no ocurre.

Su señoría solicitaba también (yo creo que ha concretado demasiado para el ámbito de esta Cámara y ha entrado en un campo que es casi terreno de la gestión) que se respondiera de forma más completa sobre el territorio Insalud. Le recordaba la señora ministra, especialmente refiriéndose al territorio Insalud, cómo estaba la atención primaria y los esfuerzos que se habían hecho. De paso también le recordaba cómo estaban en el resto de las autonomías transferidas que, como S.S. sabe, superan más del 50 por ciento. Para concretar los problemas que a su juicio tenía el conflicto de los facultativos y la supuesta crisis del modelo, S.S. señalaba como fundamental —le repito— el excesivo número de pacientes por facultativo, y la señora ministra le demostraba no con estadísticas, sino con datos, indicadores, índices y ratios, entre los que también estaba el de paciente/ facultativo, cómo el territorio Insalud estaba notablemente mejor que en el resto de las comunidades transferidas.

Como usted también ha dicho que son un problema las dificultades territoriales, eso me da margen hoy para hacer comparaciones en el mismo sentido entre el territorio Insalud y las comunidades transferidas, al fin y al cabo, no tenemos más remedio que hacerlo. Usted sabe que la única forma de medir la calidad asistencial es comparando bien con un prototipo, bien con asistencias sanitarias similares u homogéneas, y qué es más similar y más homogéneo que las comunidades transferidas cuyo modelo es similar porque tuvieron el mismo origen.

Convendrá conmigo, señoría —creo que no hace falta que se lo recuerde—, en que de los datos que dio la ministra y de la comparación sale especialmente bien parado el territorio Insalud, excepto alguna ratio de la Comunidad de Navarra. De esta forma difícilmente vamos a aceptar su diagnóstico de que estamos en crisis en el modelo de atención primaria en el territorio Insalud porque, si esto fuese así, tendríamos que decir que en el resto del territorio estaríamos en catástrofe, y S.S. sabe que no es así, porque además lo demuestra la otra forma de medir la calidad asistencial, que son las encuestas de satisfacción de los usuarios. Dichas encuestas, sean públicas o privadas, nos están diciendo, una y otra

vez, que los usuarios y los españoles tienen un importante grado de satisfacción para con el modelo de atención primaria. Por tanto, señorita, de acuerdo con la finalidad, pero no con su diagnóstico.

Como dijimos al principio, es cierto que en una sociedad cambiante, que propicia una administración cambiante y mucho más en lo relativo a la salud y a las ciencias de la salud, que están en continua evolución, es lógico que tengamos que estar siempre alerta para adaptarnos a todos los cambios, tanto biológicos, genéticos, organizativos como informáticos que planteen nuevas necesidades en el campo de la salud y el modelo sanitario. Porque, le repito otra vez, la demanda sanitaria no es una foto fija, sino una realidad cambiante. Es lógico que tengamos que estar abiertos a nuevas necesidades. Estoy de acuerdo con usted en que hay que aumentar los recursos, pero también hay que redistribuirlos y organizarlos mejor. Me permito recordarle lo que decía un amigo mío agricultor, con cierto gracejo, haciéndome analogía entre el campo y la salud. Me decía...

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Señor Zambrano, le ruego vaya concluyendo.

El señor **ZAMBRANO VÁZQUEZ**: Termino, señor presidente. Me decía que el campo y la salud eran susceptibles de mejora hasta la total ruina de sus dueños. Él tenía razones para decirlo y creo que si S.S. lo piensa, nosotros también.

Bromas aparte, en lo que vamos a coincidir siempre S.S. y yo es en defender el Sistema Nacional de Salud mientras nos siga dando tan excelentes resultados en calidad asistencial. Aunque no estemos de acuerdo con usted en causas y problemas, sí vamos a coincidir siempre con el resto de los grupos en proveer todas las acciones necesarias para que nuestro sistema sanitario y el modelo de atención primaria sigan siendo eficaces, eficientes, equitativos, gratuitos y solidarios. Por eso, incluso después de haber presentado una enmienda, le hemos tendido la mano para llegar a un consenso. No ha sido posible porque S.S. ha concretado demasiado. Y, le vuelvo a repetir, creo que entramos en el campo de la gerencia y de la gestión de la atención primaria. No obstante, no se preocupe por que no lleguemos a un acuerdo, porque el Gobierno va a seguir, como es su obligación, trabajando, dotando y mejorando el modelo de atención primaria y, en definitiva consolidando el Sistema Nacional de Salud.

Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Zambrano.

Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.

La señora **URÍA ETXEBARRÍA**: Gracias, señor presidente. Señoritas, no quiere el Grupo Vasco dejar

pasar la ocasión de decir algo sobre esta moción referida a la asistencia primaria. En el momento de la interpelación nos fue imposible, no porque estuviese prohibido, como va a estarlo a partir del siguiente Pleno, sino porque, como ocurre en esta legislatura cada vez que la interpelación, la pregunta al Gobierno sobre los motivos o propósitos de su política en una determinada área se formula por el Grupo Parlamentario Socialista, los términos del debate se reducen siempre a: ustedes lo hicieron en sus tiempos peor y lo siguen haciendo muy mal allí donde todavía gobiernan. Una espera a ver si los términos del debate se elevan en algún momento, pero desgraciadamente, señoritas, no suele ocurrir. La situación de la atención primaria, tanto sea en el territorio Insalud, como en todo el sistema, merece un tratamiento serio. Por cierto, tengo los datos de ámbito vasco y, siendo mejorables, como ocurre siempre que hablamos de prestaciones dadas desde los poderes públicos —repito, los datos son mejorables—, son sin embargo estimables y las áreas de mejora asistencial son más avanzadas de lo que existe hoy en el territorio Insalud e incluso de lo que se contiene en la moción.

En el sistema que se ha implantado en Euskadi se le ha dado a la asistencia primaria una capacidad resolutive importante y creemos que debe tenerla. No es una hermana pobre, aunque resulte menos lucida que otras áreas médicas. Es un eslabón a no olvidar. A veces se soportan altísimos costes en otras áreas por inadecuación de la primaria. Muchas veces la saturación de las listas de espera, las urgencias hospitalarias y el tener que recurrir a tratamientos más caros se debe a la inadecuación de esta asistencia primaria. Y, por qué no decirlo, también a partir de la inadecuación de la asistencia primaria las compañías de seguros hacen su agosto. No tenemos nada en contra de ellas, pero sí en cuanto que simbolizan, allí donde triunfan de una manera destacada, que hay descrédito sobre el sistema público y no olvidemos que el sistema público se financia con los impuestos de todos. La huida de la asistencia pública hacia la privada debiera darnos que pensar y debo también manifestarles —y en esto vuelvo a mencionar el ámbito donde mi partido ha tenido responsabilidades de gobierno— que en el ámbito vasco, al ser íntegramente público, prácticamente en un noventa y tantos por ciento, las compañías de seguros tienen poco terreno abonado.

Nos parece, señoritas, que la asistencia primaria es la puerta de entrada en el sistema público y hace falta que esta puerta sea buena e incluso que sea bonita para que todo el sistema funcione. Conocemos las quejas de los profesionales —respecto de los cuales no tenemos nada que decir, estamos criticando el sistema— y a ellas se refieren algunos de los puntos de la moción, como cuando se habla de las iniciativas tendentes a reducir el número o la relación TIS/cupo, o establecer medidas oportunas para evitar la interinidad —por cierto, pro-

blema que ustedes soportan no sólo en la asistencia primaria—, o proceder a la sustitución en los casos de bajas prolongadas, vacaciones o ausencias. Pero sobre todo nos interesan las quejas de los ciudadanos, lo que evidencia ese desamor de los ciudadanos hacia la atención primaria, dando prioridad en determinadas zonas a la asistencia pública.

No tenemos nada que objetar al contenido de la moción que se presenta por el Grupo Socialista, aunque en realidad no incluye nada que no sea lo habitual en cualquier plan de racionalización y mejora de una administración en clave de eficacia y eficiencia. Pudieran quizá haberse añadido más cosas, como la reestructuración de los puntos de atención, la implantación de módulos de gestión, la implantación o la profundización, allá donde ya exista como en el ámbito vasco, de la ventanilla única universal o la profundización en el concepto de historia clínica única. En todo caso, nos gustaría poder votar, repetimos, la moción que presenta el Grupo Socialista y por supuesto será, obviamente, con las enmiendas que ellos acepten. Desearíamos que en todo caso no quede, como en tantas ocasiones ocurre, en una moción del estilo de instar al Gobierno a hacer el bien y evitar el mal.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.

La señora **CASTRO FONSECA**: Gracias, señor presidente.

Intervengo, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para apoyar la moción que ha traído a esta Cámara el Grupo Socialista. Como en la interpelación ya expresé con bastante celeridad cuáles eran nuestros niveles de coincidencia, no voy a extenderme mucho. Únicamente quiero decir que todo el mundo sabe en esta Cámara que más allá de que tenemos que escenificar las diferencias y cada uno lo hace como sabe o como puede, no parece de recibo que cuando se trae una moción extensa se diga: es que ustedes traen aquí unos bodrios de moción y no se puede votar todo esto porque es muy extenso; y cuando es muy concreto porque es muy concreto. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo de seriedad y de rigor todos y sobre todo el partido que sustenta al Gobierno, porque esta es una moción necesaria. El modelo de atención primaria de salud tenemos que cuidarlo y creo que todo lo que sea venir a esta Cámara planteando las preocupaciones legítimas de los grupos para que el modelo persista, está bien. Porque no sé si se tiene claro qué decimos cuando nos referimos al modelo de atención primaria; no sé si se tiene claro que sigue primando el asistencialismo en un modelo en el que el asistencialismo no es lo que tiene que primar. Creo que

hay muchas cosas que resolver y pienso que las han explicitado ya todos los portavoces que me han precedido. Por ello, voy a decir únicamente que desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida participamos de la idea que ha animado al grupo proponente y compartimos con ellos, y también con el grupo de consenso de atención primaria que está trabajando en el tema, las cuestiones clave que plantea la moción, básicamente todo lo que tiene que ver con los requisitos que van a definir la calidad asistencial en la atención primaria de salud: el tiempo mínimo de consulta de diez minutos por paciente; el número máximo de pacientes atendidos en consulta por día que no superen los 25; que el número de pacientes asignados por médico de familia no sea superior a 1.200 y que las sustituciones se hagan al cien por cien. El señor Zambrano tendrá que convenir conmigo que a todos los ciudadanos y las ciudadanas españolas no nos tiene que contar nadie que no hay que ponerse enfermo en verano, lo que pasa es que la enfermedad no espera y enfermamos. Usted conoce tan bien como yo cuál es la situación y por lo menos hagamos caso a los científicos, que después del descubrimiento del genoma humano han resituado de nuevo la atención primaria de salud en el estrellato de lo que es el Servicio Nacional de Salud; después del descubrimiento del genoma humano nos han dicho que, a partir de ahora, la atención primaria será el futuro. Yo siempre he creído que la atención primaria es el futuro, pero ahora tengo una mayor convicción. En esa línea es en la que queremos trabajar. Para eso, señor Zambrano, lo único que queremos es que la Administración sanitaria de un modo inmediato dé respuesta satisfactoria a las demandas de los profesionales y de los grupos parlamentarios de la oposición, que tenemos aquí la oportunidad de sentir empatía con las demandas de los profesionales sin que nadie nos lo reproche y, además, defender nuestras propias posiciones.

El esfuerzo económico que tendría que hacer el Gobierno sería irrelevante en relación, naturalmente, con los presupuestos sanitarios; se estima que serían necesarios unos 12.000 millones de pesetas. Esto equivale exclusivamente, señor Zambrano, no se despiste, a la desviación del gasto farmacéutico de sólo dos meses, de enero y de febrero, después de que ustedes con mil medidas nos hubieran dicho que iban a disminuir el gasto farmacéutico. Pues bien, sólo con esa cantidad de dinero que corresponde, como digo, a la desviación del gasto farmacéutico de dos meses, ustedes darían satisfacción a los profesionales y relativa satisfacción a la Cámara, particularmente a mi grupo, que no coincide plenamente porque pensamos que son insuficientes las cuestiones que están planteando desde este grupo de consenso, pero que no obstante están en el camino de resolver los principales problemas, que tienen que ver básicamente con el excesivo número de pacientes por médico —no me voy a poner a explicar aquí las consecuencias que tiene porque son muchas y muy variadas—, el tiempo de espera —que

también es otro de los indicadores de calidad asistencial— y, por supuesto, con poner el dinerito que hace falta para resolver el problema.

Creo que en esto es en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, señor Zambrano, simplemente en esto, porque ustedes hablan de los profesionales, pero los profesionales están haciendo de burócratas y un 40 por ciento de su tiempo, que tienen que dedicárselo a los pacientes, lo están dedicando a la burocracia. Eso hay que resolverlo y quien gobierna ahora, señor Zambrano, es el Partido Popular, así que no apunte usted para acá porque tiene usted que apuntar justamente para la derecha, que coincide en este caso geográficamente en la Cámara con el partido político que gobierna en este país.

¿Qué espera Izquierda Unida? Que ustedes acepten la moción del Grupo Socialista, que nosotros vamos a apoyar votando favorablemente, y que estén atentos, naturalmente, a las exigencias y a las demandas de los profesionales, que son los que conocen mejor y en profundidad los problemas que de verdad tiene planteados en este momento la atención primaria de salud, y también los usuarios, señor Zambrano, que por desgracia tan bien conocen los problemas.

Interprétese este voto a favor de mi grupo parlamentario como un deseo inequívoco de la apuesta que ya hicimos en su día por la atención primaria de salud, interprétese también como una necesidad y una reflexión que tendremos que hacer en común, y parece que ustedes no están dispuestos a que esta reflexión sea en común. Bien, señor Zambrano, sé que tengo poco poder de convicción con ustedes, pero me gustaría que tuviera usted en cuenta que en nuestro ánimo sólo está la pretensión de mejorar los niveles de atención y, en definitiva, de dar una mejor respuesta sanitaria a los usuarios y usuarias de este país, que bien que se lo merecen y por la que además están luchando. Es decir, las movilizaciones de la calle no se las ha inventado ni el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ni ningún otro de la Cámara. Son los profesionales de la salud los que nos están indicando que estamos errando el camino si no nos paramos a preservar el modelo asistencial. Esto es lo que se ha reclamado hoy desde aquí, con mayor o menor fortuna, y esto es, señor Zambrano, lo que va a votar mi grupo parlamentario, un sí con mayúsculas a preservar este modelo asistencial que tanto trabajo nos costó poner en marcha en su día, hace ya más de 20 años, a la izquierda democrática y a los ayuntamientos democráticos de este país, que fueron los que, con la ayuda de los grupos y de los colectivos de mujeres del mundo, conformaron este modelo de atención primaria. Flaco servicio le haríamos hoy a esa experiencia democrática de la red paralela municipal y flaco servicio a las expectativas que hemos generado en el mundo los colectivos de mujeres trabajando específicamente en este tema si ustedes negaran la mayor y se empeñaran en decir que todo lo hacen bien. Estoy segura de que ustedes tienen voluntad política de hacerlo

todo bien, pero por desgracia no aciertan en todas las ocasiones, y en este caso, créame, señor Zambrano, la situación exige medidas urgentes y ya.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas planteadas, tiene la palabra el señor Arola.

El señor **AROLA BLANQUET**: Señor presidente, el Grupo Socialista se ve en la obligación de rechazar las enmiendas y, por tanto, pide que se vote la moción en sus propios términos.

Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Arola.

Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas a adoptar por el Gobierno para consolidar, profundizar y mejorar el nivel asistencial de atención primaria, muy especialmente en el ámbito del Insalud.

Comienza la votación. **(Pausa.)**

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 114; en contra, 145; abstenciones, 11.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación.

— **DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE SINIESTRALIDAD LABORAL. (Número de expediente 173/000059.)**

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Seguidamente vamos a debatir la moción que presenta el Grupo Parlamentario Mixto sobre política del Gobierno en materia de siniestralidad laboral. Tiene la palabra el señor Saura.

El señor **SAURA LAPORTA**: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, paso a defender la moción sobre siniestralidad laboral, consecuencia de la interpelación que realizamos la semana pasada. Comienzo mi intervención diciendo que Iniciativa per Catalunya-Verds apoyamos y nos solidarizamos con los actos y movilizaciones que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han planteado para el próximo viernes en respuesta al llamamiento de los sindicatos europeos en contra de los accidentes laborales.

Decía en la interpelación de la semana pasada que en esta legislatura han sido varios y diversos los debates que se han producido ya en esta Cámara sobre la siniestralidad laboral. Ha habido tres interpellaciones con sus consecuentes mociones, ha habido el debate de una iniciativa legislativa popular y, fuera de esta Cámara, también han existido movilizaciones importantes de los sindicatos como las dos huelgas generales en el sector de la construcción. Le decía la semana pasada al señor ministro que a pesar de la gravedad del problema, el Gobierno del Partido Popular continúa inactivo y pasivo, considerando este problema como secundario y no de primer orden. Le recordaba al señor ministro algunos datos que muestran la gravedad de la situación: más de cinco muertes diarias por accidentes laborales, más de un millón de accidentes al año, unas pérdidas que superan los dos billones y medio de pesetas al año y la mayor tasa de crecimiento de accidentes de todos los países de la Unión Europea; la siniestralidad laboral ha crecido el 51 por ciento mientras que la economía lo ha hecho el 17 por ciento en los últimos cinco años. Las personas que tienen contrato eventual, temporal o precario sufren tres veces más accidentes laborales que las personas que tienen contrato estable y más del 70 por ciento de las empresas españolas —dicen encuestas que se han realizado— no tienen hecha la evaluación de riesgos. También en el año 2001, según los datos de enero y febrero, la siniestralidad laboral sigue creciendo a un ritmo de aproximadamente el 10 por ciento. Si cabía alguna información más —porque el señor ministro parecía que no consideraba que esto era tan grave—, precisamente ayer pudimos leer en los medios de comunicación las declaraciones del director de la Agencia Europea de la Seguridad y Salud Laboral que decía —leo literalmente— que la siniestralidad laboral en España sigue siendo inaceptablemente alta y que había tres causas: la carencia histórica en el Estado español de una cultura de la prevención, el hecho de que la Ley de prevención de riesgos laborales no se ha puesto en práctica en su totalidad y algunos factores del reciente desarrollo económico-social. Pues bien, las propuestas que planteamos en nuestra moción intentan responder de forma genérica, no excesivamente concreta, a estas tres causas que el propio director de dicha Agencia destacaba ayer en los medios de comunicación.

Proponemos seis medidas, la primera de las cuales es que se dote el plan de formación básico, que desde hace dos años está pactado entre sindicatos, patronal y Administración. Es un plan que viene obligado por el artículo 19 de la Ley de prevención de riesgos laborales y ha de hacer posible que los 12 millones de personas que hoy no tienen formación en materia de salud laboral la tengan. Por tanto, nuestra primera propuesta es simplemente dotar presupuestariamente el plan de formación, que, insisto, ha sido pactado entre los agentes sociales y la Administración.

La segunda propuesta es que el Gobierno presente un proyecto de ley sobre la regulación de la subcontratación, especialmente en lo que hace referencia al sector de la construcción, en el que en estos momentos las subcontrataciones se encadenan una detrás de otra sin control ni límites y en la subcontratación existe una de las grandes causas de accidentes laborales.

La tercera propuesta está copiada o traducida literalmente de una de las recomendaciones del informe del CES, que ha hecho Federico Durán, su presidente, en el sentido de que se dote de medios humanos, económicos y materiales, de acuerdo con los parámetros europeos, al sistema de inspección de trabajo, que hoy muestra graves e importantes deficiencias.

Nuestra cuarta propuesta está en relación con el funcionamiento de las mutuas. La semana pasada comentaba al señor ministro la necesidad de democratizarlas, que para nosotros quiere decir dos cosas, que la dirección colegiada de las mismas sea paritaria entre empresarios y sindicatos y que exista la codecisión entre trabajadores y patronal a la hora de decidir a qué mutua se afilia la empresa.

La quinta propuesta insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para reducir la temporalidad y la precariedad laboral, que, como he dicho antes, es una de las causas importantes de siniestralidad laboral, y la sexta tiene que ver con la necesidad de desarrollar y ampliar el plan de actuación preferente en las empresas con mayor índice de siniestralidad laboral, dado que el 50 por ciento de los accidentes de trabajo se producen en el 2 por ciento de empresas.

En definitiva, son seis propuestas que creo que pueden tener el consenso de los grupos parlamentarios, ya que intentan hacer frente a un problema que a pesar de que hasta hoy el Gobierno y el Ministerio de Trabajo consideran que es secundario, sigue siendo sangrante en el mundo laboral.

Nada más. Muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.

Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Ruiz.

El señor **RUIZ LÓPEZ** (don Antero): Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy nos corresponde concretar los propósitos que hemos declarado hace unos días para solucionar el grave problema de la siniestralidad laboral que tenemos en España. No es la primera vez que en este plenario se plantean propuestas y mociones que buscan solucionar el problema de los accidentes laborales que cada año ocurren en nuestro país. Les recuerdo que somos el país de la Unión Europea con más accidentes laborales, no pudiendo sentirnos orgullosos ante este primer puesto. Precisamente hoy, en un diario madrileño

ño, se publica un informe de la Unión General de Trabajadores de Madrid dando datos sobre esta comunidad, que ponen de relieve que la siniestralidad laboral ha crecido un 144 por ciento en los últimos cinco años y que en ese mismo período se han producido 820 accidentes mortales. Por tanto, el tema que tratamos hoy, desgraciadamente, sigue salpicando las páginas de los periódicos de nuestro país, en este caso, como he dicho antes, de la comunidad de Madrid.

Nuestro grupo parlamentario ya presentó el 23 de mayo de 2000 una propuesta de moción con 14 medidas concretas, algunas de las cuales se incluirían perfectamente en la moción que nos presenta hoy Iniciativa per Catalunya-Verds. Nos felicitamos por ello, sin olvidar la preocupación que sentimos al pensar que ha pasado casi un año desde que nuestro grupo presentó las medidas a adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa la siniestralidad laboral en nuestro país y vemos que un año después es necesario volver a recogerlas y plantearlas, porque los índices de siniestralidad siguen subiendo y es responsabilidad de todos y del Gobierno adoptar medidas para reducirlos. Por eso deseáramos un poco de sensibilidad del Gobierno y del grupo que le apoya.

Señorías, además de la autosatisfacción sobre lo que se hace, sería exigible para todos nosotros la aprobación de nuevas iniciativas, nuevas medidas que, además de útiles, lanzaran a la sociedad un mensaje de firmeza, de un consenso institucional que a partir de una radical interpretación de la legislación, afronte un período de intervención excepcional y urgente en esta materia. Desde nuestro grupo, que apoya los contenidos básicos de la moción que hoy debatimos, queremos además presentar unas enmiendas a la misma que pensamos que la complementan y que mejoran su posibilidad de intervención en los aspectos más sensibles señalados en el debate anterior.

En primer lugar, insistimos en uno de los puntos que mencionábamos en nuestras medidas presentadas en mayo de 2000 y en las que incluimos la figura del delegado sindical en materia de salud laboral. Sabiendo que cada pequeña empresa no podría disponer de este delegado, los grupos de empresas organizados a través del sector y de un ámbito territorial sí que lo podrían tener. Deseamos enfatizar la necesidad de la existencia de una figura en materia sindical que garantice el cumplimiento de las funciones en la prevención de riesgos laborales. La participación activa sindical es un elemento de cooperación indispensable para el buen logro de objetivos en esta materia. Vigilancia, formación y concertación entre empresarios y trabajadores constituyen una de las terapias más efectivas para afrontar la cuestión de la siniestralidad. Compartimos con la moción la importancia de la formación como la mejor arma para evitar accidentes de trabajo en la empresa. La Ley de prevención de riesgos laborales prevé el derecho de los trabajadores a la formación masiva de nivel básico

sobre los riesgos que entraña su trabajo durante la jornada laboral y los empresarios tienen la obligación de facilitar estos programas de formación a sus empleados. Es importante que se incluyan en las campañas de divulgación no sólo los accidentes mortales o graves producidos en la empresa, sino también la forma de prevenirlos a través de diversos cursos impartidos por organismos como el Instituto Nacional de Empleo o la Fundación para la formación continua, completamente gratuitos para las empresas.

Proponemos en una de nuestras enmiendas referirnos a los trabajadores autónomos de carretera, olvidados en las propuestas que suelen formularse en esta materia y que, sin embargo, es otro de los sectores afectados por diversas situaciones y cuyo problema principal es la prolongada jornada laboral que desempeñan y que en la mayoría de los casos, además, ni se controla. Sabiendo que muchas veces es difícil para ellos mismos cumplir las mínimas normativas de prudencia en su trabajo, es necesaria la regulación de una medida que mejore estas condiciones y que se realice posteriormente una vigilancia seria y rigurosa del cumplimiento de dichas condiciones.

Por último, creemos que es necesario recoger un servicio especial de delitos en el ámbito laboral y me voy a referir una vez más al informe que esta mañana se publicaba en un diario madrileño por el sindicato Unión General de Trabajadores. Decía este sindicato que en esta materia, en su opinión, la Ley de prevención de riesgos laborales es un buen instrumento, pero la realidad es que en la actualidad sólo el 30 por ciento de las empresas madrileñas han elaborado un plan de prevención de riesgos laborales; un balance que en el caso de las pymes, pequeñas y medianas empresas, se reduce hasta el 8 por ciento; esto es, un 92 por ciento de cada 10 pequeñas empresas de la región no cumplen la ley. En ese sentido, señorías, deben estudiarse, conocerse y sancionarse rigurosamente todas aquellas imprudencias cometidas por las empresas que han originado accidentes mortales o muy graves. Es necesario concienciar a empresarios y trabajadores de la importancia de la información y de la formación, así como de la prevención de riesgos laborales, y es irresponsable que no se adopten las medidas necesarias para evitarlos aun conociéndolas. Eso es negligencia y tiene que llevarse a través de unos procedimientos mediante un servicio específico que proponemos. Es sorprendente que una de las causas de mortalidad más importantes en nuestro país sea la de mayor tolerancia jurídica que soporta. La imprudencia que causa la muerte, y especialmente cuando esta imprudencia se basa en el incumplimiento de normas legales de seguridad, debe ser perseguida y penada. Este servicio debería incluir una acción fiscal que de oficio o por denuncia investigara las múltiples situaciones de riesgo o incumplimiento que sin duda alguna existen. Conocemos el olvido de las normativas sobre prevención de acciden-

tes laborales que realizan tanto el mundo empresarial, para ahorrar costes, como los trabajadores, movidos por el miedo a la pérdida de su trabajo, pero el Gobierno no puede en ningún caso obviar la máxima responsabilidad que tiene ante este grave problema y por tanto debe tomar medidas como las presentadas hoy aquí, que formen, informen, prevengan, vigilen y garanticen la seguridad en el trabajo.

Al anunciar nuestro voto a la moción, esperando de los bancos de mi derecha una mínima sensibilidad sobre la cuestión, no dejo de señalar la especial responsabilidad que incumbe a las administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración central. Esta responsabilidad pública debe plasmarse en acciones concretas, mensurables y que atiendan al núcleo del problema.

Nada más y muchas gracias.

El señor **VICEPRESIDENTE** (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.

Grupo Parlamentario Socialista, señor González Vigil.

El señor **GONZÁLEZ VIGIL**: Gracias, señor presidente.

Señorías, la semana pasada, a raíz del debate de la interpelación presentada por Iniciativa per Catalunya-Verds, preguntábamos —y era una pregunta dirigida fundamentalmente al Grupo Parlamentario Popular— qué más hacía falta para que dicho grupo y el Gobierno se dieran cuenta de que es necesario salir de la pasividad existente ante el continuo crecimiento de los accidentes laborales en nuestro país y que son necesarias actuaciones concretas y urgentes que ayuden a frenar esa lacra. Ante esa pregunta, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular contestaba, como ya hizo en otra interpelación del Grupo Parlamentario Socialista formulada el día 7 de marzo, que van por el buen camino e instaba al Gobierno a seguir por el mismo. Ayer mismo, como ya ha señalado el señor Saura, se nos daba de nuevo la razón a los grupos que creemos que no se va por el buen camino, no el Grupo Popular. Ya se ha adelantado el señor Saura y ha leído las declaraciones que hacía el director general de la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral. No las voy a repetir; sólo añadiré que dice: La tendencia de la siniestralidad laboral en Europa es descendente. La tasa de siniestralidad laboral en España sigue siendo inaceptablemente alta. **(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)** Nos dice, por tanto, que no vamos por el buen camino, que es necesario introducir modificaciones. Nosotros también creemos que hay que modificarlo y por eso vamos a apoyar la moción presentada hoy ante esta Cámara, que recoge, entre otras, medidas que ya propuso el Grupo Parlamentario Socialista el pasado día 13 de marzo. Son medidas tendentes a garantizar el cumplimiento de la ley, a crear una cultura preventiva y a cam-

biar modelos de relaciones laborales que inciden de forma significativa en la alta tasa de siniestralidad. Señorías, la siniestralidad laboral no es sólo la consecuencia de un incumplimiento generalizado de las leyes, no es sólo una cuestión de vigilancia; es sobre todo la consecuencia de un modelo de competitividad, el que ha elegido el Gobierno del Partido Popular, basado en los bajos costes laborales, en la precariedad, en la inmigración clandestina y en el deterioro de las inversiones de capital. Esa es la auténtica responsabilidad del Gobierno. Ahora tienen la oportunidad de cambiarlo introduciendo las modificaciones necesarias en los debates sobre la reforma laboral para conseguir un modelo más solidario con los trabajadores, en el que se les garantice, como reivindican los sindicatos y otros grupos aquí presentes, un trabajo estable, sin riesgos y con derechos. Con la reforma que ustedes proponen no se va a conseguir el cambio, ya que se aumenta la temporalidad y se abaratan los costes laborales. Hay razones para ser más solidarios.

El crecimiento económico global de los últimos cinco años, periodo que ha coincidido con la vigencia de la Ley de prevención de riesgos laborales, ha sido de un 17,3 por ciento; sin embargo, los accidentes han aumentado en un 51,7 por ciento. Por otra parte, en los últimos años los beneficios empresariales han crecido una media del 30 por ciento; sin embargo, los salarios han subido por debajo del IPC. Por tanto, hay razones para ser solidarios con los trabajadores. El Gobierno se equivoca en una cosa, no compiten los salarios bajos, sino las empresas buenas y los productos de calidad. Los salarios bajos son pan para hoy y hambre para mañana. Difícilmente una empresa va a obtener el calificativo de buena y sus productos van a ser de calidad si sigue teniendo una alta tasa de siniestralidad laboral. Así pues, es necesario ir por otro camino, ya que si seguimos por el mismo, vamos a conseguir acabar el año 2001 con más de dos millones de accidentes laborales. Fíjense en lo que hemos conseguido hasta ahora. En primer lugar, en el año 1996 éramos el segundo país de Europa con mayor índice de incidencia en accidentes laborales, aventajándonos sólo Portugal. Hoy, por seguir el mismo camino, somos el primero, duplicando la media europea, con 7.073 accidentes por cada 100.000 trabajadores frente a los 4.089 de media, y alejándonos considerablemente de países como Inglaterra, Irlanda o Suecia, que no llegan a los 1.500. En segundo lugar, en el período 1996-2000, es decir, durante el mandato del Gobierno popular y habiendo entrado ya en vigor la Ley de prevención, los accidentes con baja han aumentado un 51,7 por ciento. En tercer lugar, durante los meses de enero y febrero de este año los accidentes con baja han aumentado un 10,1 por ciento respecto a los mismos meses del año anterior. Por tanto, no es difícil pronosticar que si seguimos por el mismo camino, como reiteradamente aconseja el Grupo Popular al Gobierno, podremos finalizar el año 2001, como he

dicho antes, con más de dos millones de accidentes. Señorías, es necesario modificar ese camino, cambiar el rumbo; es necesario aprobar y aplicar las medidas que venimos proponiendo los diversos grupos parlamentarios, porque si no nos cabe otro remedio que seguir creyendo que el señor Aznar, tal y como dijo en el año 1997 en el *Wall Street Journal*, produzca otro milagro o que él mismo sea el milagro para acabar con la siniestralidad laboral.

Gracias.

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señor González Vigil.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.

El señor **GRAU I BULDÚ**: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en la intervención sobre la fijación de posición de nuestro grupo en la interpelación que se presentó la semana pasada manifesté nuestro deseo de encaminar la vía de la atención a la prevención y los riesgos laborales por la senda del consenso; es decir, sacar todo el partido de un problema del cual no dudo de que en este caso estamos de acuerdo, y es que faltan elementos para dotarle de soluciones. Todos deseamos frenar la escalada de los accidentes de trabajo.

El señor Saura, en su interpelación, nos presentó una batería de cinco temas sobre los que debía recaer la atención del Gobierno y que eran, en su opinión, la temporalidad, la necesidad de unos planes de formación, la mejora de la inspección, el mejor funcionamiento de las mutuas y controlar la subcontratación, sobre todo en el sector de la construcción. Después del debate de la interpelación presentada por el señor Saura, hoy debatimos esta moción. Nos hubiera gustado una redacción más abierta, con mayor capacidad de integración de todas las posturas presentes en esta Cámara, estableciendo la vía de las acciones de prevención, la diferenciación de las tarifas según sectores, la fiscalidad coherente con las inversiones y gastos en materia de prevención y la programación de acciones de promoción y formación de la seguridad en el trabajo. No es coherente establecer una batería de medidas con penalizaciones o cargas de responsabilidad únicamente al empresario o al trabajador sin tener ninguna consideración hacia medidas que al tiempo ejercen un servicio de control y corresponsabilidad y no crear al mismo tiempo una conciencia social colectiva de la necesidad de poner entre todos el marco para evitar los accidentes laborales.

El Grupo Catalán (Convergència i Unió) ha presentado una enmienda a la propuesta del señor Saura a la que, partiendo de tres puntos literales, se le agregan otros cinco, en el sentido de buscar un consenso de los grupos de esta Cámara para crear de una vez por todas los elementos necesarios de una política real de corresponsabilidad entre esta Cámara, el Gobierno y todos

los agentes sociales. Si pensamos en un sistema participativo de las aportaciones a la Seguridad Social, no podemos hacerlas sobre la base de un reparto indiscriminado de las tarifas a todos los sectores productivos. La información de la siniestralidad y las estadísticas de los últimos años nos deben dar una pauta para las tarifas de cotización de cada sector a la Seguridad Social. En este caso, lo que se intenta es repercutir de forma más exacta los costes sin alterar los otros sectores productivos. Paralelamente, por la vía de las tarifas, según el sector, y de reducciones de cuota por no siniestralidad, debemos actuar selectivamente estableciendo para cada sector —por ejemplo, la marina, la pesca, la construcción, la minería, etcétera— las cotizaciones que les correspondan en función del nivel sectorial de accidentes laborales. No creemos oportuno tampoco recargar las bases de cotización con carácter general a todas las empresas o la aplicación del principio *bonus malus*, como el que se aplica por las aseguradoras de automóviles, según la siniestralidad. Hemos presentado una enmienda al acuerdo social sobre pensiones de reducción del 0,25 por ciento por casos de no siniestralidad. También entendemos que el mayor coste que se produce por casos de siniestralidad debe ser cubierto por la Inspección de Trabajo y por las sanciones a las empresas que por falta de prevención o por reiterados siniestros no cumplan las funciones de prevención y seguridad.

En el impuesto sobre sociedades también proponemos permitir un nuevo nivel de deducciones aplicables en virtud de las inversiones realizadas para el fomento de la prevención de riesgos laborales y la mejora de la salud laboral, incluidos los programas de formación del personal. Si las acciones son correctas, el ahorro de costes compensará la reducción de cotizaciones. Insistimos en solicitar el traspaso de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a las comunidades autónomas como un instrumento de acercamiento a la gestión patronal, que son las mutuas. Consecuentemente con lo que se indica en la disposición adicional quinta de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, territorializar el presupuesto de la fundación para promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo entre los ámbitos territoriales autonómicos que tengan asumidas competencias de ejecución de la legislación laboral en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Nuestra enmienda asume los puntos 3, 5 y 6 de la propuesta del Grupo Iniciativa-Els Verds del señor Saura, entendiéndolo que es prioritario el compromiso y el consenso de los grupos de esta Cámara y, al mismo tiempo, incentivar de forma clara las inversiones y programas de la empresa en la prevención. No me negarán que cualquier inversión en prevención que redunde en beneficio de la reducción de accidentes también redundará en ahorro de los gastos de la Seguridad Social. Es posible una discrepancia en la propuesta sobre la gestión territorializada de las mutuas con respecto al pro-

ponente que marca como vía la gestión compartida por los sindicatos, pero es más importante para éstos estar fuera de la gestión para poder reclamar más y mejores acciones preventivas de los accidentes laborales sin la responsabilidad que tienen los empresarios para dotarse de servicios competentes y a los gobiernos autonómicos de establecer los mecanismos de solidaridad en el ámbito territorial y estatal mancomunadamente con el Gobierno.

Señoras y señores diputados, estamos aquí para abrir vías de diálogo que nos conduzcan a acciones cuyos resultados sean la reducción de los accidentes laborales y, al mismo tiempo, que no creen una disfunción en el sistema frente a la solución del problema de la siniestralidad. Nuestras propuestas no van contra los posibles acuerdos que los agentes sociales puedan establecer con el Gobierno, sino que van en el sentido de marcar un consenso de objetivos abierto para que el sentir de esta Cámara sea atendido y participe del espíritu de estos acuerdos.

Muchas gracias.

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señor Grau.

¿Grupos que desean fijar posición? **(Pausa.)**

Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pérez.

El señor **PÉREZ CORGOS**: Gracias, señora presidenta.

Señorías, como ya han insistido otros portavoces que han intervenido con anterioridad, no es la primera vez que debatimos en esta Cámara el grave problema de la siniestralidad laboral. Problema que, lejos de suscitar la resignación o la pasividad del Gobierno, es afrontado por el Gobierno del Partido Popular y por el Grupo Parlamentario Popular como uno de los graves problemas de la situación laboral española. No podía ser de otra manera, no podemos desconocer la realidad, no lo vamos a hacer ahora ni lo hemos hecho nunca. Pero ello no quiere decir que podamos admitir que desde la tribuna del Congreso de los Diputados se transmita a la sociedad, primero, que hay fórmulas mágicas para acabar con el problema y, segundo, que el Gobierno mantiene una actitud pasiva y un no hacer nada en esta materia. Señorías, el Gobierno no practica en esta materia la política del avestruz, no mira para otro lado. Quizás quienes asistían en otro momento a la destrucción de empleo sí hacían este tipo de políticas. Y digo que no existen fórmulas mágicas, porque incluso el informe Durán, que tantas veces se ha mencionado a lo largo de las intervenciones que se han producido en esta tribuna, no aporta ninguna especificidad nueva sobre la materia, sino que aporta una serie de recomendaciones. Recomendaciones que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular, va a trasladar de inmediato a la mesa de diálogo social sobre prevención de riesgos laborales. Señorías,

lo sabe toda la Cámara, uno de los ejes del Gobierno del Partido Popular ha sido el apoyo al diálogo social, ha sido tratar de hacer las cosas no sólo desde el Gobierno, sino desde la sociedad. Y en ese respeto al diálogo social hemos tratado de ser siempre escrupulosos. Se nos pide hoy que legislemos, obviando los resultados que se pueden alcanzar en esas mesas del diálogo social y, por otra parte, se nos critica que cuando hay inacción desde esas mesas del diálogo social procedamos a legislar.

En la moción del señor Saura se recomienda una serie de puntos, de estrategias, que no voy a criticar porque sean malas, pero creo que algunas de ellas son de imposible cumplimiento. El señor Saura pide la reducción de la temporalidad y de la precariedad, pero no estamos hablando de sinónimos, señor Saura. Una cosa es la precariedad y otra la temporalidad. Ya nos gustaría a todos los españoles y a todos los europeos acabar con la temporalidad en el empleo, algo de muy difícil consecución, y más en los tiempos de economía globalizada que estamos viviendo. Tampoco creo que sea la temporalidad en el empleo —se lo dije el otro día— la causa fundamental de la siniestralidad en determinados sectores. Ocurre que determinados sectores son más peligrosos que otros y es ahí donde existe una mayor incidencia de los contratos temporales.

La regulación de la subcontratación es una medida estrictamente laboral que se contiene en su moción, una medida que incluso ha sido objeto de una iniciativa popular que no prosperó. Le decía el otro día que la subcontratación es un instrumento de la economía de mercado, y la propia Ley de prevención de riesgos laborales establece la responsabilidad solidaria de la empresa principal y de las empresas contratistas y subcontratistas por el incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos laborales.

En cuanto al Plan nacional de formación, efectivamente está contemplado en la propia ley, plan que se ha elaborado y se ha presentado a la Comisión Nacional sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, pero es cierto que no tiene dotación presupuestaria. Es difícil alcanzar acuerdos para la dotación presupuestaria, aunque el Ministerio de Trabajo sigue trabajando. El propio ministro proponía el otro día una solución que seguramente se abordará en la mesa de diálogo social, la de que parte de los fondos de la Forcem se puedan destinar a cubrir el importe de este Plan nacional de formación en el trabajo dirigido a trabajadores, delegados de prevención y pequeños empresarios. En cuanto al nuevo modelo organizativo de la Inspección de Trabajo, hemos crecido en el número de inspectores de trabajo, aunque ya sé que no son suficientes. También es cierto, y estamos todos de acuerdo, que no por tener más inspectores se van a alcanzar mejores cifras en materia de siniestralidad laboral.

Son tres los pilares básicos de este modelo organizativo: la conferencia sectorial de asuntos laborales, que

se ha reunido en el mes de diciembre del año pasado y que ha planteado una serie de objetivos a alcanzar en este año 2001; los acuerdos bilaterales, que S.S. sabe que se han alcanzado ya con 15 comunidades autónomas, con 13 de ellas ya están firmados y publicados, con dos están firmados y pendientes de publicación y falta solamente alcanzar el consenso con el Gobierno vasco, que en esta situación de incertidumbre política que vivimos es más difícil de lograr. Y hay un plan de acción sobre la gestión preventiva de las empresas de más de 500 trabajadores y con un ámbito superior al de una comunidad autónoma que afectará a 903 empresas y que no se fijará en el plan de prevención por centro de trabajo, algo que no permite la ley, sino en el plan de prevención de la empresa.

Dirección colegiada de las mutuas. Estoy seguro de que también en la mesa del diálogo social se va a abordar este asunto. Hasta ahora era algo inviable porque toda la financiación corría a cargo de los empresarios, pero a partir de ahora, que asumen la gestión de contingencias comunes que se cofinancian con cuotas de trabajadores, seguramente habrá que abordarlo. Respecto a la ampliación del plan de acción preferente, usted sabe que este plan se ha extendido a todas las comunidades autónomas y que el Gobierno sigue trabajando en su extensión y perfeccionamiento.

Señorías, les decía al principio que el Grupo Parlamentario Popular no esconde la cabeza. Yo creo que vamos por el buen camino y el buen camino es dejar que hablen los agentes sociales y, a partir de ahí, traer a esta Cámara, para legislar, los acuerdos que hayan alcanzado. Por tanto, vamos a rechazar la moción que ha presentado S. S., sin perjuicio de que volvamos a insistir en el tema de la siniestralidad laboral.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.

Señor Saura, tiene la palabra a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.

El señor **SAURA LAPORTA**: Gracias, señora presidenta.

Aceptaría las dos del Grupo Socialista, que son de adición, y las tres de Izquierda Unida. Convergència i Unió hace una propuesta de ocho puntos, tres de los cuales están contemplados en la propuesta inicial, por lo que también aceptaría los cinco puntos de Convergència i Unió que no están recogidos en la moción inicial. Por tanto, asumiría el conjunto de enmiendas que han presentado los tres grupos parlamentarios.

La señora **PRESIDENTA**: Muchas gracias, señor Saura.

Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en materia de siniestralidad laboral, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.

Comienza la votación. **(Pausa.)**

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 109; en contra, 143.

La señora **PRESIDENTA**: Queda rechazada la moción.

Se suspende la sesión, que se reanudará mañana, a las cuatro de la tarde.

Eran las nueve y cincuenta y cinco minutos de la noche.

Edita: **Congreso de los Diputados**
Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00. Fax: 91 429 87 07. <http://www.congreso.es>

Imprime y distribuye: **Imprenta Nacional BOE**
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid
Teléf.: 91 384 15 00. Fax: 91 384 18 24

Depósito legal: **M. 12.580 - 1961**